

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD DE POSGRADO

**“Cómo se llegó a la dictadura consentida. El
gobierno de Alberto Fujimori: 1990-1992”**

TESIS

**Para optar el grado académico de Magíster en Sociología con Mención en
Sociología Política**

AUTOR

Santiago Pedraglio Mendoza

ASESOR

César Germaná Caveró

Lima – Perú

2014



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DÉCANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD DE POST GRADO

ACTA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN SOCIOLOGÍA MENCIÓN EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA

En Lima, a los diez días del mes de Julio del año dos mil catorce, reunidos en la Sala de Grados de la Unidad de Post-Grado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a horas 4:00 p.m., bajo la Presidencia del Mg. CÉSAR AUGUSTO ESPINOZA CLAUDIO y con la concurrencia de los demás Miembros del Jurado Examinador, se inició la ceremonia invitando al graduando **SANTIAGO PEDRAGLIO MENDOZA**, para que hiciera la exposición de la Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Sociología, mención en Sociología Política. Siendo el trabajo titulado:

“CÓMO SE LLEGÓ A LA DICTADURA CONSENTIDA. EL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI: 1990-1992”

A continuación fue sometido a las objeciones por parte del Jurado. Terminada esta prueba y verificada la votación; se consignó la calificación correspondiente a:

B MUY BUENO 18

Por tanto el Jurado, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, acordó recomendar a la Facultad de Ciencias Sociales para que proponga que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgue el Grado Académico de Magíster en Sociología, mención en Sociología Política, al Bachiller SANTIAGO PEDRAGLIO MENDOZA. Siendo las 5:00 p.m. y para constancia dispuso se extendiera la presente Acta y firmaron:

Mg. César Augusto Espinoza Claudio.
PRESIDENTE

Dr. Francisco Felipe Quiroz Chueca.
MIEMBRO

Dr. Luis Santiago Pacheco Romero.
MIEMBRO

Dr. Julio Víctor Mejía Navarrete.
MIEMBRO

Dr. César Armando Germana Caverio
ASESOR



Dr. ROGER ALBERTO BUENO MENDOZA
DIRECTOR (e)

PABELLÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI – CIUDAD UNIVERSITARIA

Teléfono: 6197000 Anexo 4003, 4004. Lima – Perú.

Correo: upgccss@unmsm.edu.pe, upgccss@yahoo.es, upgccss@hotmail.com

Web: <http://sociales.unmsm.edu.pe/>

ÍNDICE GENERAL

Introducción	1
 Capítulo I. Antecedentes de la excepcionalidad	 17
1.1. Definición de excepcionalidad	19
1.2. Cómo interpretaron los principales actores políticos y sociales la excepcionalidad que vivió el Perú y su posible uso político	22
1.3. La guerra y el número de muertos se disparan la década de 1980	25
1.4. Constitución de los comandos político-militares o los pequeños golpes de Estado anticipados (las “dictaduras comisariales regionales”)	26
1.5. El Estado no podía garantizar la autoridad ni la vida de las autoridades locales y regionales	28
1.6. Partidos políticos sin capacidad para enfrentar a Sendero Luminoso.....	32
1.7. Crisis de 1988: los “paquetazos” apristas.....	33
1.8. Hiperinflación e incertidumbre: destrucción del empleo y reconfiguración de la sociedad.....	35
 Capítulo II. “Y la violencia y el desorden crearon a Fujimori...”	 38
2.1. El triunfo de Alberto Fujimori, la derrota de las opciones “populares” y el cambio de humor de la población	38
2.2. El canto del cisne del reformismo y el triunfo del aventurero	40
2.3. Entre Sendero y la hiperinflación. Un desconocido quiebra el sueño de los señores	42
2.4. Los resultados electorales primera vuelta: Fujimori sustituye a Izquierda Unida	43
2.5. Entre la segunda vuelta y la organización del gobierno del orden	46

2.6. Entre la segunda vuelta y el 28 de julio de 1990: los primeros ajustes del proyecto individual del presidente electo	52
Capítulo III. Nuevo presidente, nueva economía, nuevo poder (agosto 1990-febrero 1991)	62
3.1. El <i>shock</i> : entre la implacable medida y el deseo ferviente del orden	62
3.2. La crítica a las viejas guardias partidarias y el “partido del país”	65
3.3. El proyecto del “partido del país” comienza a andar	69
3.4. La población bendice el <i>shock</i> : el primer gran éxito del movimiento por el nuevo orden	70
3.5. Confrontación hacia adentro, paz y sumisión hacia afuera	75
3.6. El quiebre del primer bloque de alianzas profujimori se profundiza	78
3.7. El fin del primer programa económico, el golpe de timón neoliberal y la “democracia participativa” como comparsa	82
Capítulo IV. El neoliberalismo toma el mando	87
4.1. Las primeras señales del neoliberalismo como política de Estado	87
4.2. Tres rasgos complementarios de la ofensiva neoliberal: la conducta dubitativa de la derecha política frente a Fujimori, el orden sobre todas las cosas y la búsqueda del apoyo campesino para luchar contra Sendero	91
4.3. El primer aniversario, saldo positivo y siempre a la ofensiva política: la “liberalización” a fondo de la economía y la continuación de la guerra interna	98
4.4. Correlaciones nacionales de proyección internacional	101
4.5. El impacto del fujimorismo divide a los partidos	103
4.6. Las luchas sindicales y la disputa por el control de las organizaciones populares	105
4.7. Se fortalece la alianza gobierno-militares-campesinado-rondas y continúa la liberalización de la economía	108
4.8. Matanza de Barrios Altos y control presidencial de las Fuerzas Armadas	111
4.9. Ejecutivo versus Congreso, y los pilares del gobierno: el pueblo y las Fuerzas Armadas	117
Capítulo V. El autogolpe	121
5.1. La epidérmica resistencia democrática	125
5.2. Los medios escritos opinan	128

5.3. Instituciones sociales y Congreso defenestrado reaccionan.....	130
5.4. La presión internacional: su primer cronograma de “restablecimiento” democrático	132
5.5. Minicrisis y avances en el control del Estado.....	135
5.6. El autogolpe y la nueva legislación de excepción (con los militares en el mando)	136
5.7. Sin plan de retorno a la democracia: sobre todo, ganar tiempo.....	138
 Capítulo VI. La consolidación del autogolpe	 139
6.1. Detención de Guzmán y legitimación del autogolpe	142
6.2. Convocatoria al Congreso Constituyente Democrático	145
6.3. La frustrada insurgencia institucionalista.....	147
 Conclusiones.....	 149
 Bibliografía.....	 161

INTRODUCCIÓN

Con este trabajo se busca aportar al estudio de los regímenes autoritarios y dictatoriales en el Perú: cómo se gestan y legitiman, según la coyuntura. La sociedad peruana está marcada históricamente por este tipo de gobiernos, con un fuerte componente caudillista. Muchas generaciones han crecido bajo regímenes dictatoriales o autoritarios, conducidos por gobiernos militares o civiles, liderados en ambos casos por caudillos, lo que ha sido gravitante en la formación de un tipo de cultura política y en el posterior ejercicio de una ciudadanía limitada.¹ Por ello, consideramos pertinente estudiar, como un ejemplo de gestación y encubramiento de una dictadura y de un caudillo, los dos primeros años de gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-1992), desde su inicial elección como primer mandatario, en julio de 1990, hasta la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en setiembre de 1992, pasando por el decisivo momento del autogolpe de Estado del 5 de abril de ese mismo año.

Este breve e inicial período gubernamental tuvo características muy particulares que se manifestaron en dos aspectos centrales que sobrepasaron, por su impacto, su repercusión estrictamente coyuntural: 1) el cambio radical del modelo económico y la consecuente fundación de la legitimidad del Estado en el éxito y supremacía de la economía; y 2) la consolidación, desde el gobierno, de un discurso político antiinstitucional y antipartidario, y la consiguiente reconstrucción política autoritaria

¹ “El caudillismo republicano nació asociado con los jóvenes militares que, como Gamarra o Santa Cruz, lucharon por la Independencia, pero luego adquirió vida propia y se convirtió en el paradigma de cualquier liderazgo político, acatado hasta por los más acérrimos antimilitaristas. El mejor ejemplo que podríamos citar en el siglo pasado es la figura, para muchos romántica y conmovedora, de Nicolás de Piérola. Sin caudillo no existía posibilidad de eficacia en la política nacional. [...] El caudillismo asentó sus raíces antes que en una ideología, en una mentalidad colectiva” (Flores Galindo 1999: 33).

del poder político central. Asimismo, lo particularizan cuatro hechos de carácter más definidamente coyuntural, pero no por ello menos decisivos: 1) el renovado incremento de la violación de los derechos humanos; 2) la captura del líder del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, Abimael Guzmán; 3) la construcción de una amplia alianza de poderes fácticos; y 4) el mayoritario apoyo de la opinión pública al autogolpe de Estado. Dicha coyuntura definió un escenario de cambios acelerados con efectos de larga duración, como se puede comprobar más de veinte años después del golpe del 5 de abril de 1992.

Por qué la legitimación del gobierno y del golpe de 1992

El deseo de una mayoría de peruanos de conquistar la tranquilidad pública, en un país atravesado por la crisis, justificó una política que puso como eje de su preocupación el logro del orden público y la derrota de la subversión armada, a cualquier precio.

Este deseo explica por qué la mayoría de la población acepta la sorpresiva y drástica política del *shock* impuesta en agosto de 1990 por el primer gabinete de Alberto Fujimori; por qué, también a partir de 1991, acepta el desmontaje del Estado creado veinte años antes por el gobierno de Juan Velasco —es cierto que con resistencias, sobre todo del movimiento sindical—; y por qué apoya después, y de manera abrumadora, el golpe de Estado del 5 de abril, el cierre del Parlamento y la intervención del Poder Judicial.

La aparente contradicción entre el apoyo de la población al autogolpe y su convicción de que la democracia es el mejor tipo de gobierno —datos recogidos en las encuestas de la época— se explica porque la mayoría de peruanos consideraba necesarias medidas de excepción, como el golpe de Estado, para recuperar el orden, lo que pasaba, en gran medida, en el primer semestre de 1992, por derrotar a Sendero Luminoso. Para amplios sectores, el golpe tenía una función instrumental; era una decisión última, ante la falta de legitimidad del Congreso, del Poder Judicial y de los partidos políticos, para cumplir con la meta de conquistar el orden y otorgarle viabilidad al país.

Alberto Fujimori recibió, con el golpe de abril de 1992, una tarea “impuesta” por buena parte de la población: acabar con Sendero Luminoso y la subversión armada, en general, e imponer orden. No importaba, para ese amplio sector, que su gobierno tuviera un carácter autoritario ni si eliminaba algunos derechos básicos. No fue un encargo en el marco del Estado de derecho vigente, a diferencia de los comandos político-militares, impuestos gradualmente durante la década de 1980, desde el gobierno inaugural de la democracia de la década, el de Fernando Belaúnde.

Esta misión encargada tácitamente a Fujimori explica por qué, después de transcurridos varios años de la “puesta en orden” del país, un sector de la población seguía manifestando su fidelidad con el corrupto dictador: de alguna manera, él cumplió con el compromiso encomendado.

Más aún, Fujimori nunca apareció, frente a la mayoría de la población como un personaje de la “clase política” tradicional, ni como un político profesional ni como un títere de los poderes fácticos internos. Sus abiertas pugnas con la jerarquía de la Iglesia católica a causa de las políticas de control de la natalidad, o sus continuas referencias a los “blanquitos de Miraflores”, afirmaron la idea de un “chino” marginal, recién llegado a la política, que podía enfrentarse al poder tradicional y vencerlo.

En suma, en sus dos primeros años el gobierno de Fujimori tuvo como fin supremo la instalación del orden en el país, no solo controlando la hiperinflación —y sus estragos en la macroeconomía del país y en la vida cotidiana—, sino también recuperando el monopolio de la violencia para el Estado nacional, un asunto decisivo.²

Se puede afirmar, además, que su propósito fue la instalación de un nuevo orden,

² Como afirma Max Weber, “[...] el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de determinado territorio —el “territorio” es un elemento distintivo—, reclama para sí (con éxito) el *monopolio de la violencia física legítima*. [...] El Estado moderno es una asociación de dominación de carácter institucional, que ha intentado, con éxito, monopolizar la violencia física legítima dentro de un territorio como medio de dominación y que, para este fin, ha reunido todos los medios materiales de funcionamiento en manos de sus dirigentes” (Weber 2007: 88).

basado no solo en el nuevo modelo económico y en la derrota de la subversión armada, sino también en la modificación sustantiva del diseño del Estado. Estos propósitos del jefe de Estado fueron respuesta, bajo modalidades dictatoriales, al cumplimiento imperativo del quehacer político³ en una situación de crisis extrema, como la que vivía el Perú.

En este sentido, hay que distinguir los dos primeros años del gobierno de Fujimori de su práctica posterior, en particular de la vinculada a la organización sistémica de la corrupción. En este contexto, y al margen de las opiniones sobre el golpe de Estado y la crisis de representación de los partidos políticos, debe afirmarse rotundamente que Fujimori sí hizo política durante sus primeros dos años como presidente (y durante toda la década de su gobierno), pues cumplió con un aspecto esencial: instaurar el orden básico en el país. En la macroeconomía, controlando la arrasadora hiperinflación; y en la recuperación del monopolio de la violencia, con la derrota de Sendero.

Durante los dos primeros años de su gobierno Fujimori no fue, en modo alguno, un exponente de la “antipolítica”.⁴ La vocación “antipartido” y antiinstitucional de

³ Como sostiene Norberto Bobbio cuando trata de definir el propósito principal o mínimo de la política, “[...] es lícito hablar del orden como fin mínimo de la política, porque este es, o debería ser, el resultado directo de la organización del poder coactivo, porque, en otras palabras este fin (el orden) se unifica con el medio (el monopolio de la fuerza) en una sociedad compleja, basada en la división del trabajo, en la estratificación de clases, en algunos casos incluso en la superposición de gentes y razas diferentes. Solo el recurso, en última instancia, a la fuerza, impide la disgregación del grupo, el retorno, como habrían dicho los antiguos, al estado de naturaleza” (Bobbio y otros 2008: 1220).

⁴ Carlos Iván Degregori indica que “Lynch define la antipolítica como un conjunto de discursos y prácticas que satanizan la política como actividad pública e institucionalizada y pretenden su reemplazo por mecanismos ‘naturales’ como el mercado, cuya vigilancia está a cargo de técnicos que brindan soluciones prácticas a problemas específicos” (Degregori 2000: 20). Lynch, por su parte, luego de sostener que “Se funda entonces [en el gobierno de Fujimori] un régimen no solo antipartido sino también antipolítico, que condena cualquier intervención directa de las formaciones políticas y el estado en la sociedad y particularmente en la esfera del mercado”, deja claro que “Con esto no estamos diciendo que el régimen no haga política, sino que en vez de hacerla a la luz pública la hace en las sombras, buscando que los actores, cuando de tomar decisiones importantes se trata, estén lo más lejos posible de los ciudadanos. Este régimen antipolítico [...] basa su permanencia en que no resurjan las viejas formaciones partidarias o surjan nuevas formas de hacer política que cuestionarían su legitimidad y constituirían una alternativa con solo aparecer como agrupaciones creíbles y capaces de ejercer influencia” (Lynch 1999a: 263).

Fujimori —y, en general, su evidente voluntad y vocación antidemocrática manifestada desde los primeros meses— no pueden llevar a la conclusión de que Fujimori “no hizo política”. Se puede afirmar, ciertamente, que no hizo política democrática, que hizo política autoritaria y antiinstitucional, que liberó las fuerzas del mercado con escasa o ninguna regulación, que su liberalismo económico redujo drásticamente el ámbito de la política y le otorgó una legitimidad economicista al Estado; pero política sí hizo, si se toman como referencia las definiciones de Weber y Bobbio. Más aún, enfrentó dos problemas centrales del país, que comprometían el orden y la vigencia del Estado.⁵

Es interesante anotar como la crítica a lo “antipolítico” y la constatación de la imposibilidad de eliminar a la política (o lo político), tratando de ocultarla y de satanizarla (para que no intervenga en el mercado), tiene una doble vertiente: una vinculada al pensamiento socialdemócrata o democrático radical —como puede ser el de Nicolás Lynch— y otra conservadora, relacionada con la importancia del Estado y del orden, en el marco de una concepción amigo-enemigo de la política.

Nuestro objetivo principal es, pues, demostrar que el propósito principal del gobierno de Fujimori antes del autogolpe del 5 de abril de 1992 fue la constitución e instalación de un orden político basado fundamentalmente en el establecimiento de un nuevo modelo económico, que pusiese orden a la macroeconomía y le otorgase al Estado una legitimidad basada sobre todo en la primacía de la economía;⁶ y la

⁵ Leo Strauss, comentando el concepto de política de Carl Schmitt y su consiguiente crítica al liberalismo, desde un punto de vista conservador, afirma que “La tarea de Schmitt está determinada por el fracaso efectivo del liberalismo. Las circunstancias que motivaron dicho fracaso son las siguientes: el liberalismo negó lo político; pero con ello no lo eliminó del mundo, sino que solo lo ocultó; llevó a que, a través de un lenguaje antipolítico... se practicara la política. De modo que el liberalismo no mató lo político, sino solo la comprensión de lo político, la sinceridad respecto de lo político [...] Para eliminar la cortina de humo que el liberalismo ha puesto entre nosotros y la realidad, es necesario mostrar lo político como tal y de modo tal que sea imposible de negar. En primer lugar, hay que sacar a lo político de la oscuridad con la que el liberalismo lo ha disimulado, y traerlo a la luz, para que pueda plantearse seriamente la cuestión del Estado” (Meier 2008: 135).

⁶ La importancia del legitimar en la economía neoliberal la viabilidad del Estado peruano tiene, hasta la actualidad, un gran impacto y vigencia. Todas las fuerzas políticas aparecen condicionadas por este corsé. Michel Foucault analiza con brillantez como el Estado alemán occidental refundado después de la II guerra mundial tuvo este sello indeleble: “En ese nuevo régimen económico político alemán empezaba a darse cierto funcionamiento

aplicación de una nueva estrategia de lucha contra la subversión armada —este aspecto es preocupación central del presente texto—, en alianza con los poderes fácticos, las Fuerzas Armadas y grandes sectores de la población, en particular de zonas rurales.

Como parte de este proceso, el gobierno de Fujimori aplicó ajustes económicos drásticos y transformó en política nacional la excepcionalidad e inconstitucionalidad de los comandos políticos militares que se instalaron en la década de 1980 en las zonas de mayor conflicto armado interno. Para ello, elaboró un discurso contra los partidos políticos (y la llamada élite política) y contra instituciones básicas del Estado, como el Congreso y el Poder Judicial, recogiendo el malestar de la población y legitimando, mediante esta vía, las medidas de excepción que fue adoptando.

Fujimori: heredero, producto y creador de una época de inestabilidad y crisis

Debe señalarse que el inicial control de la inflación y el ordenamiento de algunos aspectos centrales de las finanzas públicas, entre agosto de 1990 y abril de 1992, fue un factor que consolidó la confianza de un importante sector de la población en el entonces presidente constitucional y en su decisión de dar un golpe de Estado para acabar con la subversión armada. El golpe tuvo, en este aspecto central, una connotación y raíz estrictamente políticas. Iniciada la resolución de la hiperinflación, había llegado el momento de terminar con la subversión armada.

Como se podrá apreciar en el desarrollo del presente trabajo, la gran mayoría de medidas políticas que afectaron la relación entre el Estado y el mercado —y entre el Estado, los trabajadores y el mercado— fueron aceptadas, en sus diversas modalidades y a iniciativa del Poder Ejecutivo, por el Congreso de la República, dominado por fuerzas no oficialistas, en su gran mayoría provenientes de la derecha

económico que estaba en el fundamento mismo del Estado, de su existencia y de su reconocimiento internacional. Se forjaba ese marco económico y solo después aparecía de alguna manera la legitimidad del Estado. [...] Por lo tanto, para entrar en el juego político de la nueva Alemania, era menester que el SPD adhiriera a esas tesis del neoliberalismo; si no a las tesis económicas, científicas o teóricas, sí al menos a la práctica general en cuanto práctica gubernamental de ese neoliberalismo” (Foucault 2008: 115).

(Fredemo), del APRA e incluso de algunos sectores de la izquierda. En el Congreso, el fujimorismo contó con el apoyo de las fuerzas mencionadas para aprobar el cambio sustantivo del régimen económico y social imperante en el país. El neoliberalismo se impuso como base de la nueva legitimidad del Estado. Baste recordar que los decretos que iniciaron la privatización de las empresas del Estado o que eliminaron la estabilidad laboral la acordó y ratificó el Congreso en 1991.

En este contexto, las negociaciones y presiones del partido aprista por salvar a sus principales líderes de acusaciones constitucionales o de acusaciones penales —en especial al expresidente Alan García— son solo un detalle en el marco de la nueva correlación política que se había impuesto en el país desde 1990. Dicho de otra manera, Fujimori no requirió el golpe de Estado para imponer el llamado modelo neoliberal y el consenso de Washington.

El proceso de quiebre se define y consolida cuando, en diciembre de 1990, el Congreso se resiste a otorgarle atribuciones de excepción para combatir a Sendero Luminoso y al MRTA. Es cierto que, solo días después de haber asumido el gobierno, Fujimori inició una abierta y agresiva campaña contra los partidos políticos, el Congreso, el Poder Judicial y las instituciones del Estado de derecho. Es cierto también que llamó abiertamente a un acuerdo entre su gobierno y los militares, desde el segundo semestre de 1990 y de manera explícita en diciembre de 1991, el día de la conmemoración del Ejército Peruano. Pero el factor que justificó el autogolpe y le dio la oportunidad de concretarlo fue la negativa del Congreso de convertir formalmente al gobierno de Alberto Fujimori en una dictadura comisarial, en el sentido que define el filósofo alemán Carl Schmitt.⁷ Los mismos partidos que habían aceptado la instalación de los comandos político-militares en gran parte del territorio del país, instalando formas de “dictaduras comisariales regionales”, no

⁷ “La dictadura comisarial suspende la Constitución *in concreto*, para proteger la misma Constitución en su existencia concreta. Desde siempre se ha repetido el argumento (sobre todo y con mayor frecuencia desde Lincoln) de si la existencia de la Constitución está amenazada, debe asegurarse mediante una suspensión temporal de la misma. La dictadura protege una determinada Constitución contra un ataque que amenaza echar abajo esta Constitución [...] En consecuencia, la dictadura es un problema de la realidad concreta, sin dejar de ser un problema jurídico” (Schmitt 2007: 181).

estuvieron dispuestos a crear un “gobierno político-militar” a nivel nacional, que fue en el fondo a lo que aspiró Fujimori a fines de 1991.

Con el autogolpe, esta estrategia de lucha antsubversiva y el privilegio del mantenimiento del orden interno se radicalizaron. En 1992 Fujimori no pretendía defender la Constitución de 1979, pero justificó el golpe levantando la defensa de una serie de valores establecidos en la cultura política peruana vinculados a los derechos individuales e, implícitamente, a la llamada Constitución histórica del Perú. Sendero era una amenaza porque pretendía modificar radicalmente las bases del Estado y de la sociedad peruana, bajo una modalidad dictatorial extrema, que bien podría denominarse totalitarismo, y que causaba temor e incertidumbre a la gran mayoría peruanos. Siguiendo a Schmitt, se puede afirmar que Sendero Luminoso pretendía crear, en medio de la profunda crisis que vivía el país, una “dictadura soberana”⁸. Por esta razón era, en esas circunstancias, una pugna de vida o muerte.

Durante los dos gobiernos democráticos anteriores, de Fernando Belaúnde y de Alan García, el territorio peruano fue crecientemente copado por comandos políticos-militares, en los que la autoridad civil regional y local elegida se subordinó abiertamente a la autoridad militar. Estos regímenes de excepción de carácter regional —y en esencia inconstitucionales, como el Tribunal Constitucional los calificó en el 2004—⁹ se fueron imponiendo sobre todo de 1983 a 1990, en aras de, presuntamente, combatir de manera eficaz a Sendero Luminoso y al MRTA.¹⁰

⁸ Para Schmitt, “la dictadura soberana ve [...] en la ordenación total existente la situación que quiere eliminar mediante su acción. No suspende una situación existente valiéndose de un derecho fundamentado en ella, y, por tanto, constitucional, sino que aspira a crear una situación que haga posible una Constitución a la que considera como la Constitución verdadera. En consecuencia no apela a una Constitución existente, sino a una Constitución que va a implantar. Habría que creer que semejante empresa quedaría sustraída a toda consideración jurídica” (Schmitt 2007: 182-183).

⁹ La sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de marzo del 2004 declarando fundada, en parte, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra diversos artículos de la Ley 24150, o ley de los comandos político-militares, del 5 de junio de 1985, modificada por el Decreto Legislativo 749, es un reconocimiento explícito, por el propio Estado, del carácter esencialmente inconstitucional de la referida norma.

¹⁰ Alberto Flores Galindo se refirió con mucha precisión a los efectos de la implantación de los comandos políticos militares sobre el régimen político: “Los militares han asumido la lucha contra la subversión. Esto significa que el Estado de derecho ha dejado en la práctica de funcionar en las zonas declaradas en emergencia. Allí no cuentan los alcaldes, los jueces,

Esos regímenes de excepción fueron aprobados por el Poder Ejecutivo y ratificados por los congresos democráticamente elegidos de ese entonces. Las autoridades político-militares tenían, en la teoría y sobre todo en la práctica —más allá incluso de la ley de por sí cuestionable—, atribuciones extraconstitucionales sobre la vida y la libertad de las personas. Un caso dramático son las múltiples violaciones a los derechos humanos: torturas, asesinatos y desapariciones forzadas que se produjeron en los territorios bajo su jurisdicción. La creación de estos organismos —y no solo la declaración de los estados de emergencia— se justificaban implícitamente, para un sector de la población y del poder constituido, por la existencia de movimientos subversivos armados que querían destruir el Estado de derecho (y, sobre todo, constituir un “nuevo Estado”). Estos comandos —en la práctica, gobiernos regionales con superpoderes, es decir, “dictaduras comisariales regionales”—, bajo conducción militar, tenían esos encargos, y su mandato estaba delimitado en el tiempo por iniciativa y acuerdo del Ejecutivo y los congresos respectivos.¹¹

Es interesante notar, además, que desde 1990, es decir, desde el inicio mismo del nuevo gobierno, la población apoyó también mayoritariamente una medida excepcional: el *shock* de agosto de 1990. Puede decirse, a partir de estas constataciones, que un amplio número de habitantes del Perú, condicionados por un realismo político extremo, estaban dispuestos a suspender un número importante de sus derechos e incluso a sacrificar sus condiciones económicas de vida en aras de superar la situación de excepcionalidad que se vivía.

La aceptación de medidas dictatoriales o económicas de carácter extremo también se explica por motivos que no tienen relación directa con la posición democrática o antidemocrática de las personas. Dicho de otra manera: la democracia no es un valor que se sostiene en todo momento y en cualquier circunstancia. La política está muy

los civiles. Únicamente militares cuyos actos se ven protegidos por un fuero privativo: del militarismo hemos pasado a la militarización. El tránsito ha sido posible precisamente bajo los gobiernos declaradamente democráticos, originados en las ánforas y autodefinidos como respetuosos del orden jurídico. La imagen del péndulo se desdibuja, así como se aproximan, en la práctica, civiles y militares” (Flores Galindo 1999: 39).

¹¹ Ver García Sayán 1987, Eguiguren 1986, Gonzales Ojeda 1991 y Rubio 1999.

lejos de tener un desarrollo lineal.¹² Esto se dio a entender en el comportamiento de la población durante la coyuntura 1990-1992, pero también la que el país soportó —consciente o indolentemente— desde 1983, cuando Belaúnde decretó el estado de emergencia, suspendió garantías, alentó una política de “tierra arrasada” contra poblaciones campesinas, y creó en Ayacucho el primer comando político-militar.

¿Cómo un “aventurero” de la medida política inicial de Alberto Fujimori pudo aprovecharse de estas circunstancias? Sin duda, supo explotar, con gran audacia y sin escrúpulo alguno, la coyuntura de excepcionalidad que vivía el país, alimentada por el conflicto militar interno, la grave crisis económica (de la que recién se comenzaba a salir) y el desprestigio de las instituciones democráticas y de los partidos políticos. Su alianza con los militares y la creación de un equipo de “inteligencia” (que funcionó como su principal operador político), además del poderoso y activo soporte de los poderes fácticos, sobre todo empresariales y financieros, y del gobierno de Estados Unidos, hizo posible que estableciera una amplísima y sólida alianza política.

Coyuntura y golpe

El golpe de Fujimori se produce contra la precaria institucionalidad democrática que había dado luz verde, durante la década de 1980, a los gobiernos regionales de excepción. Sin embargo, el golpe representó un “encargo” extremo que la mayoría de la población le entregó, por fuera y en contra de un régimen democrático que, además de haber llevado al país a la crisis económica y estar sustentado en partidos políticos desprestigiados, había dado luz verde a una lucha contrasubversiva de carácter excepcional que tenía como uno de sus fundamentos básicos la ruptura de la Constitución y del Estado de derecho.

¹² “Lo más importante y decisivo de todo para poder persuadir y aconsejar correctamente es conocer todas las formas de gobierno y distinguir los usos, normas y ventajas de cada una. Pues todos se dejan convencer por lo que les es ventajoso, y la salvación de la ciudad es ventajosa. [...] Por lo tanto, resulta evidente que debemos distinguir los usos, normas y ventajas de cada una de acuerdo con su fin, habida cuenta de que se elige sobre la perspectiva de un fin” (Aristóteles 2009: 92-93).

La implacable actuación de Sendero Luminoso y la política de contrainsurgencia del Estado se convirtieron crecientemente en el centro vivo de la vida política del país.¹³ En regiones enteras, el Congreso de la República, las autoridades municipales, el Poder Judicial e incluso el Ejecutivo y los partidos políticos le habían entregado el poder a las fuerzas militares y policiales por ser las únicas que podían hacerle frente a la subversión armada, sobre todo a Sendero Luminoso.

No es por ello gratuito ni casual que cuando Alberto Fujimori dio el golpe en abril de 1992 recibió el apoyo abrumador¹⁴ de una población que seguía considerándose democrática según las mismas encuestas que constataban el apoyo al golpista, y continuaba aspirando a que en el país primara la democracia.

El comportamiento estrictamente histriónico del Congreso ante el golpe de Estado de 1992, como defensor de la legalidad constitucional, con el nombramiento como presidente constitucional de Máximo San Román, fue de una transparencia diáfana, por su debilidad y caricatura.

Dicho de otra manera, no es el Congreso de la República —ni el Senado ni la Cámara de Diputados— el que firma su acuerdo con el golpe, como sí lo hizo sistemáticamente con los anticonstitucionales comandos político-militares de los años ochenta y noventa, sino la gran mayoría de la población, la que a través de una

¹³ La incertidumbre —a nivel nacional— y el miedo —en muchas regiones del país— se convirtieron en un motor de la acción política; en una fuerza a favor del Estado para que este conquiste el orden. La situación que se instaló en el Perú trae a colación un comentario de Robin sobre Hobbs, quien tomó como una de sus principales fuentes para el desarrollo de su teoría política la violencia y la inestabilidad que en sus tiempos vivió Inglaterra: “Hobbs organizaba sus argumentos sobre el miedo no solo para superar el *impasse* del conflicto moral, también para derrotar a las legiones revolucionarias que en aquella época contendían contra la monarquía británica” (Robin 2009: 69). Robin añade: “Para Hobbs, la vida es el máximo bien, no porque los hombres lo deseen o busquen siempre, tampoco porque les produzca el mayor placer; de hecho, observaba, la vida puede ser muy dolorosa, lo que razonablemente puede llevar al hombre a matarse. La vida es el mayor bien porque hace posible la búsqueda y el logro de todos los otros bienes” (Robin 2009: 73-74).

¹⁴ A Fujimori le iba bien en las encuestas de opinión: en el verano de 1992 su popularidad superaba el 50%; sin embargo, inmediatamente después del golpe y de cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial superó el 80%. Un espectacular crecimiento de cerca de 30 puntos porcentuales.

especie de sistema plebiscitario implícito (las encuestas, por ejemplo) le “encargó” a Fujimori poner las cosas en orden.

Por eso la aparente contradicción que reflejaban encuestas, no es tal: la población prefería la democracia (entendida probablemente como elección del presidente y libertad de prensa y de expresión), pero le encargaba a un dictador —con algunos reparos y limitaciones— poner orden en el país, para, precisamente, poder vivir en un futuro en Estado de derecho o, por lo menos, sin el riesgo que representaba la eventual la victoria de Sendero Luminoso.

Sin embargo, las propias limitaciones del régimen de facto —producto del tipo de “encargo” mayoritario pero informal de la población y, sobre todo, de la presión internacional—, obligaron a Fujimori a buscar una legitimidad “democrática”. Esto se expresó en la aceptación de convocar al llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD), que se encargaría de dotar al país de una nueva Constitución y de funcionar como nuevo Congreso. El hecho de que Fujimori se viera obligado a convocar la elección del CCD, en noviembre de 1992, y a dotarse consiguientemente de una nueva legalidad (y también legitimidad), a través de la nueva Constitución, fue su modo de redefinir su *sui generis* carácter de “dictadura comisarial”, alejándose de formas estrictamente tiránicas¹⁵ o dictatoriales.¹⁶

Paralelamente, la “misión principal”, es decir, la primera causa por la cual la población aceptó el golpe, se cumplió en buena medida con la detención de Abimael Guzmán en setiembre de 1992. Si, hipotéticamente hablando, Fujimori no hubiera logrado este gran éxito, es muy probable que su gobierno no hubiera concluido a

¹⁵ En el sentido que indica Aristóteles, refiriéndose a la monarquía, es decir, a la concentración del poder en una persona: “Si se ejerce de acuerdo con alguna normativa, es un reino; si se ejerce sin limitaciones, una tiranía (Aristóteles 2009: 93).

¹⁶ De acuerdo con la definición de Giovanni Sartori: “Dictadura es, para nosotros, una forma de Estado y una estructura del poder que permite su uso ilimitado (absoluto) y discrecional (arbitrario). El Estado dictatorial es el Estado inconstitucional, un Estado en el cual el dictador viola la Constitución, o escribe una Constitución que le permita todo” (Sartori 2003: 191).

finis del año 2000 sino tiempo antes, y sin la aureola de triunfador que aún mantiene para algunos.¹⁷

El asunto que decide “oficialmente” el golpe de Estado es la necesidad de obtener poderes para combatir a Sendero Luminoso, más allá de la Constitución; y con esto, la obtención de un espacio fuera de todo control para el núcleo básico de poder liderado por Fujimori-Montesinos.

Vigencia del problema (o la herencia de la resolución autoritaria de una crisis)

Varios hechos de actualidad le dan vigencia a nuestro tema de estudio. En primer lugar, a más de diez años de la caída del régimen analizado (septiembre del 2000), el fujimorismo, su líder y, sobre todo, el modelo político-económico impuesto en el país siguen teniendo una presencia activa e decisiva. Contrariamente a otros proyectos políticos y económicos que desaparecen al retiro de su líder del poder, la herencia de Fujimori sobrevive. La importante votación nacional obtenida por su hija en las elecciones presidenciales del 2011 —lo que permitió que el fujimorismo se convirtiera en la segunda fuerza política del Parlamento—, la tendencia a gobernar el país en la excepcionalidad, y el modelo económico neoliberal como fuente de la legitimidad del Estado, son muestras vigorosas de tal vigencia.

Manifestación de esta vigencia es también el amplio consenso en torno al régimen económico implantado por Fujimori desde 1991, continuado sin interrupciones por los gobiernos sucesivos, incluso en democracia. Más aun, su continuidad se ha convertido en una condición *sine qua non*, en la práctica, para las opciones políticas que participan en la escena electoral, incluso para el nacionalismo, a diferencia de otros países de la región. El presunto éxito del crecimiento económico del país está anclado en el imaginario popular y, sobre todo, en las élites políticas y económicas en las reformas neoliberales iniciadas por el gobierno de Fujimori entre 1990 y 1992.

¹⁷ Las encuestas de opinión aplicadas de abril a setiembre de 1992 indican que, después de la abrumadora aprobación inicial, un sector importante fue asaltado por las dudas sobre la conveniencia o no del golpe que había instalado a Fujimori en el poder de manera dictatorial.

De manera simultánea, como producto del cambio del modelo económico y del consiguiente crecimiento de la economía, sobre todo durante la última década, ha ganado partida de ciudadanía en importantes sectores de la opinión pública la ideología individualista del “emprendedor popular” como camino para el éxito.

Con el fujimorismo se instaló y se mantiene vigente, de manera predominante, una ideología básica profundamente conservadora que tiene como punto de apoyo principal el temor al desorden, y consiguientemente al cambio del modelo económico y al fortalecimiento de la sociedad, en particular si estos están asociados a grupos y cambios radicales e incluso moderados. No decimos que es una opinión unánime, pero sí abrumadora en los principales grupos de poder político, económico y mediático, y también en importantes sectores de opinión ciudadana.

Criterios metodológicos y fuentes de la investigación

En cuanto a la metodología, este trabajo se basa en el análisis de la coyuntura: la actuación de los principales actores de la etapa en cuestión, la evolución de las relaciones de fuerza, la definición de sus intereses, los momentos de quiebre y cambio, la situación de las cosas y las tendencias predominantes.

¿Cómo definir el *análisis de la coyuntura*? Según Sinesio López, punto de vista que compartimos, “no existe un análisis inocente de coyuntura. La forma de escribir la historia viva e inmediata revela no solo una forma particular de comprenderla sino también expresa el modo concreto de hacerla por parte de quien la escribe. El análisis de la situación actual, las tareas y la táctica son momentos de un mismo proceso de creación de la historia” (López 1979: 24). Es cierto, como señala Sinesio López, que el análisis de la coyuntura no es “inocente”, no solo en la interpretación de los acontecimientos y en la selección del período estudiado, sino además en la organización del relato y del discurso global interpretativo. Sin embargo, esto no implica falta de rigor en el uso de las fuentes ni interpretación arbitraria de los acontecimientos.

Es importante subrayar que, en esta metodología de análisis, el acontecimiento marca la coyuntura, se constituye en su aspecto más visible, pero “solo puede ser explicado

por la coyuntura de un modo directo y por la historia una vez integrado en el largo plazo” (Delich 1977: 14).

La coyuntura suele imponerse al observador por la fuerza y/o riqueza del acontecimiento: “la coyuntura es disimulada, triturada y transformada en una secuela de episodios cuyo eje es la diada poder político-oposición política; el episodio cotidiano o semanal -patrimonio del periodista— que registra la evolución de las relaciones de fuerzas, se convierte en la medida del espacio político” (Delich 1977: 11). La neutralidad en este campo de la ciencia es imposible y ocupa un lugar en la lucha política (López 1979: 24).

Para el trabajo se usaron como fuentes principales: a) investigaciones oficiales, como el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, leyes y resoluciones del Tribunal Constitucional; b) noticias, columnas de opinión, declaraciones y artículos informativos publicados por la prensa de la época (principalmente en los diarios *El Comercio*, *La República* y *Expreso*, y las revistas *Sí* y *Caretas*, los de mayor índice de lectoría en esos años); y c) investigaciones académicas que analizan el período estudiados.

La tesis se divide en seis capítulos. En el primero se describe la situación de excepcionalidad que vivió el Perú del año 1990 al 1992, en los ámbitos político, económico, social y militar. Esta situación tuvo sus inicios en la acción armada de Sendero Luminoso (abril de 1980), y después, de manera simultánea, se agudizó con el agravamiento incesante de la crisis económica, sobre todo a partir de 1987-1988.

En el capítulo segundo se explica la coyuntura electoral durante los comicios de 1990, en particular las semanas comprendidas entre la primera y la segunda vuelta. Los hechos nos permiten afirmar que el triunfo del entonces desconocido Alberto Fujimori y la derrota de Mario Vargas Llosa constituyó la última gran resistencia de las fuerzas políticas y sociales que pretendían mantener reglas económicas y políticas instauradas durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, o de aquellas fuerzas políticas que pretendían impulsar cambios radical-revolucionarios desde el interior del sistema político.

En los capítulos tres y cuatro se analizan las acciones de Alberto Fujimori como Presidente en su primer año de gobierno; sobre todo, se describen las medidas económicas, como el anuncio del *shock* que representó la verdadera inauguración del nuevo régimen. Asimismo, se describen los hechos más importantes ocurridos en su primer año de gobierno en cuanto a la lucha contra el terrorismo, las violaciones a los derechos humanos, la ofensiva militar y las pugnas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Se precisa cómo a partir de febrero de 1991 el gobierno asume a plenitud un rumbo neoliberal, con el cambio de gabinete y el ingreso de Carlos Boloña como ministro de Economía y Finanzas.

En el capítulo cinco se analiza el golpe de Estado. Se describe la débil resistencia democrática, el comportamiento de los medios de comunicación y la reacción de personalidades e institucionales sociales, así como las acciones del gobierno para negociar con la presión internacional, que desembocaron en la convocatoria del Congreso Constituyente Democrático.

En el capítulo seis se explica cómo se consolidó el régimen surgido del golpe de Estado, y presenta los hechos que le dieron legitimidad, como la captura del líder de Sendero Luminoso y la instauración del Congreso Constituyente Democrático. Finalmente, se presentan las principales conclusiones de la tesis.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES DE LA EXCEPCIONALIDAD

Entre 1990 y 1992 el Perú vivió una especial situación de excepcionalidad en los ámbitos político, económico y militar¹⁸ que tuvo sus orígenes durante la década anterior. Tuvo sus comienzos, más precisamente, en el inicio de la acción armada de Sendero Luminoso (abril de 1980) y en la consiguiente respuesta política y militar del Estado. Solo unos años después, se agudizó esta situación excepcional con el agravamiento incesante de la crisis económica y el surgimiento imparable de la hiperinflación, sobre todo a partir de 1987-1988.

Sendero Luminoso consiguió entre los años 1980 y 1983 derrotar política y militarmente a la Policía Nacional dentro del territorio que comprendía su llamado

¹⁸ Como expresión de la creciente excepcionalidad Fujimori incrementa, en noviembre de 1991, el poder de los comandos políticos militares: “El decreto legislativo 749 ampliaba las prerrogativas de los comandos político-militares en las zonas de emergencia. Establecía que dichos comandos, en su facultad para conducir las acciones de desarrollo en la zona bajo su jurisdicción, contarían con los recursos económicos, financieros, bienes y servicios, y con personal dispuesto por las autoridades políticas, las de los organismos públicos, las de los gobiernos regionales y locales. Reiteraba también la subordinación de la PNP a los CPM, precisando con mayor detalle el alcance de la misma y ampliando sus competencias a materia de lucha contra el narcotráfico. Ello aseguraría, de acuerdo con el decreto, la erradicación del terrorismo y del narcotráfico. La ley 24150 de junio de 1985 establecía entre las atribuciones del comando político-militar la de “asumir el comando de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que se encuentran en su jurisdicción y/o las que le sean asignadas” (artículo 5, inciso a). El decreto legislativo 749, en cambio, precisaba que sus atribuciones incluían la de tener bajo su Comando a los miembros de la Policía Nacional del Perú que presten servicios en las zonas de su respectiva jurisdicción, quienes cumplirán las instrucciones y disposiciones que en materia de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico emita el Comando Político Militar” (Reátegui 2009: 180).

Comité Principal: los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, en especial en las zonas rurales de esas regiones.

Desde el Estado, los primeros brotes de excepcionalidad se dieron en enero de 1983 con la intervención de los militares en Ayacucho. La decisión del gobierno de Fernando Belaúnde, al aprobar la participación directa de los militares en el conflicto armado, no tuvo otro propósito que paliar la derrota policial, y enfrentar y derrotar —se creyó que rápidamente— al entonces casi desconocido pero creciente Sendero Luminoso. La decisión de que ingresen Fuerzas Armadas no previó el conjunto de las consecuencias: aumento exponencial de muertos y maltratos a la población, evidente desconocimiento del enemigo al que tenían que enfrentar y apropiación por los militares de grandes porciones del poder político, sobre todo en los territorios sometidos al conflicto armado.

En el plano económico, la excepcionalidad tuvo su desembalse drástico e inicial en 1988, cuando colapsó el programa económico calificado como *heterodoxo* o *populista*, aplicado por el primer gobierno de Alan García (1985-1990). Este hecho propició el aumento exponencial de la inflación, la reconfiguración de la sociedad y el quiebre de la estructura laboral y productiva del país.

En el aspecto político se alcanzó un grado de excepcionalidad extrema¹⁹ entre la campaña electoral presidencial de 1990 y la detención de Abimael Guzmán, en setiembre de 1992, pasando por el autogolpe de Estado del 5 de abril de este mismo año. La situación de excepcionalidad extrema que vivió el país no concluyó en 1992, con el autogolpe, sino —en sus aspectos más excesivos— en 1995, con la segunda elección de Alberto Fujimori, porque ésta sirvió para legitimar el golpe de Estado ejecutado tres años antes y, sobre todo, la nueva Constitución aprobada en 1993.

¹⁹ El informe de la CVR considera este mismo período (1989-1992) como de “polarización extrema” (CVR 2003: tomo III, 73).

1.1. Definición de *excepcionalidad*

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se refiere al período marzo de 1989-setiembre de 1992 (fecha de detención del jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán), como de “crisis extrema, ofensiva subversiva y contraofensiva estatal” (CVR 2004: 72). En un esfuerzo por llamar la atención sobre la crisis que vivía el Perú, la CVR señala: “El año 1989 fue uno de los más difíciles de nuestra historia republicana, pues significó el clímax de una crisis económica casi sin antecedentes y marcó el inicio de un período de extrema agudización del conflicto armado interno. Ese año se produjo un nuevo giro en la guerra interna, debido, principalmente, a las decisiones y acciones de dos de los principales actores [PCP-Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas]” (CVR 2004: 72).

Es interesante anotar el énfasis de la CVR cuando trata de explicar el “nuevo giro” del PCP-SL: “durante su primer Congreso, definió como nuevo objetivo de su plan de ‘guerra popular’ que el ‘equilibrio estratégico remeciera todo el país’” (CVR 2004: 72). Como consecuencia de esta decisión, SL trasladó su ofensiva a los centros urbanos, especialmente a Lima, cuando se constata cómo “incrementó notablemente sus ataques y actos terroristas, endureciendo su relación con la población en la sierra rural y en la selva, por un lado, y movilizándolo sus bases urbanas hacia la realización de ataques y atentados más violentos, frecuentes y visibles, por otro. Con esta decisión se iniciaba el segundo ‘pico’ estadístico de víctimas en la guerra interna” (CVR 2004: 72).

Si se conjuga el incremento de la violencia interna, el esfuerzo de SL por conseguir el “equilibrio estratégico”, su creciente presencia propagandística y armada en los centros urbanos, con la crisis económica y la incapacidad del gobierno para controlarla —hecho que se produjo en simultáneo con el rompimiento de la alianza política del gobierno aprista con los grandes empresarios, sintetizado en la estatización de la banca—, se puede afirmar que el Perú ingresó en un momento en que el poder político se expresaba de manera directa, con débiles canales de representación y una muy baja legitimidad social. Las formas de intermediación y representación propias de la democracia liberal se hacían cada vez más tenues y

frágiles, abriendo el espacio para que las fuerzas crudas y “puras” se expresaran de manera incontrolable²⁰.

Como diría Carl Schmitt con agudeza, a propósito de las situaciones de excepción y de la “dictadura comisarial”: “quien domine al estado de excepción, domina con ello al Estado, porque decide cuándo debe existir este Estado y qué es lo que la situación de las cosas exige. Así, todo derecho termina por ser referido a la situación de las cosas” (Schmitt 2007: 49). La situación crecientemente se definía a favor del más fuerte, del que tenía más poder²¹. Desde 1987 hasta fines de 1992 el Perú estuvo marcado por una confrontación que tenía como particularidad su definición en el contexto propio de una situación de excepción. La comprensión de Schmitt sobre la resolución de estos momentos puede ayudar a entender la gravedad de la crisis: “En los asuntos públicos, en el derecho de guerra, de misión diplomática, municipal y estatal, no decide la *aequitas*, sino la *vis dominationes*, es decir, alianzas, soldados y dinero. Donde todo depende del estado de cosas concreto y del éxito concreto a alcanzar, la diferencia entre lo justo y lo injusto se convierte en una formalidad inútil, si es que no se incluyen en el cálculo, como una circunlocución por razones de conveniencia o como expresión de las representaciones de lo justo y lo injusto, dominantes alguna vez en los hombres” (Schmitt 2007: 50).

²⁰ La construcción de la excepcionalidad es posible rastrearla durante la década de 1980: “El artículo 211, inciso 20 (*de la Constitución*), otorgó al presidente la capacidad de “dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso”. Los alcances de este artículo fueron establecidos a lo largo de la década de 1980 por un proceso que Eguiguren llama “mutación constitucional” (Eguiguren 1990: 215). El presidente Fernando Belaúnde, por su parte, dictó 667 medidas extraordinarias al amparo de este artículo, y 1,033 fueron dictadas por García. El artículo 231 dio al Ejecutivo la facultad de decretar el estado de emergencia, prorrogable cada sesenta días sin la aprobación del Congreso, y de decretar el estado de sitio, cuya prórroga requería la aprobación del Congreso (ver Kenney 1997: 79).

²¹ Hannah Arendt (1998) discrepa de la concepción del poder basada en última instancia en la violencia, con una larga tradición en el pensamiento político, representada, entre otros, por Schmitt, Max Weber y Carlos Marx, y antes por Nicolás Machiavello y Thomas Hobbes. Arendt considera que se debe distinguirse entre *poder*, *fuerza* y *potencia*; y que, a diferencia del pensamiento político predominante, el *poder* es esencialmente consenso.

La opinión de Schmitt (bastante cercana en este punto al clásico concepto marxista de situación revolucionaria)²² no tiene por qué desvincularse de la importancia de la legitimidad que tuvieron los actos de fuerza utilizados en esa situación excepcional que vivió el país. No estaban en juego solamente la violencia física ni quién tenía o podía utilizarla más y mejor, sino quién tenía el mejor control del conjunto de los instrumentos de poder, en los que la violencia física es un componente fundamental. Esos años condensaron de manera particular no solo la lucha del Estado contra los grupos subversivos sino también la confrontación entre el gobierno aprista, representante de un desarrollo capitalista nacional, y los grandes empresarios, crecientemente inclinados hacia una propuesta neoliberal.

En este contexto, las Fuerzas Armadas, debido a su importancia decisiva para controlar el territorio, y la subversión armada, adquirieron creciente autonomía —en particular las Fuerzas Armadas— y se convirtieron ambos en actores políticos decisivos. La opinión pública jugó un papel importante pero pasivo; no fue un actor que definiera el rumbo de lo que Schmitt denomina “la situación de las cosas”. La opinión pública solo adquirió protagonismo decisivo cuando se manifestó de manera organizada, no solo a través de las movilizaciones empresariales —en alianza con los grandes medios de comunicación—, sino vía las rondas campesinas o comités de autodefensa cuando se trató de controlar el territorio en su lucha contra el PCP-SL.

²² Recuérdese, por ejemplo, el siguiente texto de Lenin: “¿Cuáles son, en términos generales, los signos distintivos de una situación revolucionaria? Estamos seguros de no equivocarnos al señalar estos tres signos principales: 1) La imposibilidad para las clases dominantes de mantener su dominio en forma inmutable; tal o cual crisis en las “alturas”, una crisis de la política de la clase dominante, abre una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución no basta que “los de abajo no quieran” vivir como antes, sino que hace falta también que “los de arriba no puedan vivir” como hasta entonces. 2) Una agravación, superior a la habitual, de la miseria y las penalidades de las clases oprimidas. 3) una intensificación considerable, por las razones antes indicadas, de la actividad de las masas, que en tiempos “pacíficos” se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por la situación de crisis en conjunto como por las “alturas” mismas, a una acción histórica independiente. Si a estos cambios objetivos, independientes no solo de la voluntad de tales o cuales grupos y partidos, sino también de la voluntad de estas o aquellas clases, la revolución es, por regla general, imposible. El conjunto de estos cambios objetivos es precisamente lo que se llama situación revolucionaria. Esta situación se dio en Rusia en 1905 y en todas las épocas revolucionarias en Occidente; pero también existió en la década del 60 del siglo pasado en Alemania, len 1859-1861 y en 1879-1880 en Rusia, sin que hubiera revoluciones en esos casos” (Lenin 1915).

Los sindicatos, los gremios populares y profesionales, los partidos, así como los organismos representativos del Estado, caso el Congreso de la República, tenían un papel crecientemente marginal. La crisis de excepcionalidad hizo que los actores que tenían capacidad de decisión se fueran reduciendo y que su esfuerzo y lucha por influir en el curso de “la situación de la cosas” se instalará por fuera de la democracia representativa y sus organismos, e incluso de la Constitución. Ese fue el caso del Poder Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas y Policiales, de los empresarios movilizadores, del PCP-SL y de los comités de autodefensa en los ámbitos rurales.

1.2. ¿Cómo interpretaron los principales actores políticos y sociales la excepcionalidad que vivió el Perú y su posible uso político?

La crisis económica, la inflación galopante²³, la agresiva acción armada de Sendero Luminoso y la importante implantación de la Izquierda Unida en determinadas organizaciones sociales y zonas populares del país, hicieron pensar a múltiples sectores políticos —no solo a Sendero y a algunos sectores de la izquierda legal, sino también a militares conservadores, admiradores de Augusto Pinochet, que en ese mismo período elaboraron el famoso “Plan Verde”— que era posible que la polarización política izquierda-derecha se convirtiera en la predominante, en revolucionaria.

Dicho de otra manera, hubo diferentes sectores políticos —y no solo en Sendero o entre los militares— que consideraron seriamente la posibilidad de una situación revolucionaria, que podía ser utilizada a su favor por las organizaciones subversivas o incluso por la Izquierda Unida a través de las elecciones o de formas mixtas de lucha de masas y electorales para obtener el poder.

Si se usara la antigua y clásica definición del político revolucionario ruso Vladímir Ilich Lenin, el Perú vivió en esos años una coyuntura aparentemente cercana a una “situación revolucionaria”, porque la crisis económica empobreció aún más y de

²³ Debe recordarse para calibrar los niveles extremos de excepción, la situación económica y política que el gobierno del APRA dejó como herencia: “El gobierno de García Pérez dejó el país sumido en una profunda crisis económica y social, con una inflación anual superior a 2,775% en 1989 y, en lo relativo a la violencia, con 65 provincias y un distrito en estado de emergencia” (Reátegui 2009: 175).

manera drástica a la población, los partidos políticos democráticos de derecha, centro e izquierda— redujeron su convocatoria y legitimidad, importantes sectores sociales mostraron su malestar a través de innumerables huelgas y actos de protesta, y el Estado dio crecientes muestras de incapacidad para controlar el territorio amenazado por la subversión armada.

No obstante, esta aparente cercanía a una situación revolucionaria estuvo lejos de madurar²⁴, como aspiraba Sendero Luminoso y algunos sectores dentro de la Izquierda Unida, porque: a). Los actores que hubieran podido transformarla en una coyuntura de cambio radical, estaban anticipadamente derrotados (sobre todo los integrantes de la Izquierda Unida), que además demostraron —por los hechos— no tener la voluntad efectiva de ganar el gobierno con un programa de reformas democráticas y radicales²⁵. b) Porque las fuerzas políticas más activas y beligerantes, como fueron los casos de Sendero Luminoso y del MRTA, no dejaron de ser -a pesar de su iniciativa y poderosa organización— marginales nacionalmente por su aislamiento de la gran mayoría del país, y c) Porque las diversas y disímiles fuerzas sociales, políticas y culturales “prosistema”, pro orden estatal vigente, pro preservación de los poderes comunales o locales, pro democracia representativa, o pro defensa de sus tradiciones, eran sumamente vastas y fueron activadas sobre todo por la acción subversiva, constituyendo un contingente bastante más poderoso que el que era representado y expresado por los partidos políticos de derecha y, en general, los llamados partidos tradicionales.

La predicción de Sendero Luminoso —y de quienes tenían una opinión semejante sobre el punto— de que era posible transitar a una situación revolucionaria fracasó rotundamente —se expresó primero con el triunfo de un candidato independiente de

²⁴ Sin embargo, el autor recuerda perfectamente que durante los años finales del primer gobierno de Alan García y los primeros de Alberto Fujimori, un embajador de un país vecino le narró con detalle las coordinaciones preparatorias —de carácter preventivo— de intervención de los países vecinos y de los Estados Unidos ante el eventual escenario de un colapso del Estado peruano, incapaz de contener la arremetida de Sendero Luminoso.

²⁵ Izquierda Unida se divide en su congreso nacional de 1988, por una combinación de supuestas razones estratégicas entre sus principales integrantes (para decirlo en sencillo: “reforma o revolución”) y por consideraciones estrictamente electorales, de cupos electorales de cara a las elecciones de 1990.

derecha, Ricardo Belmont, a la Alcaldía de Lima en 1989 y después con la aceptación popular del plan de ajuste de Alberto Fujimori en 1990—, porque la acción de los dos factores centrales de la coyuntura, la actividad subversiva de Sendero Luminoso (y en menor medida del MRTA) y la hiperinflación, a partir de 1988, pusieron como preocupación central de la población no la revolución o el cambio reformista radical -más aún después de la ruptura de Izquierda Unida en 1989—, sino la necesidad y la urgencia del orden, como el llamado esencial y primero de los peruanos a sus gobernantes. El orden como garantía de la vida de las personas fue el pedido que prevaleció: este hecho produjo un cambio sustantivo en el ángulo de percepción de la población.

El espejismo de la presentación de una situación revolucionaria, se comenzó a imponer en algunos sectores radicales, cuando en 1985 lograron las más altas votaciones en las elecciones presidenciales las dos principales agrupaciones populares del país: el APRA y la Izquierda Unida. Entre ambas conquistaron aproximadamente el 75% de la votación. Cinco años después, en 1990, dos políticos independientes, uno de derecha y otro que fingió ser de centro, pasaron a la segunda vuelta: Mario Vargas Llosa obtuvo en la primera vuelta 32% de la votación y Alberto Fujimori 29%, entre ambos representaron el 60% del electorado.

Una coyuntura de tensión extrema como la que vivió el país entre 1990 y el 1992 (o quizá, como se ha dicho, desde 1988 hasta 1992) abrió el espacio para que con el mayoritario apoyo de los peruanos se produjeran conductas extraordinarias y dictatoriales de los gobernantes, que violaron o dejaron en suspenso la Constitución Política, y que pusieran por delante los intereses primarios del Estado en aras de impedir la creación de un nuevo orden estatal (en palabras de Sendero Luminoso “un nuevo estado”).

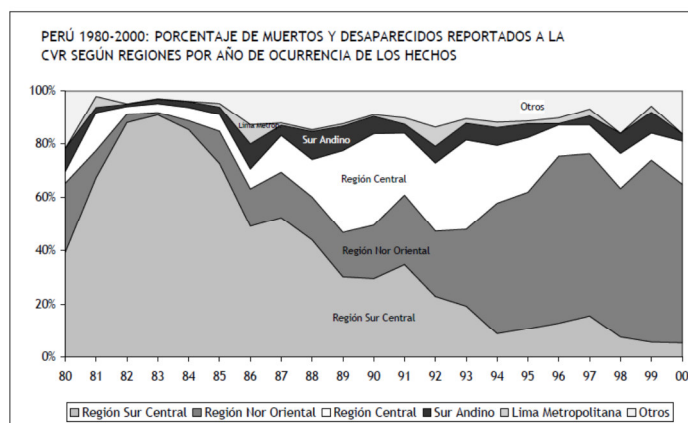
Vale la pena subrayar que en los momentos decisivos de esta coyuntura de excepcionalidad, entre 1990 y 1992, las fuerzas reformistas de izquierda o del centro —llámese la Izquierda Unida y el Partido Aprista— derrotadas, por crisis internas, por falta de una propuesta democrática realista, o por una desastrosa gestión de gobierno, tenían escasas posibilidades de enrumbar la situación en la perspectiva de un cambio democrático y gradual de la crisis.

1.3. La guerra y el número de muertos se disparan a inicios de la década de 1980

La excepcionalidad en la década de 1980, en el estricto ámbito de la violencia, tiene su momento más agudo en los años 1983 y 1984, debido a la acción armada de Sendero Luminoso y a la consiguiente acción contrasubversiva del Estado. En ese lapso el número de muertos y desaparecidos sumó 1,107 en 1983 y 2,053 en 1984. En este período las violaciones de los derechos humanos en la sierra centro-sur fueron masivas, con el consentimiento práctico (y en muchas casos normativo) del gobierno central, el Parlamento y el Poder Judicial²⁶.

La situación de excepcionalidad se fue configurando y pasó a formar parte —con distinta intensidad según cada región— de la vida cotidiana de los peruanos.

Cuadro 1



Fuente: CVR 2003.

²⁶ Para la CVR, aunque la intervención militar golpeó duramente la organización y la capacidad operativa de PCP-SL, [10] produjo también una secuela de violaciones masivas de los derechos humanos y convirtió al bienio 1983-84 en el más letal del conflicto fundamentalmente en Ayacucho. Peor aún, la estrategia resultó contraproducente, pues la represión indiscriminada en las zonas rurales postergó la ruptura entre PCP-SL y los sectores más pobres del campesinado, y no evitó la expansión de las acciones armadas a otras zonas del país.

Como se ve en el cuadro 1, la zona más golpeada por la guerra interna fue la región sur-central, seguida por la nororiental. En la década del noventa, un porcentaje importante de las acciones armadas se trasladó a Lima y sus provincias.

1.4. Constitución de los comandos político-militares o los pequeños golpes de Estado anticipados (las “dictaduras comisariales regionales”)

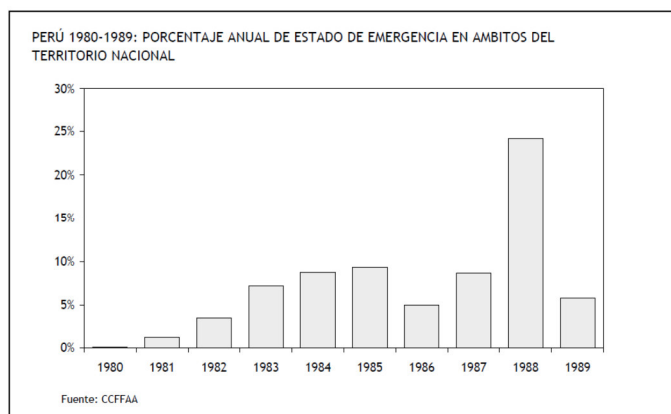
Una de las principales características de la situación de excepcionalidad es que fueron colocándose en suspenso o anulándose, en términos prácticos, desde inicios de 1983, algunos derechos individuales básicos (por ejemplo: el derecho a la vida en determinadas regiones del país y a un juicio justo debido a razones políticas) e instituciones de la democracia representativa, como las autoridades civiles municipales y la libertad de prensa, que en las zonas declaradas en emergencia, fueron restringidas o sencillamente abolidas²⁷.

Asimismo, el ámbito de poder y autonomía institucional de las Fuerzas Armadas se amplió al encargárseles, a partir de 1983, el control del orden interno en las zonas declaradas en estado de emergencia, creándose la figura jurídica de los comandos político-militares, que contaban con amplias atribuciones, incluyendo —en la práctica— la subordinación a la autoridad militar de las fuerzas policiales, jueces, fiscales y autoridades locales en general, incluyendo las elegidas. Fue en este contexto en que, en ciertos lugares y momentos del conflicto armado, miembros de las Fuerzas Armadas cometieron “prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos” (CVR 2003: Tomo VIII-323).

²⁷ El 26 de enero de 1983 fueron asesinados en Uchuraccay, Ayacucho, ocho periodistas. Esto restringió la posibilidad de los periodistas de “cubrir” el conflicto armado interno como “corresponsales de guerra”. No obstante, muchos periodistas de las “zonas rojas” continuaron con su labor. Otros seis periodistas fueron asesinados durante el conflicto interno, algunos a manos de los senderistas y otros por agentes del Estado y paramilitares (Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, Informe Prensa y Justicia en una sociedad en conflicto, diciembre de 1994).

El primer comando político-militar²⁸ se instaló con la aprobación del gobierno democrático de Fernando Belaúnde, en enero de 1983, teniendo como sede el departamento de Ayacucho. En 1985, el 6.04% de la población nacional y el 7.25% del territorio estaban bajo el régimen de estado de emergencia o de un comando político militar, mientras que en 1990 lo eran el 45.18% de la población y el 29.62% del territorio (CVR 2003: Tomo III 57) Los comandos político-militares habían ido ampliando sus espacios de control sobre el Estado, la población y el territorio. La actividad de los comandos político-militares, según ha constatado la CVR, si bien golpeó duramente a la organización subversiva PCP-SL, no llegó a reprimir sus actos terroristas ni a erradicarla, y en cambio sí acarreó prácticas generalizadas de violación de los derechos humanos contra la población civil de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, en ciertos períodos y lugares específicos (CVR 2003: Tomo III-21)²⁹.

Cuadro 2



Fuente: CVR 2003.

De acuerdo con el cuadro 2, el Comando Conjunto de las FF.AA sostiene que en el año 1988 el 25% del territorio nacional se encontraba bajo estado de emergencia; según la misma fuente, esta situación disminuyó en 1996, aunque todavía el 16% del

²⁸ Fue instalado el 1 de enero de 1983, en Ayacucho, a cargo del general Roberto Clemente Noel Moral. Con esto se inició la militarización del conflicto (enero 1983-junio 1986) (CVR 2003: 59).

²⁹ Para finales de 1996 se mantenían aun en estado de emergencia 36 provincias de 11 departamentos del Perú, un 16% del territorio (Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú 2010: 273).

territorio nacional, en 36 provincias de 11 departamentos, se mantenía esa situación excepcional (Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú 2010: 273).

De manera simultánea y gradual, pero constante, la vigencia de las autoridades civiles en la mayor parte del país fue solo parcial -a pesar de que, por ejemplo, las elecciones municipales de 1989 pudieron llevarse a cabo, en todo el territorio nacional, en contra de la campaña de abstención de Sendero Luminoso—, porque estaban sometidas al control militar.

La utilización de la policía nacional, primero, y después, de las Fuerzas Armadas, expresó esta gradual y creciente derrota política de las fuerzas democráticas y de la democracia en grandes sectores del país. Era una democracia de partidos que a fines de la década de 1980 no podía controlar el territorio del país mediante mecanismos democráticos ordinarios o regulares, y que debía hacer un uso sistemático del estado de excepción o de emergencia, en el que la policía y los militares tuvieron un protagonismo creciente y decisivo.

1.5. El Estado no podía garantizar la autoridad ni la vida de las autoridades locales y regionales

Durante la década de 1980 el Estado peruano tuvo crecientes dificultades para controlar el territorio nacional y mantener la autoridad de sus representantes en diversas regiones y localidades, sobre todo en el ámbito rural. Si en 1984 se produjo el mayor número de muertes entre la población a raíz de la violencia interna de aquella época, “En 1989 se cuentan la mayor cantidad de autoridades políticas (68%) y municipales (71%) asesinadas en toda la década. Según datos preliminares, solo ese año se asesinó aproximadamente al 33% (53) de todos los alcaldes provinciales y distritales muertos por la guerra entre 1980 y 1995. El 45% de ellos eran alcaldes del PAP” (Reátegui 2009: 147).

Cuadro 3

Perú 1985-1990: Número de autoridades municipales del PAP asesinadas durante el gobierno de Alan García

TOTAL	CARGO MUNICIPAL			
	Alcaldes distritales	Alcaldes provinciales	Teniente alcaldes	Regidores
186	116	19	22	29

Fuentes: DESCO, Aprodeh, IDL, JNE (Pareja y Gatti, 1990).

Fuente: CVR 2003.

Cuadro 4

Perú 1985-1990: Número de autoridades asesinadas durante el gobierno de Alan García

TOTAL	CARGO			
	Gobernadores	Teniente Gobernadores	Subprefectos	Prefectos
133	45	79	7	2

Fuentes: DESCO, Aprodeh, IDL, JNE (Pareja y Gatti, 1990).

Fuente: CVR 2003.

La CVR señaló que durante el proceso de violencia “fueron asesinadas unas quinientas autoridades municipales y políticas, sin contar a las autoridades comunales y otras tradicionales que cumplen un papel fundamental en las colectividades étnicas más apartadas de la sociedad nacional” (Reátegui 2009: 147). La violencia política hizo además que “antes de las elecciones de noviembre de 1989 se [verificara] el abandono del cargo de 576 autoridades locales; el 75% (431) de éstas pertenecía al PAP y 14% (80) representaban a IU. Lima Provincias, Huánuco y Junín fueron los departamentos con mayor número de situaciones de vacancia” (Reátegui 2009: 147).

Así pues, un año antes de que Fujimori ganara las elecciones presidenciales, el Estado peruano no podía garantizar a centenas de autoridades locales su derecho a la vida y su derecho a ejercer el cargo para el que habían sido nombrados o electos, como consecuencia de las amenazas, atentados y asesinatos de los que fueron víctimas las autoridades locales del país.

Esto tuvo como consecuencia que en las elecciones municipales de noviembre de 1989, a escasos seis meses de la primera vuelta electoral de 1990, el 15,37% de los distritos de la república no contaran con candidatos. Algo más: “En 1989 murieron 17 jueces de paz, aproximadamente el 40% de todos los que murieron entre 1982 y 1995. La mayoría vivían en zonas rurales, donde la falta de protección fue muy grande y a menudo fueron asesinados al lado de sus familias o pobladores de la zona” (Reátegui 2009: 148).

No puede pasarse por alto, tampoco, que, como consecuencia de la presión política, social y militar que provocó la violencia interna, el ausentismo en las elecciones generales de 1990 fue el más elevado de los años de democracia comprendidos entre 1980-1990: “En los departamentos de Ayacucho y Huancavelica llegó a superar el 40%, mientras que en los departamentos de Huánuco y Junín fue alrededor del 50%. La estrategia del Ministerio del Interior y las fuerzas policiales y militares para ofrecer mayores seguridades a las autoridades civiles y a los ciudadanos, no dio resultados” (Reátegui 2009: 148-149).

Cuadro 5

Perú 1989: Cargos municipales “vacantes”

Departamento	Total de provincias en el Dpto.	Nº de provincias con cargos vacantes	Nº de distritos en provincias afectadas	Nº de concejos distritales afectados	Nº de cargos vacantes distrital	Nº de cargos vacantes provincial
TOTAL	102	60	692	218	483	75
Junín	8	6	108	55	201	5
Huánuco	9	9	74	38	53	8
Lima a/	9	5	88	31	67	15
Ayacucho	11	8	81	13	20	10
Apurímac	7	4	45	18	37	12
Ancash	18	9	96	20	44	1
Huancavelica	8	4	57	12	15	--
Pasco	3	3	29	9	14	--
La Libertad	9	2	21	7	6	15
Puno	11	3	36	3	7	--
San Martín	9	7	57	12	19	9

a/ Exceptuando los distritos de Lima metropolitana (42), el resto de provincias sumaba 128 distritos.
Fuente: Pareja y Gatti, 1990.

Fuente: CVR 2003.

Cuadro 6

Perú: Autoridades municipales del PAP que dejaron “vacante” su cargo entre 1987 y noviembre de 1989

CARGO	NÚMERO
TOTAL	431
Alcaldes	164
Regidores	199
Teniente Alcaldes	68

Fuentes: Ministerio del Interior - Dirección de Autoridades Políticas (Pareja y Gatti, 1990).

Fuente: CVR 2003.

El monopolio de la violencia que corresponde al Estado, según la definición clásica de Max Weber, estaba roto. Más aún, había regiones en disputa entre el Estado y la subversión armada, pugna que se expresaba en asesinatos, amenazas y en la lucha por el control sobre poblaciones y territorios. En dichas regiones, la incertidumbre estaba instalada. El año 1989 fue, por otro lado, un momento cúspide de la pugna de la subversión armada por provocar el vacío del poder del Estado en distritos sobre todo rurales de la sierra central y centro-sur, así como de la ceja de selva de la zona central. En junio de 1989, PCP-SL llamó a un “paro armado” en los departamentos de Huánuco, Pasco, Huancavelica y Junín. Ese mismo mes, el entonces ministro de Defensa, general Velásquez Giacarini, promovió “el reforzamiento del servicio de inteligencia, la organización de autodefensas campesinas, la preparación especializada de las fuerzas militares y policiales, la ofensiva contra los grupos de apoyo en el extranjero y, finalmente, la creación de un fondo de financiamiento para la lucha contrasubversiva (Reátegui 2009: 146). Para septiembre de 1989, la opinión pública creía que el gobierno aprista no resolvería el problema de la subversión armada y que la tendencia de ésta sería a su crecimiento.³⁰

El impacto de las acciones de la subversión armada, particularmente intenso en las zonas de la sierra central, el nororiente del país y las provincias de Lima, repercutía en los centros urbanos y en la capital del país, pues la imagen de descontrol y desgobierno se acentuaba. La estructura democrática representativa era incapaz de ejercer en una parte considerable del territorio nacional su poder legítimamente constituido.

³⁰ Apoyo S.A. Informe de Opinión Pública, septiembre-octubre de 1989 (Reátegui 2009: 149).

1. 6. Partidos políticos sin capacidad para enfrentar a Sendero Luminoso

No hay que olvidar que la elección de Alan García en 1985 (con más del 50% de los votos válidos) despertó una gran expectativa popular y también entre las clases medias. El nuevo gobierno intentó una agresiva política económica basada en el incremento de la demanda y un cambio de la política contrasubversiva sancionando violaciones a los derechos humanos como fue el caso de Cayara (1986). Sin embargo, la persistencia del conflicto con Sendero Luminoso, que tuvo su punto de inflexión con las masacres de los penales (en 1986), fue para el gobierno de Alan García un paso sin retorno posible. Esta circunstancia adquirió un cariz explosivo cuando se incrementó el descontrol sobre amplias porciones del territorio nacional y la incapacidad de garantizar la vida de los peruanos se esfumó por el fracaso del primer programa económico del aprismo y la consiguiente crisis e inflación.

Sin embargo, no solo fueron el APRA y la derecha (durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde) las fuerzas que demostraron su incapacidad para controlar el crecimiento de Sendero y de la violencia política, sino que también la Izquierda Unida, fue gradualmente desalojada de algunos de sus zonas de influencia en las que Sendero se implantó (como Ayacucho, Apurímac o Huancavelica), no pudiendo encabezar un movimiento reformista, que se propusiera instaurar la paz y el orden democrático. En Puno tuvo un matiz diferente porque la resistencia de IU, en particular del PUM, fue más ardua (Rénique 2004). Las pugnas al interior de la Izquierda Unida, producto del sectarismo y también de las extremas ambigüedades programáticas y estratégicas (habían fuerzas que dudaban todavía de si la lucha armada era un camino a seguir), derivaron en que esta fuerza política, en escaso tiempo, entre 1989 y 1990, se convirtiera en un factor marginal y, en última instancia, suprimible en el escenario político.

Los partidos políticos —sea de izquierda, centro o derecha— fueron incapaces de controlar el territorio y de colaborar en la instauración de un sólido orden democrático. Si algo demostraron los partidos políticos, a partir del incremento del conflicto militar interno, es que fueron incapaces de controlar el aumento de la

violencia política. La violencia se les escapó de las manos y consiguientemente porciones cada vez mayores del territorio y del propio Estado³¹. La crisis de la democracia y de los partidos políticos estaba instalada. El período de 1990 a 1992 es simplemente su desembalse.

1.7. Crisis de 1988: los ‘paquetazos’ apristas

El sociólogo Francisco Durand sintetiza con precisión la situación económica del país en 1988: “La Gran Crisis retorna a la escena luego de la batalla de los bancos y en medio del resurgimiento conservador. La economía nacional desciende a la profundidad del abismo en 1988, proceso que se prolonga hasta el final de la década. Entre 1988 y 1989, la recesión provoca una pérdida acumulada del 20% del PBI [Paredes y Sachs 1991: 30]. En dos años la variación de la inversión es de -13,3% en 1988 y de -19,4% en 1989 [Cáceres y Paredes 1991: 110]” (Durand 2003: 326). Como era de esperar, la caída del PBI fue simultánea a la reducción de las reservas internacionales y al incremento exponencial de la deuda externa: “Las reservas internacionales llegan a estar por debajo de los 150 millones de dólares en 1990, indicio de lo difícil que se pone el frente externo [Paredes y Sachs 1991: 31]. La deuda externa se va acumulando dado el efecto galopante de intereses y moras. Pasa de US\$ 16.154 mil millones en 1986 a US\$ 19.921 en 1989 [BID 1992: 345]” (Durand 2003: 326).

En esos mismos años, y como consecuencia de la debacle económica, los ingresos tributarios sufrieron una incesante caída: “Los ingresos caen drásticamente, y se llega a niveles históricos bajísimos. La presión tributaria como porcentaje del PBI alcanza a ser 5% en 1989 cuando en países como Chile tienen una tasa cercana al 18% [Paredes y Sachs 1991: 18 y 30]” (Durand 2003: 327).

³¹ Como dice Max Weber, la política es en última instancia la administración de la violencia: (Weber: 2007: 94). El hecho de que los partidos políticos y sobre todo los gobiernos democráticos dejaran gradualmente de tener control sobre el uso de la violencia estatal fue la manifestación más dramática de su derrota y, finalmente, de su creciente marginalidad.

Los principales ‘paquetazos’ económicos se ejecutan desde los últimos meses de 1987 hasta el final del gobierno del presidente García en 1990: “Los primeros paquetes los introduce el ministro Saberbein y su equipo de los ‘audaces’. En diciembre de 1987 se elevan los tipos de cambio, aunque manteniendo el corrupto e ineficiente sistema de tasas múltiples, se introducen restricciones para-arancelarias y más controles a la compra y venta de divisas” (Durand 2003: 334). Este primer esfuerzo por estabilizar la economía es seguido meses después por otro: “En marzo de 1988 se incrementan las tarifas públicas, los bienes de precios controlados y la gasolina y se incrementa el impuesto a las ventas. Al mismo tiempo, se aprueban aumentos de sueldos y salarios para proceder a un congelamiento de los mismos por cuatro meses” (Durand 2003: 334-335). De acuerdo con Durand, estos dos primeros intentos de estabilización tuvieron magros resultados. A mediados de mayo renunció el ministro de Economía Gustavo Saberbein e ingresó a dirigir la cartera César Robles, quien aplica lo que podría denominarse un tercer ‘paquetazo’, en un lapso de solo cinco meses: “En julio de ese año infausto, Robles vuelve a ajustar los precios, eliminar subsidios y modificar la tasa de cambios, a fin de intentar la simplificación del sistema de tasas múltiples. El paquete aprueba en paralelo un aumento de salarios para compensar el efecto de las medidas, decisión que neutraliza la intención de equilibrio fiscal” (Durand 2003: 335).

El ‘paquetazo’ de mayo tampoco tiene el efecto buscado: estabilizar la economía; por el contrario, acelera las tensiones políticas. El 2 de setiembre de ese año se produce un nuevo cambio de ministro: sale César Robles e ingresa Abel Salinas: “El paquetazo, conocido como ‘El Plan Cero’, anuncia el giro hacia un ajuste drástico, incrementándose los precios controlados en un rango de 90% a 300%, unificando los tipos de cambio y aumentando los topes de las tasas de interés. Ese paquete, el más terrible de todos —y, como los anteriores, también rechazado por los sindicatos— trae efectos correctivos a pesar de su enorme costo social” (Durand 2003: 335).

Sin embargo, al no conseguir el alivio financiero que se buscaba mediante la negociación con los poderes financieros externos y no recuperar el gobierno la credibilidad interna, el presidente García decide un nuevo viraje de la política económica, vía el aumento de salarios y el congelamiento de precios por cuatro meses, “con lo cual la inflación vuelve a dispararse” (Durand 2003: 336).

En noviembre de 1988 se anuncian nuevos aumentos de precios, de tasas de interés y de impuestos, así como otra devaluación. El efecto político inmediato es la salida de Salinas del Ministerio de Economía y el ingreso de Carlos Rivas, cuarto ministro del ramo en ese mismo año. El desgobierno estaba instalado, y el régimen no sabía cómo controlarlo. Más aún, el propio presidente de la república con su conducta errática provocaba un caos mayor. El renunciante Salinas declaró a la prensa que “el plan preparado por el MEF es desdibujado en palacio por el propio presidente, que aprueba unas medidas y descarta otras a voluntad o según cálculos políticos personales que nadie conoce” (Durand 2003: 336).

El presidente García se embarca, en los primeros cinco meses de 1989, en un esfuerzo por evitar los ‘paquetazos’. Ejecuta una política gradualista con ajustes permanentes utilizando herramientas macroeconómicas como el tipo de cambio y el precio de los combustibles. Sin embargo, “el relativo éxito del plan genera las condiciones para su abandono, que coincide con otro cambio de gabinete. En mayo de ese mismo año sale Rivas y entra César Vásquez. El primer mandatario, alentado por la relativa mejora económica, habla de reactivación con la esperanza de mejorar la posición del APRA en las elecciones. Se pierde, entonces, el interés por mantener el plan de ajuste gradual, que termina siendo abandonado [Cáceres y Paredes 1992: 128-129]” (Durand 2003: 336).

La pérdida de rumbo de la economía y sus efectos sociales y políticos, sumado al incremento de la violencia política, la dramática reducción del empleo y la caída de los salarios, crean una situación de falta de autoridad e instalan en la mayoría de los peruanos la incertidumbre ante el futuro del país. La crisis económica era extrema y con ello se preparaban las condiciones para el *shock* consentido por la población que aplicaría Alberto Fujimori un año después.

1.8. Hiperinflación e incertidumbre: destrucción del empleo y reconfiguración de la sociedad

La inflación, el otro gran componente de la crisis política, económica y social vivida durante la década de 1980, pasó a ser parte central de la situación de excepción, a

partir de 1988, al aumentar ese mismo año los precios al consumidor en 660%. En 1989 la inflación superó el 3,300% y en 1990 el 7,400%. Se constata así que previo al ascenso de Alberto Fujimori al gobierno, hubo no solo dos grandes fenómenos que impactaron contra la estabilidad política y económica, sino que además aparecieron en momentos distintos: primero Sendero Luminoso, a partir de 1980, y, más aún, desde 1982 y 1983; y la crisis económica, expresada dramáticamente en la hiperinflación desde 1988 hasta 1991.

Cabe recordar, además, que, en torno al manejo de la política económica y, consiguientemente, en relación con la crisis y la quiebra del Estado, se desarrolló una fuerte pugna política entre el gobierno y algunos de los principales grupos económicos. Esta pugna tuvo una de sus expresiones más altas en la caída dramática de la recaudación tributaria, precisamente entre 1988 y 1990.

El período entre 1989-1992 no solo significó un nuevo incremento de la violencia política (CVR 2003: Tomo III 73), sobre todo en las ciudades (como Lima), sino que la hiperinflación, producto del fracaso del programa económico del gobierno aprista, instaló una mayor de incertidumbre entre la población sobre su vida, su familia y el país, alentando aún más el acelerado desprestigio de las fuerzas políticas que habían prevalecido durante la década de 1980.

Entre 1987 y 1989, como producto del inicio del proceso inflacionario, se quebró la estructura del empleo en el país; en estos dos años, en Lima, los trabajadores subempleados pasaron de 34.9% a 73.5% del total de la fuerza laboral de la capital (Verdera 1994: 16). Esto tuvo un impacto crucial en la estructura organizativa de la sociedad peruana y en su consiguiente reconfiguración: hubo cierres masivos de empresas, los sindicatos comenzaron a entrar en crisis, las luchas de los trabajadores se difuminaban después de largos períodos de batallas sindicales y sociales, el propio empresariado transformó su composición (Durand 2003), y la población se hizo cada vez más ansiosa. Una ansiedad que tenía estrecha vinculación con la incertidumbre respecto del trabajo, los sueldos y los salarios, así como también con la violencia política.

A fines de la década, el Estado estaba a punto del colapso. Debido a la crisis económica simbolizada dramáticamente en la hiperinflación, y a la pugna política entre el gobierno aprista y los grandes empresarios, el Estado estaba imposibilitado de proveer los servicios básicos a la población (los servicios de salud y seguridad estaban extenuados). Ese mismo Estado, sobre todo el régimen democrático, había perdido, simultáneamente, el control de grandes áreas del territorio nacional a manos de Sendero y de los comandos político militares.³²

³² La gran diferencia entre Colombia —con una poderosa guerrilla y una amplia actividad del narcotráfico— y el Perú de ese entonces, es que el poder central nacional colombiano no ha llegado a estar amenazado como sí lo estuvo el peruano, por las razones dadas en el texto.

CAPÍTULO II

“Y LA VIOLENCIA Y EL DESORDEN CREARON A FUJIMORI...”

La violencia política se escapó de las manos del régimen democrático y de los partidos políticos. Adquirió crecientemente una dinámica propia, fuera de los cauces de las instituciones democráticas. Los partidos políticos dependían cada vez más de las Fuerzas Armadas. Salvo los que intentaran crear su propia fuerza armada. El fin del monopolio de la violencia abrió una nueva etapa en la vida del país, sobre todo por la dimensión que adquirió.

2.1. El triunfo de Alberto Fujimori, la derrota de las opciones “populares” y el cambio de humor de la población

Esta coyuntura, condicionada por la crisis económica, por el empobrecimiento generalizado de la población, por el malestar social incesante, por el lamentable desempeño de los partidos políticos, intentó ser aprovechada, sobre todo, por quienes querían un cambio revolucionario de carácter totalitario y por quienes, por el contrario, aspiraban a desplegar una acción conservadora de gran envergadura. Fueron estas las dos fuerzas que tuvieron la iniciativa política en sus manos.

La instalación del orden como el eje de la agenda política, y como condición para imponer el proyecto neoliberal, no hace sino expresar la situación de excepcionalidad que se vivió en el Perú durante esos años, que fue aprovechada para la consolidación de un político aventurero hábil y autoritario como Alberto Fujimori y por los promotores del modelo económico que se venía imponiendo en casi todos los países de la región.

La incertidumbre había ganado un gran espacio en el ánimo de la población. El dato a resaltar, en este caso, es que este estado de ánimo de malestar y de ansiedad, como producto del incremento del desempleo y el empleo precario, como también de las quiebras de empresarios, no pudo ser aprovechado ni canalizado por las fuerzas políticas populares. Sin embargo, este proceso de desencuentro fue gradual, no es que la población aprista o izquierdista abandonó de un día al otro a sus dirigentes. Incluso, en las elecciones de 1990, a pesar de todo lo vivido durante la década, en particular durante los últimos cinco años, el APRA logró obtener en las elecciones presidenciales un importante 20% de la votación y los dos candidatos de la izquierda dividida, algo más del 13%. No obstante, más importante que esa reducción del voto y de los porcentajes electorales que sufrieron el APRA y la Izquierda Unidad debe decirse que estas agrupaciones políticas habían dado muestras reiteradas de incapacidad para poner orden en el país (de manera democrática vía un proyecto reformista o revolucionario) y que no tenían una propuesta política sólida para enfrentar con éxito el futuro inmediato.

La segunda vuelta electoral que permitió el triunfo de Alberto Fujimori (Cambio 90) sobre Mario Vargas Llosa (FREDEMO), fue el “canto del cisne” de las fuerzas reformistas que derrotadas y/o divididas aspiraban confusamente a mantener la democracia precaria, a administrar la crisis económica y a derrotar a Sendero Luminoso en el marco del inestable y sumamente recortado, pero aún vigente, del Estado de derecho.

No se puede, por supuesto, afirmar que el destino de esta situación era claro, o estaba inexorablemente definido, para los actores políticos enfrascados en la lucha por el poder durante esos años. Todo lo contrario. Más aún, se puede afirmar sin temor a equivocarse que las fuerzas reformistas de izquierda o del APRA, consideraban implícitamente que era manejable la situación sin llegar a los extremos de buscar salidas vía el “shock”, como proponía la derecha, o el golpe militar que propugnaba soterradamente un sector castrense, y, menos aún, mediante el proyecto de cambio radical totalitario de Sendero Luminoso.

El surgimiento de un “independiente” como Alberto Fujimori expresó la crisis de representación de los llamados partidos tradicionales que habían prevalecido durante la década de 1980, después de que se reinstalara la democracia, con el gobierno de Fernando Belaúnde. Pero el surgimiento de los independientes³³ era también la expresión de la derrota de los partidos, una derrota que se manifestó en la desaparición o disminución radical de su representatividad, pero también de su credibilidad. Los partidos fueron “licuados”, en un lapso breve, por la crisis económica y social que vivió el país en la segunda mitad de la década de 1980. Esta derrota no se hizo inmediatamente evidente con los resultados electorales de 1990. Sin embargo, la forma como un aventurero, como Alberto Fujimori, convocó a los poderes fácticos, creó nuevas lealtades y sobre todo terminó de destruir el Estado (del que formaban parte los partidos políticos) y las bases productivas vigentes, fue radical, contundente y sobre todo exitosa.

El primer gran aviso de lo que estaba pensando y sintiendo la mayoría de la población se dio cuando, contra todo supuesto, las drásticas medidas aprobadas y aplicadas por el primer gabinete de Alberto Fujimori, en agosto de 1990, recibieron el apoyo mayoritario de los peruanos. Fue una manifestación de cuan escasamente los partidos políticos, incluyendo los integrantes de la Izquierda Unida, estaban sintonizados con la población, incluyendo y en especial a los pobres del país.

2.2. El canto del cisne del reformismo y el triunfo del aventurero

La coyuntura electoral que se vivió durante los comicios de 1990, en particular las semanas comprendidas entre la primera y la segunda vuelta, permite afirmar que el triunfo del entonces desconocido Alberto Fujimori sobre Mario Vargas Llosa constituyó la última gran resistencia de las fuerzas políticas y sociales que pretendían mantener las reglas económicas y políticas básicas (sobre todo las identitarias)

³³ Para Nicolás Lynch, “los independientes surgen como actores políticos relevantes el año 1989 con la elección de Ricardo Belmont a la alcaldía de Lima. 1989 es un año crítico para la democracia peruana porque en él los problemas irresueltos en la década que terminaba se hacen presentes en toda su magnitud y los principales actores partidarios muestran grave incapacidad para resolverlos. [...] Este liderazgo plebiscitario de los independientes se basa en una legitimidad por resultados que subordina a cualquier legitimidad legal que el régimen autoritario quiera darse” (Lynch 1999: 233 y 261).

instauradas durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y en parte de la década de 1980, en especial durante el gobierno de Alan García. O, también, fue el canto final de aquellas fuerzas que pretendían impulsar cambios radical-revolucionarios desde el interior del sistema político, como fue el caso de sectores de la Izquierda Unida.

Durante la década de 1960, y en particular durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), se produjo un ordenamiento de la economía y de la política que terminó por quebrarse con el autogolpe de 1992.

El régimen militar instauró un modelo político y económico basado en eliminar a la oligarquía, limitar la propiedad privada, estimular desde el Estado la organización popular, generar nuevos símbolos de identidad nacional —como Túpac Amaru y el reconocimiento del quechua como idioma oficial—, refrendar la preeminencia de la política y de la voluntad política sobre la economía, constituyendo un capitalismo de estado preñado de tensiones con el gran capital, en especial el norteamericano.

Ni el segundo gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985) ni el de Alan García (1985-1990) rompieron las reglas de juego básicas instauradas por el velasquismo. Es verdad que durante el gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y en el segundo período de Fernando Belaúnde hubo intentos, más decididos en el segundo que en el primero, de liberalizar la economía y romper el pensamiento político hegemónico impuesto por el reformismo militar, consistente básicamente en defender la idea de un proyecto nacional inclusivo asentado en una activa presencia del Estado. Sin embargo, a pesar de los cambios parciales en la economía y de la restauración de la democracia, las claves principales de la política, de la economía y del humor político cultural se mantuvieron inalteradas.

El desmoronamiento del llamado estado populista se inició recién a partir de 1987, con el fracaso del programa heterodoxo del gobierno de Alan García y contradictoriamente de la mano de su decisión de estatizar la banca. Sin embargo, es durante los dos primeros años del gobierno de Alberto Fujimori cuando se termina de

desmontar ese régimen estatal y de alguna manera social construido desde fines de la década de 1960 por el gobierno de Juan Velasco.

El momento decisivo en que se manifestó esta postrera resistencia tuvo lugar cuando se enfrentaron, en la segunda vuelta electoral, el bloque reformista-izquierdista conformado por el APRA, la izquierda, las dirigencias de frentes regionales y barriales, los sindicatos y el candidato Alberto Fujimori contra el bloque de derecha que respaldaba la candidatura de Mario Vargas Llosa, del Frente Democrático (Fredemo): Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, Movimiento Libertad, los grandes empresarios y los sectores de las clases medias altas y clases altas, sobre todo limeñas.

2.3. Entre Sendero y la hiperinflación. Un desconocido quiebra el sueño de los señores

En octubre de 1989 la polarización electoral era muy diferente a la de abril-junio de 1990. Izquierda Unida, dividida entre el sector que lideraba Henry Pease y el que dirigía Alfonso Barrantes Lingán, hacía sus últimos esfuerzos por recolocarse de cara al electorado de centro y centroizquierda que se oponía al gobierno aprista, ya en debacle, y que temía el triunfo del Fredemo.

El 28 de octubre de 1989, en respuesta al “paro armado” anunciado por Sendero Luminoso, cuya presión era intensa en Lima y en varias otras regiones del país, los integrantes de la plancha presidencial de Izquierda Unida, Henry Pease, Agustín Haya y Gustavo Mohme, convocaron a una marcha para el 3 de noviembre, en aras de la paz y en clara demostración de rechazo al senderismo.

El candidato del Fredemo expresó su disposición a participar en esa marcha. Así, la convocatoria contó con el aval de fuerzas políticas disímiles e importantes del escenario electoral, lo cual le imprimió un fuerte carácter simbólico: ante la presión de Sendero Luminoso y el temor a una crisis generalizada del Estado y de la autoridad, la derecha, el centro político y la izquierda marcharon por las calles de Lima. Participaron Izquierda Unida (Pease), Fredemo, Acuerdo Socialista (Barrantes), la Democracia Cristiana y Acción Popular. La Iglesia católica, a través de la Conferencia

Episcopal Peruana, también apoyó la marcha. El APRA, partido oficialista, rechazó intervenir en la “jornada cívica” de oposición a la violencia armada.

Esta marcha unitaria fue una de las más claras demostraciones de que la seguridad y el orden conformaban el eje del debate y la preocupación de la ciudadanía en general, y era un interés principal de la elite política.

La Izquierda Unida, haciendo un esfuerzo por distinguirse del Fredemo y de la candidatura de Vargas Llosa, durante la referida marcha tuvo como lema principal “¡No matarás, ni con hambre ni con balas!”. Con la alusión al hambre, la izquierda intentaba distinguirse de la derecha; pero la unidad contra Sendero Luminoso expresaba el problema y la polarización principales que vivía la sociedad peruana en ese momento. Por lo menos así lo entendieron y lo expresaron en la práctica los diferentes sectores de la élite política: la marcha del 3 de noviembre se cerró a las dos de la tarde con un simbólico abrazo entre Henry Pease y Mario Vargas Llosa, al pie del monumento al almirante Miguel Grau, en el centro de Lima.

2.4. Los resultados electorales de la primera vuelta: Fujimori sustituye a Izquierda Unida³⁴

El histórico apoyo ciudadano que obtuvo el APRA y la Izquierda Unida en las elecciones presidenciales de 1985 se diluyó en apenas cinco años. Las razones de los resultados: un gobierno aprista con una pésima gestión económica, política y social del país; errores flagrantes de la clase política para enfrentar la guerra contra el senderismo y el MRTA; la crisis interna dentro de la Izquierda Unida; y la desconfianza ciudadana en los partidos tradicionales..

Si el APRA y la Izquierda Unida reunieron poco más de 5 millones de votos en 1985 (78% de votos válidos sobre un total de 6 millones y medio de votos), en 1990 sumaron el 35% (poco más de 2 millones de votantes), menos de la mitad de los

³⁴ Resultados de elecciones 1985 y 1990, disponibles en <http://www.perupolitico.com/?page_id=243>.

votos obtenidos cinco años atrás. El APRA obtuvo aproximadamente 22%, cifra que reflejó el trabajo de su militancia que pese al catastrófico gobierno de García mantenía su apoyo. Este resultado revelaba también que más de la mitad de los votos que logró García para ganar la presidencia se debían a su imagen de político joven y líder carismático; además de la solidaridad que seguramente muchos ciudadanos expresaron con su voto a un partido históricamente vetado y perseguido por sus adversarios políticos.

Por su parte, la Izquierda Unida se dividió en 1989 a consecuencia de sus pugnas internas, del sectarismo en sus filas y de desacuerdos programáticos. Esto mermó en gran medida el protagonismo que obtuvo desde principios de los años 80. El candidato de Izquierda Unida, Henry Pease, obtuvo 8%; mientras que Alfonso Barrantes, representante de la Izquierda Socialista logró apenas el 5%, ambos resultados muy lejanos del 25% que alcanzó en 1985. Cabe indicar que este porcentaje de votos perdidos se desplazó hacia Cambio 90, y la figura de su candidato Alberto Fujimori, que proyectaba la imagen del hijo de migrantes que se formó profesionalmente a base de esfuerzo (en el imaginario nacional es usual vincular a los japoneses con el progreso), con independencia política (no pactó con ningún partido) y solvencia académica (agronomo, rector y presidente de la Asociación Nacional de Rectores).

Los resultados de la primera vuelta le dieron el triunfo a Vargas Llosa, pero la diferencia en relación con Fujimori era demasiado reducida como para asegurar su victoria en la segunda vuelta, pese a la gran maquinaria propagandística impulsada desde los medios a favor del Fredemo. Tras conocer los resultados, la primera y desesperada reacción de Vargas Llosa fue proponerle a Fujimori “actuar patrióticamente”, lo que se traducía en retirar su candidatura, para evitar una innecesaria segunda vuelta electoral. Como era previsible, el candidato de Cambio 90 declinó la invitación. Era evidente que con los votos del APRA y la izquierda, adversarios del Fredemo, el candidato Fujimori derrotaría fácilmente a Vargas Llosa.

Cuadro 7

Elecciones presidenciales 1985, resultado nacional			
Candidato	Lista	Absolutos	%
Alan García	APRA	3.452.111	53
Alfonso Barrantes	IU	1.605.139	25
Luis Bedoya	CODE	773.313	12
Javier Alva Orlandini	AP	471.150	7
Róger Cáceres	IN	91.968	1
Francisco Morales Bermúdez	FUN	54.889	1
<i>Votos válidos</i>		<i>6.500.550</i>	<i>86</i>
<i>Votos nulos</i>		<i>551.584</i>	<i>7</i>
<i>Votos blancos</i>		<i>492.597</i>	<i>7</i>
<i>Votos emitidos</i>		<i>7.554.836</i>	<i>91</i>
<i>Ausentismo</i>		<i>788.597</i>	<i>9</i>
<i>Total de inscritos</i>		<i>8.333.433</i>	<i>100</i>

Fuente: Tuesta Soldevilla, Fernando (2001): Perú político en cifras. 1821-2001. Lima: Friedrich Ebert Stiftung

Cuadro 8

Elecciones presidenciales 1990: primera vuelta, resultado nacional			
Candidato	Lista	Absolutos	%
Mario Vargas Llosa	Fredemo	2.163.323	33
Alberto Fujimori	C90	1.932.208	29
Luis Alva Castro	APRA	1.494.231	22
Henry Pease	IU	544.889	8
Alfonso Barrantes	IS	315.038	5
Roger Cáceres	FNTC	86.418	2
Ezequiel Ataucusi	Frepap	73.974	1
<i>Votos válidos</i>		<i>6.641.584</i>	<i>85</i>
<i>Votos nulos</i>		<i>569.537</i>	<i>7</i>
<i>Votos blancos</i>		<i>625.995</i>	<i>8</i>
<i>Votos emitidos</i>		<i>7.837.116</i>	<i>78</i>
<i>Ausentismo</i>		<i>2.176.109</i>	<i>22</i>
<i>Total de inscritos</i>		<i>10.013.225</i>	<i>100</i>

Fuente: Tuesta Soldevilla, Fernando (2001): Perú político en cifras. 1821-2001. Lima: Friedrich Ebert Stiftung.

2.5. Entre la segunda vuelta y la organización del gobierno del orden

La segunda vuelta no hizo sino confirmar la tendencia que se configuraba desde febrero: la propuesta de *shock* de Vargas Llosa se convirtió en eje del debate político y de las alianzas electorales. El peligro de Sendero se trasladó, momentáneamente, a un segundo plano, y algo semejante ocurrió con la crisis económica que el país heredaba del gobierno de García.

El apunte de Alfredo Barnechea respecto a que los resultados electorales de 1990 indicaban una modificación en el sentido común de los peruanos sobre el manejo de la economía es relevante: “[...] la población no se volcó hacia los candidatos de la izquierda o el APRA, lo que constituye un síntoma de que ya se había producido un vuelco en la cultura económica de los peruanos. Se dirigió hacia un candidato exótico e impensado, cuya ambición parecía ser apenas ocupar un escaño en el Senado” (Barnechea 1995: 378).³⁵

Gana la alianza APRA-Fujimori y fracasa la desesperada estrategia de la derecha política, económica y eclesial

El esfuerzo del Fredemo por centrar la atención en la crisis económica que el APRA había causado con su política heterodoxa fracasó. No logró captar suficientemente la atención ni despertó la preocupación de la mayoría de los electores. La identificación de Varga Llosa con la derecha y con los ricos tuvo un efecto superior a la hiperinflación.

La sui géneris situación política permitió al partido aprista señalar, luego de la primera vuelta, que se confirmaba como la primera fuerza política organizada del país y como el partido mayoritario en el Congreso Nacional. No le faltaba razón: el Fredemo era un frente de derecha y Cambio 90 una organización salida de la nada. Después de cinco años de gobierno, con resultados económicos desastrosos, el

³⁵ Alberto Fujimori postulaba a la presidencia y, al mismo tiempo, figuraba como cabeza de lista para el Senado, en virtud de una opción electoral entonces vigente.

oficialismo pudo darse el lujo de hacer esa afirmación. Tal fue, sin embargo, como se demostraría posteriormente, una apreciación cortoplacista.

La arremetida política y mediática del APRA, convertido en el gran elector gracias a su alta votación (más del 20% nacional), confirmó que la elección presidencial estaba definida. Por su parte, Cambio 90 había desmantelado electoralmente a la izquierda al ganar en los principales distritos y departamentos que durante diez años habían votado por candidatos de esta última tendencia.

La simple suma de la votación de Cambio 90 (27%), el alto porcentaje del voto aprista (22%) y el cerca de 14% que mantuvieron en la primera vuelta las dos listas de izquierda, otorgaban a Fujimori una práctica y clara victoria. Estas semanas, que fueron el último período de apogeo del reformismo radical en el país, proyectaron la sensación equivocada de que se podía derrotar otra vez a la derecha al impedir que llegara al poder un candidato tan renombrado como Vargas Llosa.

La arremetida de los partidos y movimientos reformistas se expresó no solo en las reacciones del APRA y de la Izquierda Unida. Incluso el movimiento armado MRTA reconoció en la figura de Fujimori, dos semanas después de la primera vuelta, la expresión del rechazo del pueblo a los políticos de derecha, y calificó al Fredemo como “el enemigo natural”. Llamó a que Izquierda Unida se sumará a su actividad armada (varios diarios: 18.4.90) e incluso un sector de ese movimiento armado planteó conceder una tregua de dos años al eventual y futuro gobierno de Fujimori para que desarrollara una política a favor de los más necesitados (varios diarios: 20.4.90).

El debate electoral continuó cada vez más áspero y no faltaron amenazas veladas o explícitas de intervención militar en el caso que Fujimori ganara la segunda vuelta. El general (r) Luis Cisneros Vizquerra afirmó que “Los golpes de Estado no se han eliminado en la historia política del Perú [...] ante el caos alguien tiene que sacar la cara y los más llamados a sacar la cara son las Fuerzas Armadas. Ojalá no se presente esta situación” (*Expreso* 29.4.90).

Los problemas de fondo, como los vinculados a las finanzas, que después enfrentaría el gobierno de Fujimori, seguían manifestándose: las Naciones Unidas anunciaban que el Perú y otras nueve naciones habían perdido el derecho a voto en la Asamblea General por falta de pago de sus cuotas, a pesar de que en Lima el Banco de la Nación informaba que se había cancelado el monto adeudado, con lo cual se regularizaba la situación. El embajador de Estados Unidos en el Perú señalaba que su gobierno no tenía ningún propósito de enviar tropas norteamericanas para realizar operaciones en el Alto Huallaga ni en otro lugar del Perú, pero añadía que “Lo que sí estamos dispuestos a hacer es enviar entrenadores policiales y militares, si lo quiere el gobierno peruano”.

En mayo de 1990 se inició una nueva ofensiva del APRA, a través de su ex candidato presidencial, Luis Alva Castro, quien anunció en un mensaje por el día del trabajador que la militancia de su partido saldría a las calles para defender la estabilidad laboral, garantizar la gratuidad de la enseñanza, y, sobre todo, cerrar el paso a la ilusión de aplicar el *shock* que tenía la derecha, representada en el Fredemo. La polarización política no podía ser más clara: se enfrentaban las fuerzas de la derecha, agrupadas en torno a un programa conservador neoliberal contra las que representaban el sentido común instalado en el país desde la década de 1970, encarnados en las variantes políticas que iban desde el reformismo moderado hasta el más radical.

La campaña organizada por el Fredemo para desprestigiar la candidatura de Fujimori fracasó. Las denuncias sobre supuestos delitos del candidato de Cambio 90 con relación a la subvaluación del precio —y la consiguiente evasión tributaria— en la compra-venta de casas y departamentos cayeron saco roto. La gran mayoría de la población no se interesó por (o no creyó en) este tipo de argumentaciones o las minimizó ante la esperanza de encontrar una alternativa favorable.

La segunda vuelta: la suerte echada

Las encuestas de intención de voto para la segunda vuelta electoral daban a Fujimori aproximadamente 50% de intención de voto. A un mes de proceso, una encuesta aplicada por el grupo Lacey Bits Bytes, señaló que 77% de quienes habían votado por Alva Castro (APRA) lo harían por el candidato de Cambio 90, además de

alrededor de 60% de los que habían marcado por Pease o Barrantes. En la gran Lima, según la empresa Datum, Vargas Llosa aún aventajaba a Fujimori por un estrecho margen: 46.3% frente a 41.7%.

Induciendo la polarización política contra la propuesta neoliberal de Vargas Llosa, el APRA restituyó, mediante la Ley 25210, el derecho de los trabajadores de hospitales y clínicas particulares a tener un solo procedimiento de negociación colectiva. Otra señal de la voluntad del entonces presidente García de confrontar con el programa de Vargas Llosa fue la promulgación de la Ley del Profesorado, Ley 25212, promulgada el 17 de mayo, que otorgó beneficios económicos y laborales al gremio magisterial.

Durante esas semanas la acción de Sendero Luminoso continuó en el campo y en algunas ciudades. Una de las acciones más dramáticas fue el asesinato selectivo de dirigentes del APRA: a fines de abril, Felipe Santiago Salaverry (ex director del Seguro Social); y el 14 de mayo, en Piura, el regidor José Manuel Garavito Barba.

La campaña de la Iglesia Católica se mantuvo firme contra los grupos evangélicos que formaban parte de la alianza que había aglutinado el candidato Alberto Fujimori. El obispo de Lima, cardenal Augusto Vargas Alzamora, afirmó que los evangélicos no responden a la tradición cristiana. Dos días después, en respuesta a esta opinión, el secretario general del Concilio Nacional Evangélico del Perú, Pedro Merino Boyd, negó que sean las iglesias evangélicas las propiciadoras de una campaña contra la Iglesia Católica. Durante los últimos días de mayo, en un acto desesperado de la cúpula católica se informó que la procesión del Señor de los Milagros saldría por las calles en acto de desagravio contra algunas presuntas declaraciones de sectores evangélicos de Cambio 90. El candidato Fujimori respondió a la defensiva a los ataques de la Iglesia Católica asegurando que su gobierno no modificaría ningún punto del texto constitucional referido a las relaciones entre Iglesia Católica y Estado peruano.

La tensión se agudizaba y era más claro que se conformaban dos grandes bloques: el del Fredemo, liderado por Vargas Llosa, que proponía una reforma radical de derecha del Estado y de la economía, y el dirigido por APRA, con Cambio 90, que se

anunciaba partidario del papel decisivo del Estado en la economía y en la política, intentando bloquear, a pesar de la crisis, la propuesta de la derecha neoliberal. La improvisación de la candidatura de Fujimori resultó evidente: ante las críticas de sus adversarios respecto a su falta de programa, se vio obligado a publicar una versión en el diario *Página Libre*, afín a su candidatura: “Plan de Gobierno de Cambio 90: Una propuesta para el Perú” (21.5.90).

En este lapso, entre la primera y la segunda vuelta, comenzó a quedar claro que la izquierda perdía prácticamente toda iniciativa política. La dimensión de su derrota se hacía evidente. Durante los primeros días de junio, el Partido Socialista Revolucionario (PSR) fue uno de los primeros en declarar su acuerdo de votar por el candidato de Cambio 90. A pesar de ello, había indecisión en las filas de las dos grandes agrupaciones de izquierda (Izquierda Unida y Acuerdo Socialista), sobre si apoyar o no a Fujimori y de qué manera hacerlo.

Será recién después del debate presidencial entre Vargas Llosa y Fujimori cuando la Asamblea Nacional Popular, a través de su presidente, el diputado electo de Izquierda Unida, Ricardo Letts, llamó a respaldar a Fujimori. Una decisión semejante dieron a conocer en un comunicado conjunto la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Movimiento Manuela Ramos, la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú, el Sindicato de la Compañía Peruana de Teléfonos y las Comunidades Nativas Ashánincas. El gremio de choferes de Lima y Callao respaldó en solitario la candidatura de Vargas Llosa.

El APRA, por el contrario, se manejó abiertamente, desde el poder, a favor de la candidatura de Fujimori. Desde Trujillo, a fines de mayo, el partido aprista hizo una nueva declaración pública en el que ratificaba que su militancia no votaría por la derecha rechazando el proyecto neoliberal. El presidente García declaró que deploraba la “campaña sucia” que, en su afán por alcanzar el gobierno, estaba desplegando la derecha contra el candidato Alberto Fujimori. Una muestra más del empeño aprista por ganar puntos en las encuestas y votos en las urnas a favor de Fujimori fue la decisión del Presidente de promulgar otras dos leyes de carácter laboral: la referida a la negociación colectiva por rama de actividad económica y la relacionada a la compensación por tiempo de servicio.

El 4 de junio tuvo lugar el debate televisivo entre los dos candidatos, última gran esperanza de los partidarios del Fredemo: el escritor Mario Vargas Llosa, reconocido mundialmente, podía y debía barrer al desconocido ingeniero Alberto Fujimori. Sin embargo, el resultado del debate fue una desilusión para los partidarios del Fredemo. Incluso el candidato de Cambio 90 dio un golpe mediático presentando una edición del diario *Ojo* que daba como ganador anticipado del debate a Vargas Llosa, denunciando así la presunta manipulación informativa de un sector del periodismo.

Segunda vuelta: frente a un ganador

La segunda vuelta electoral se realizó el domingo 10 de junio y esa misma noche se confirmó el triunfo de Fujimori. El presidente García se mostró eufórico durante esas horas y opinó que la concertación y la concordia se imponían como las principales tareas a ser encaradas por el nuevo gobierno. El APRA insinuaba que pretendía monitorear el futuro gobierno, sentando algunas pautas antes de su instalación formal. El aprismo se esforzó por anclar al nuevo gobierno en un espacio político en el que pudiera seguir teniendo una influencia decisiva, más aún cuando gracias a su importante representación parlamentaria su influencia en el Congreso era incuestionable.

Cuadro 9

Elecciones presidenciales 1990: Segunda vuelta, resultado nacional			
Candidato	Lista	Absolutos	%
Alberto Fujimori	C90	4.489.897	62
Mario Vargas Llosa	Fredemo	2.708.291	38
Votos válidos		7.198.188	90
Votos nulos		604.598	8
Votos blancos		155.446	2
Votos emitidos		7.958.232	80
Ausentismo		2.049.382	20
Total de inscritos		10.007.614	100
Fuente: Tuesta Soldevilla, Fernando (2001): Perú político en cifras. 1821-2001. Lima: Friedrich Ebert Stiftung.			

El 11 de junio, *El Comercio*, diario que había sostenido la candidatura de Vargas Llosa, hacía una advertencia: “Alberto Fujimori resulta ser el nuevo jefe de Estado,

[pero] se sigue desconociendo todavía qué propuesta llevará a Palacio para inaugurar su gobierno en el período 90-95” (11.6.90). Ese mismo día, alrededor de trescientas personas de clase media alta y alta, la mayoría vestidas de riguroso luto, desfilaron llorosas por calles de Miraflores, hacia la casa de Vargas Llosa.

Eran las reacciones opuestas ante el triunfo del candidato de Cambio 90: el APRA lo consideraba indirectamente un triunfo suyo y trataba de establecer pautas para el nuevo gobierno; la derecha mostraba su desazón por la derrota de un candidato que consideraban de “lujo” para el Perú. Los fredemistas salieron una vez más a la calle en caravanas, el 12 de junio, dos días después de la derrota de su candidato, a los gritos de “Y va a caer, y va a caer, el chino de mierda va a caer”: una actitud provocadora, racista y golpista.

En el ámbito internacional, el gobierno japonés se movilizó con prontitud a favor del presidente electo. Una delegación de representantes de empresas japonesas con sede en el Perú visitó a Fujimori. Se le sumaron funcionarios de la embajada del Japón y de la empresa Jetro, organismo estatal japonés dedicado a promover el intercambio comercial a nivel internacional.

2.6. Entre la segunda vuelta y el 28 de julio de 1990: los primeros ajustes del proyecto individual del presidente electo

Las ilusiones de los que apoyaron a Fujimori desde el APRA, la izquierda y el amplio abanico reformista, se comenzarían a desvanecer con prontitud. A menos de una semana de haber ganado la elección presidencial, Fujimori impuso ‘a dedo’, como secretario general de Cambio 90 a Andrés Reggiardo, originando una intensa protesta entre bases de su agrupación política en Lima y ocho ciudades del interior del país que reconocían a Víctor Homma como su verdadero secretario general.

Adiós a los partidos (y a los aliados electorales)

A una semana de su elección, Fujimori descartó la posibilidad de establecer pactos políticos con los partidos que lo apoyaron en la segunda vuelta. Solo mencionó de

manera gaseosa la necesidad de llegar a un consenso con partidos y organizaciones sindicales³⁶.

En este contexto, el primer vicepresidente, Máximo San Román, se aventuró a formular un llamado —en la actualidad impensable— a los integrantes del MRTA y de Sendero Luminoso para que depusieran las armas e intervinieran en la “reconstrucción nacional”. Un día después, el cardenal Augusto Vargas Alzamora, recogiendo la preocupación del vicepresidente, declaró: “el Perú necesita una tregua definitiva de los terroristas, porque las ideas no se imponen con las armas, sino con las razones” (varios diarios 18.06.90). Con Sendero Luminoso y el MRTA activos, y después de un proceso electoral particularmente tenso, diversos sectores de la opinión pública no descartaban la conveniencia de que se abriera algún tipo de diálogo político con los movimientos subversivos. Esta opinión fue compartida por parlamentarios que propusieron a la Iglesia Católica como la mejor interlocutora en ese probable diálogo.

El 21 de junio, diez días después de la elección de Fujimori, el segundo vicepresidente electo, Carlos García García, consideró muy positivo el anuncio de tregua formulado por el líder del MRTA, Víctor Polay. Sin embargo, la revista *Cambio*, cercana a las posiciones políticas de esta organización, desmintió ese mismo día que la propuesta de tregua hubiera sido formulada por este dirigente.

El presidente Alan García, con el ánimo de congraciarse con el presidente electo, observó la ley que nivelaba los salarios de los empleados y profesionales del Ministerio de Salud con los del Instituto Peruano de Seguridad Social.

Uno de los primeros que reparó en que los esfuerzos del APRA por copar al nuevo mandatario podían fracasar fue Manuel D’Ornellas, director del diario *Expreso*: “el

³⁶ Julio Cotler afirma al respecto, con relación a este período y sobre todo a los meses venideros: “[...] el flamante Presidente, con la habilidad propia de un tradicional y experimentado político, fue creando lazos de apoyo y neutralizando oposiciones sin comprometerse en alianzas que pudieran limitarlo; mientras tanto apelaba al “pueblo” contra la ineficiencia y corrupción política, que convirtió en temas de sus repertorio y que le otorgarían valiosos dividendos” (Cotler 1993: 22).

presidente electo ha querido demostrar que no suscribe la política ante el FMI de García” y “ha sostenido que él está más cerca de Mario Vargas Llosa que de Alan García Pérez [...] por impedir la victoria de Mario Vargas Llosa el gobierno respaldó impudicamente a Alberto Fujimori. Pero ahora Fujimori quiere por lo visto, emanciparse de esa tutela” (*Expreso*, 19.6.90).

Una declaración del 22 de junio constituyó una señal de lo que serían las relaciones más consistentes que Fujimori estableció durante su gobierno: aseguró que sus relaciones con las Fuerzas Armadas eran y serían excelentes, y que ello se traduciría en acciones de colaboración y participación tanto en el combate a la subversión armada como en obras vinculadas al desarrollo nacional.

El fin de un romance fortuito y el inicio de nuevos amores

El inicial esfuerzo de Fujimori por desmarcarse rápidamente del APRA y de quienes lo habían apoyado durante la segunda vuelta se reiteró: la ONU, con el embajador peruano Javier Pérez de Cuellar como secretario general, ofreció sus buenos oficios para que el presidente electo se reuniera con el Fondo Monetario Internacional. Simultáneamente, personas cercanas al equipo económico de Fujimori —formado apresuradamente entre la primera y la segunda vuelta— comenzaron a renunciar; el primero fue el economista Oscar Ugarteche. El 27 de junio, a pocas horas de viajar Fujimori a Estados Unidos, se conoció que había graves desacuerdos frente a diferentes aspectos del programa económico que se debía presentar a las entidades crediticias internacionales con la que se negociaría.

El equipo económico original de Fujimori, fue desmontado con la misma premura con la que fue constituido, estaba a punto de estallar. El presidente electo había tomado contacto con Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD)³⁷, con excelentes relaciones en Naciones Unidas y en el mundo

³⁷ Cotler traza un perfil político de Hernando de Soto: “Desde mediados de los ochenta, Hernando de Soto (1984) inició una eficaz crítica liberal del orden patrimonial que cobró inusitada vigencia a partir de la debacle producida por García. Ella se fundaba en que la irresponsabilidad política de los gobernantes, ‘dictadores electos por cinco años’, permitía al Estado, vía los partidos, otorgar prebendas de tipo ‘mercantilistas’ que frenaban el desarrollo

financiero internacional³⁸. El expresidente del directorio del Banco de la Nación y futuro canciller, Augusto Blacker Miller, adelantó el camino que debía transitarse: “comencemos a pagar los pecados de los excesos cometidos en los últimos cinco años. Creo que esto es algo importante, que hay que entenderlo para no volverlo a cometer. La economía artificial de crecimiento comenzó a sentar la base de la distorsión que ahora pagamos” (varios diarios, 27.06.90).

En un desesperado esfuerzo por sostener y darle continuidad a algunas políticas de su gobierno, el todavía presidente Alan García sostuvo que la rebaja sustancial de la deuda pública de América Latina con Estados Unidos, anunciada por el presidente norteamericano George Bush, demostraba que la posición peruana asumida por su gobierno desde hacía cinco años, sí tenía sentido. “Andamos en el camino de la historia”, afirmó.

El quiebre de la efímera alianza reformista constituida para derrotar a Vargas Llosa estaba a punto de producirse. Sería, además, una ruptura sin retorno. Se iniciaría un cambio sustantivo de la economía peruana y del papel que había cumplido el Estado durante los últimos veinte años. Comenzaban a sentarse las bases de una sólida alianza política, liderada por Fujimori, con las Fuerzas Armadas, y poderes fácticos nacionales y centros de poder internacionales, sobre todo multilaterales y transnacionales, en ese momento sostenidas por el FMI.

El 1 de julio, el exministro de Economía del gobierno aprista, Abel Salinas, negociador de la deuda externa durante los meses finales del gobierno de su partido, expresó su

de las iniciativas individuales, especialmente de los más pobres, bloqueando el desarrollo del mercado y fomentando la corrupción” (Cotler 1993: 20).

³⁸ “Al iniciar su gobierno, Fujimori se encontró con la necesidad urgente de estabilizar la economía y derrotar a la subversión. Como también lograr estas metas mediante el fragmentado poder político en el Congreso y las reglas de juego constitucionales desarrolladas a partir de 1980 [...] La primera decisión clave adoptada por Fujimori fue la de gobernar con el apoyo de la comunidad financiera internacional y adoptar un plan de estabilización económica ortodoxa —un programa de ‘shock’— abandonando sus promesas electorales. Diez días después de emerger victorioso en la segunda vuelta electoral contra Vargas Llosa, Fujimori ya estaba dejando atrás la imagen del candidato populista y heterodoxo para asumir el rol de un presidente electo ortodoxo y ajustador” (Resumen Semanal 22-27, junio 1990).

preocupación frente a los avances de Fujimori en la reunión con los máximos representantes del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Desde la otra acera, los que habían llorado por la derrota de Vargas Llosa hacía pocas semanas, comenzaban a cambiar de semblante. El 3 de julio, *Expreso* señalaba: “Alberto Fujimori sigue sorprendiendo gratamente; no cabe duda de que su viaje ha sido positivo: ha dejado dos cosas, un verdadero apoyo del director del Fondo Monetario Internacional, y la conformación de un grupo de trabajo encargado de asesorar la preparación de un programa económico”.

En la misma dirección declaraba De Soto, al confirmar la decisión de Fujimori de privatizar las empresas públicas que no fueran las principales ni las estratégicas. Constituido en práctico vocero transitorio del presidente electo, adelantó la posibilidad de un referéndum para saber si el pueblo aceptaba o no un pacto con los organismos internacionales de crédito. La razón esgrimida era que la situación económica del país seguía siendo desesperada.

El 8 de julio los medios de comunicación informaban, luego del retorno de Alberto Fujimori de su gira por Estados Unidos y Japón, que el presidente electo planteaba la necesidad de un reajuste económico drástico, concreto y pragmático, que incluía un impuesto básico por una sola vez sobre los ingresos de quienes más ganaban.

El 9 de julio se produjo la fuga de 48 miembros del MRTA del penal Miguel Castro Castro, a través de un túnel de concreto armado construido por los reclusos. Los críticos del APRA insinuaron que hubo complicidad del presidente García, debido a su vieja amistad con Víctor Polay, jefe principal del MRTA, detenido en esa prisión. *La República* opinaba el 11 de julio en su editorial que “frente a lo ocurrido no caben los niveles de serenidad y paciencia que reclama el presidente García. Solo queda manifestar la incredulidad y el hartazgo [...] y denunciar una vez más la corrupción, que se ha desarrollado con una monstruosa excrecencia durante esos años”.

La crisis del equipo económico de Cambio 90 fue definitiva el 16 de julio con la renuncia del economista Santiago Roca, quien había oficiado como jefe del programa de gobierno de Cambio 90. El 17 de ese mismo mes, las fuerzas reformistas de

izquierda ya alertadas frente al acelerado e inconsulto cambio de posición de Fujimori, indujeron a la Confederación Campesina del Perú (CCP), agrupación gremial liderada por el Partido Unificado Mariateguista (PUM), a llamar a las organizaciones políticas y populares a una movilización para exigirle al presidente electo el cumplimiento de sus promesas de campaña. La alianza ganadora estaba rota antes del 28 de julio, fecha de la asunción del mando del nuevo presidente.

El 18 de julio, en una muestra de que las decisiones principales se adoptarían con celeridad y sin consideración para con sus efímeros aliados, el presidente electo presentó como futuro ministro de Economía y Finanzas al ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller, exministro de Agricultura del segundo gobierno de Fernando Belaunde. Este anuncio se produjo después de una reunión de tres horas sostenida entre ambos en el Círculo Militar, ambiente físico desde el cual Fujimori despachó regularmente durante las semanas previas y posteriores al 28 de julio³⁹.

Se prepara el ambiente para el shock: con partidos, no; con personalidades, sí

El presidente electo invitó a integrantes de Izquierda Unida a formar parte su primer gabinete ministerial. El juego político de Fujimori y de su entorno dio señales de habilidad y oficio: se alejó del APRA, fuerza amenazante dada su votación y el alto número de sus parlamentarios; rompió sus “compromisos” electorales y pactó con nuevos aliados en el exterior (sobre todo con el FMI), pero paralelamente tendió una

³⁹ “La segunda decisión que Fujimori tomó fue la de gobernar con el apoyo directo de las Fuerzas Armadas, una opción simbolizada por la mudanza del presidente electo al Círculo Militar entre 11 y el 28 de julio de 1990. La complacencia de Fujimori para con los militares provocó advertencias tempranas acerca de la posibilidad de una dictadura cívico-militar emergente (Oiga, 6 de agosto de 1990). Desde el punto de vista de Fujimori, había por lo menos tres razones para gobernar con el apoyo directo de las Fuerzas Armadas: primero, una relación cercana con los militares fue necesaria para combatir con eficacia a Sendero Luminoso y el MRTA, y lograr la pacificación sin la cual su gobierno fracasaría, segundo, Fujimori contaba solo con el apoyo de su endeble movimiento político y necesitaba urgentemente el apoyo institucional que las Fuerzas Armadas podían ofrecerle; y tercero, aliarse con los militares fue la mejor forma de prevenir y evitar un movimiento golpista en su contra. Según algunas fuentes, sectores de las Fuerzas Armadas habían estado preparándose para un eventual golpe desde 1989 (revista *Sí* 18 y 25 de noviembre, 1990)” (Kenney 1997: 84-85).

mano a Izquierda Unida para neutralizarla y dividir a las fuerzas que lo habían apoyado durante la segunda vuelta —el APRA, IU y Acuerdo Socialista—. Esa semana se nombró como ministros a dos militantes de izquierda: el diputado Fernando Sánchez Albavera en la cartera de Energía y Minas, y Gloria Helfer en Educación.

Alan García, en un esfuerzo por impedir lo que comenzaba a ser una amenaza a su proyecto de mantener al Perú político en el ámbito de su influjo y fuera de la influencia del FMI y sus programas, declaró que las centrales sindicales eran las llamadas a luchar contra el *shock* económico que se preparaba. El futuro ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, confirmó el anuncio esperado seis días antes del 28 de julio declarando que, efectivamente, se aplicaría un programa de ajuste que tendría como propósito cerrar tres brechas: la fiscal, la deuda exterior y la pobreza.

El 26 de julio, como para indicar que la posibilidad de diálogo con el gobierno electo se había cerrado, un cohete Instalazza (probablemente lanzado por el MRTA) impactó en los faroles del fierro forjado de Palacio de Gobierno. A la misma hora, otro comando subversivo incendió un ómnibus que transitaba por una avenida principal del populoso distrito de Villa El Salvador; y más tarde, tres subversivos ingresaron a la agencia de noticias alemana DPA, para transmitir un mensaje al exterior.

El país, extenuado, esperaba el fin del gobierno aprista y se preparaba, con una buena dosis de incertidumbre y resignación, a recibir al nuevo mandatario: “felizmente, mañana es la transmisión del mando de Alan García a Alberto Fujimori. Durante cinco años, nos ha gobernado la ineptitud y la improvisación, cubiertas ambos por un manto de arrogancia”, escribía D’Ornellas (*Expreso*, 27.07.90).

El golpe militar preparado por un sector militar sumamente conservador quedó en suspenso ante los cambios inesperados del presidente electo: “El pronunciamiento militar previsto para el 27 de julio por la última apreciación de inteligencia anexa al Plan Político-Militar se volvía improcedente en el momento en que Fujimori accedía a realizar las metas de dicho plan. Es más, si la idea era que el control de las Fuerzas Armadas sobre el gobierno elegido fuera secreto. Esta versión perfeccionada y, al mismo tiempo, mediatizada del Plan Político-Militar fue puesta en vigor por Montesinos y Fujimori en las conspiraciones de junio. Así quedaron fuera de lugar

las fantásticas instituciones secretas de que hablaba el Plan [...] y también la Junta de Gobierno. Pero el gobierno en la sombra sí existiría. Su sede sería el SIN y todas sus funciones serían dirigidas por Vladimiro Montesinos (Reátegui 2009: 164)

*La juramentación*⁴⁰

Alberto Fujimori recibió la banda presidencial de su antecesor. En su discurso del 28 de julio de 1990⁴¹, definió una línea central de su gobierno: justificar el inicio de un nuevo período político sobre la base de proponerse superar el caos político y el desastre económico que recibía de su antecesor. Fujimori prometió luchar contra la corrupción y el narcotráfico, el cual había logrado “penetrar también la esfera del Estado” (Fujimori 1990: 1), asimismo, aseguró que su gobierno respetaría escrupulosamente la libertad de información y crearía condiciones necesarias para un mejor ordenamiento del mercado, “la distribución equitativa de la riqueza [...] una verdadera economía social de mercado” (Fujimori 1990: 3), que no pretende privatizar todas las empresas públicas⁴².

Respecto a la guerra interna, aseguró que “sólo la eliminación definitiva de la injusticia y la marginación puede acabar con la subversión armada. Por ello mi gobierno dará efectiva prioridad al desarrollo de las zonas andinas y de la selva de nuestro país, hoy convulsionadas por el terrorismo (Fujimori 1990: 9), dejando abierta la posibilidad de entablar un diálogo “con los grupos alzados en armas,

⁴⁰ “Dos procesos interfirieron y transformaron los planes golpistas que se urdían dentro de las Fuerzas Armadas, la victoria electoral de Fujimori y las condiciones que pusieron los Estados Unidos para prestar ayuda económica a la lucha contrasubversiva y antinarcóticos. Ciertamente, el Plan Político-Militar había subestimado ambos factores. [...] Los golpistas quedaron obligados a recomponer su diagnóstico de la coyuntura y, en consecuencia, sus planes operativos [...] Al día siguiente de las elecciones, en una nueva apreciación de inteligencia fechada el 9 de abril [...] Los planes de golpe quedan, pues, suspendidos, porque “un pronunciamiento después de la segunda vuelta electoral constituye ir en contra de una esperanza de cambio ya configurada en una fuerza electoral con no menos de 50% conformada por los estratos de menores niveles económicos que verían que la irrupción de las Fuerzas Armadas es a favor de los ricos del Perú” (Reátegui 2009: 163).

⁴¹ Alberto Fujimori, Mensaje a la Nación, 28 de julio de 1990. Disponible en: <<http://www.congreso.gob.pe/museo/mensajes/Mensaje-1990-2.pdf>>.

⁴² Finalmente, el primer gobierno fujimorista cede a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, y se alinea con el Consenso de Washington.

siempre que éstos las depongan; el pueblo me ha elegido, entre otras cosas, para buscar la unidad de los peruanos, incluidos los equivocados” (Fujimori 1990: 9). Más adelante se compromete a respetar y promover los derechos humanos, y que ello sería una firme línea de acción de su gobierno. Culminó su mensaje con una interpretación de los resultados electorales y las expectativas ciudadanas: “El 10 de junio tu voto fue por la esperanza. Este país que perdía el rumbo, esta sociedad, cansada de la demencia de la demagogia y la inoperancia gubernativas, acudió al llamado de un mensaje de renovación. Apostó nuevamente por democracia y nos toca a los hombres hoy en el gobierno ser fieles a su mandato” (Fujimori 1990: 11).

Comienza así un capítulo decisivo en la historia política del país del fin del siglo XX y comienzos del XXI: para que el país fuera viable, debía producirse un viraje decisivo de la política económica y el estado debía ser capaz de garantizar un orden básico. Estaba en disputa, sin embargo, el camino para alcanzar tales objetivos: la opción por la que había votado el país en la segunda vuelta; el proyecto de Vargas Llosa de un Perú neoliberal y democrático representativo; la alternativa de Sendero Luminoso de un cambio radical sustentado en una propuesta totalitaria y autocentrada en una economía agraria; y la de un neoliberalismo de corte dictatorial.

El proceso de decisión por una de estas opciones sería tortuoso y se perfilaría con el correr de los acontecimientos. Las otras alternativas: la de la socialdemocracia aprista, la de la izquierda radical electoral y la de la derecha socialcristiana quedarían en breve fuera de carrera. El hecho anecdótico y paradójico era que, por primera vez en el siglo XX, el país era testigo del tránsito de un régimen constitucional a otro por tercera vez consecutiva.

Anticipando de algún modo la historia que se viviría, De Soto, en ese momento cercano colaborador de Fujimori, hizo una declaración sorpresiva: “Ojalá Fujimori no crea que solo él tiene las soluciones” (*Expreso*, 30.07.90).

Julio de 1990 concluyó con los altos mandos de las Fuerzas Armadas intentando poner fin a los rumores de golpe militar que habían surgido como producto de la derrota de

Mario Vargas Llosa⁴³. Hablando en nombre de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, general Jorge Torres Aciego, testimonió la lealtad de las “instituciones tutelares del Perú” a su jefe supremo, el presidente Alberto Fujimori. Tales declaraciones no podían esconder que ciertos militares en actividad y algunos retirados habían elaborado el “Plan Verde”, un remedo del proyecto de Augusto Pinochet aplicado en Chile, y que había inquietud en los cuarteles sobre la gestión del presidente electo. El cambio inmediato de una serie de altos mandos militares después de la asunción de Fujimori, evidenció la necesidad de “poner orden” en las Fuerzas Armadas, para lo cual era preciso desplazar a los oficiales que despertaban desconfianza.

⁴³ “El primer acto de Fujimori como presidente fue clarísimo al respecto: el mismo día que juramentó, mandó al retiro a los comandantes generales de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea (Un análisis más completo de la relación entre Fujimori y las Fuerzas Armadas, tendría que precisar el rol específico del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN)” (Kenney 1997: 86).

CAPÍTULO III

NUEVO PRESIDENTE, NUEVA ECONOMÍA, NUEVO PODER (AGOSTO 1990-FEBRERO 1991)

El paquetazo económico que se anunció a inicios de agosto representó la verdadera inauguración del nuevo régimen: el premier y ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, notificó en un mensaje al país las durísimas medidas económicas del ajuste. Dos serían las principales: el aumento exponencial del precio de la gasolina (de 20 soles a 600 soles el galón) y la drástica anulación de los subsidios, sobre todo a los alimentos. Pretendía así acopiar recursos inmediatos y reducir el gasto fiscal. En agosto el aumento del costo de vida fue drástico; y la recesión, dramática.

3.1. El *shock*: entre la implacable medida y el deseo ferviente del orden

No le faltaba razón a Alfredo Barnechea cuando afirmó, a mediados de los noventa, que la crisis económica que vivió el país a fines de los ochenta provocó un cambio sustantivo en la forma como estaba distribuido y organizado el poder: “La desorganización total de la economía tuvo, además, un efecto político: disolvió el poder de muchos grupos de presión y, de esa manera, el Estado —y quien lo dominara— se encontró dueño de una nueva y extraordinaria autonomía” (Barnechea 1995: 382)

La decisión anunciada por el entonces ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado, fue la primera en la dirección de modificar drásticamente la relación entre el Estado y la sociedad, y de iniciar la instalación del modelo neoliberal que le diera, a su vez, una nueva legitimidad al propio Estado. A la autonomía, en el manejo del Estado, a la que se refiere Barnechea debe agregarse, coincidiendo con Jo Marie Burt, que

“Durante sus primeros años, el régimen de Fujimori se embarcó en un proyecto político que implicó la reconstitución de la autoridad estatal y la reestructuración de la economía y las relaciones entre el estado y la sociedad, siguiendo los lineamientos básicos del modelo neoliberal” (Burt 2009: 262).

Sin embargo, como una señal de la relación que se establecería posteriormente, y por muchos años, entre Fujimori y grandes sectores de la opinión pública peruana, 49% de limeños aprobaron el durísimo programa económico de Hurtado Miller, mientras que solo 19% consideraron que fracasaría (Apoyo, Opinión y Mercado, agosto 1990). Un 32% no sabía o no tenía opinión. En el ámbito parlamentario, Fujimori obtendría el apoyo político de la derecha —es decir, de los partidos del Fredemo, sus antiguos y acérrimos adversarios— e incluso de la bancada del APRA. Durante los primeros meses de gobierno, la bancada de Izquierda Unida no consiguió siquiera reunir las firmas necesarias, en la Cámara de Diputados, para interpelar al gabinete Hurtado Miller: alcanzó 14 firmas de 180, una verdadera debacle; igual suerte corrió otra moción de corte más moderado que presentó la bancada aprista.

De manera paralela a la adopción de las medidas económicas, el gobierno efectuó otros ajustes en aras de constituir una nueva estructura de poder; por ejemplo, redujo a tres miembros el quórum en el directorio del Banco Central de Reserva (BCR). El mensaje implícito era claro: el gobierno, y en particular el Ministerio de Economía y Finanzas, pretendían una injerencia decisiva sobre las decisiones del BCR.

Por otro lado, Fujimori recibió la visita de Margaret Anstee, alta funcionaria de las Naciones Unidas encargada de los programas de apoyo social, que a partir de ese momento se organizarían en gran escala para socorrer a los que caían bruscamente en situación de pobreza. La relación del estado peruano con los pobres se modificó sustantivamente. El discurso político al respecto sufrió una modificación clave: los pobres debían ser objeto de asistencia social —vía los programas de emergencia—, ya no de un empleo para vivir dignamente. Este cambio de la percepción de los “pobres” —nuevos y antiguos—, funcionó como un mecanismo de exclusión justificada. Japón y España fueron los primeros países que oficializaron, en este contexto, una ayuda de emergencia al Perú por más de 5 millones de dólares.

El esfuerzo por comenzar a capturar los instrumentos centrales del poder no se redujo a estos movimientos iniciales: 26 generales de la Policía Nacional pasaron a la situación de retiro “por renovación de cuadros”. El presidente lanzó sus primeras andanadas públicas de crítica contra el Poder Judicial, que el presidente de la Corte Suprema rechazó expresamente. El nuevo jefe de Estado canceló un viaje a Colombia cuando le advirtieron que se estaría preparando una huelga policial. Este hecho justificó el temprano protagonismo de las Fuerzas Armadas, pues se decidió que el ejército patrullara las principales ciudades del país. El temor a saqueos ante la desmesurada alza de precios de artículos de primera necesidad fue preventivamente neutralizado con estas medidas.

Como corolario de estas acciones de organización del nuevo poder y, consecuentemente, de las nuevas alianzas, el Departamento de Estado de Estados Unidos congratuló al presidente y a su gobierno “por haber tomado una acción de coraje para restablecer la estabilidad de la economía del Perú. Esperamos que estos pasos conduzcan a un desarrollo económico sostenido y permitan que el Perú se beneficie de la integración a la comunidad económica mundial”.

El analista y sociólogo peruano Carlos Franco resumió de forma lúcida este rápido tránsito del gobierno de Fujimori: “todo lo que está ocurriendo actualmente en el Perú ilustra claramente que el pueblo ganó las elecciones, pero el FMI y los grupos de poder interno ganaron la presidencia [...] Para mí, Alberto Fujimori ha traicionado la palabra empeñada al país” (*La República*).

A contracorriente de la opinión de las fuerzas políticas que habían apoyado a Fujimori entre la primera y la segunda vuelta, otra encuesta de Apoyo Opinión y Mercado, consignaba que 51% de los peruanos ratificaban su adhesión a Fujimori y 54% aprobaban la gestión de su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, a pesar de la dureza de las medidas dictadas.

Durante estos primeros meses de gestión, el discurso del gobierno sobre el orden buscaba el apoyo de los distintos sectores sociales de la nación. El propio ajuste económico fue hábilmente presentado como un esfuerzo por poner orden y otorgar elementales garantías de seguridad al país. En el contexto de la crisis económica y

política, este discurso fue altamente apreciado por la mayoría de los peruanos, incluso entre los sectores más pobres, los que más habían sufrido con la inflación y el conflicto militar interno. El reformismo, en sus variantes aprista e izquierdista, no valoró la importancia y la urgencia del orden para una sociedad y para una población atravesadas por la angustia de la incertidumbre.

Cabe recordar que dos reconocidos dirigentes de la izquierda formaban parte del primer gabinete: Fernando Sánchez Albavera en Energía y Minas y Gloria Helfer en Educación. En Agricultura se nombró a otra figura vinculada al pensamiento progresista, el ingeniero Carlos Amat y León. El mismo ministro de Economía y premier, Juan Carlos Hurtado, provenía de las filas de Acción Popular y se presentaba como una persona democrática, dialogante y cercana al pensamiento reformista.

3.2. La crítica a las viejas guardias partidarias y el “partido del país”⁴⁴

Fujimori se preocupó de iniciar un ataque sistemático y simultáneamente contra los poderes Legislativo y Judicial, las dirigencias de las centrales sindicales, los partidos políticos y los empresarios, a quienes acusó de corrupción, de actuar irresponsablemente y de no atender las necesidades de los más pobres. El nuevo presidente se instalaba, también en este ámbito de la lucha política, en un espacio privilegiado que le permitía enarbolar un discurso muy apreciado por la mayoría de peruanos desencantados del Estado y críticos extremos de la élite política, sindical y empresarial del país. Se colocó así por encima de las disputas entre sectores políticos, tomando la bandera de la unidad nacional. Esta fue una decisión clave en circunstancias en que los partidos y el Estado eran mirados con desprecio. Decidió

⁴⁴ Fujimori presentó a los partidos políticos como facciones, o grupos que defendían intereses particulares, hecho que en gran medida se ajustaba a la realidad. Contrapuso a esta práctica de facción la constitución de un gobierno que tenía como exclusiva preocupación la nación peruana, su salvación y viabilidad. Construyó un discurso típico de las dictaduras latinoamericanas que se establecen contra los partidos y de alguna manera se aproximó a la idea de “partido del país” que, como explica Sartori (Sartori 1980: 24), Bolingbroke utilizó para referirse a los partidos antes de su moderna caracterización por Burke: “al partido del país se le ‘califica incorrectamente de partido. Es la nación que habla y actúa en el discurso y la conducta de determinados hombres’”.

que era el momento de constituir un “gran partido de la nación”⁴⁵ contra todos los demás partidos y agrupaciones sociales o empresariales, porque mientras presuntamente su propuesta unificaba al país y era solidaria con el dolor de los peruanos, la de los sectores organizados era expresión de intereses fraccionales, de pequeños grupos y, por lo tanto, estrictamente mezquinos. No era ni siquiera un “frente de unidad nacional” a lo que convocó Fujimori, era algo similar al partido de la nación, una representación por encima supuestamente de cualquier interés de grupo. La grave y generalizada crisis que vivía el país castigó a aquellos que aparecieron privilegiando su “parte” por encima del “todo”. El nuevo gobierno ocupó así un nuevo espacio político y de sentido común que le permitió adquirir una gran fuerza, induciendo a que los políticos “tradicionales” aparecieran como aislados y frágiles. Era una regresión del Perú político a una etapa premoderna, en la que los partidos fueron percibidos como un obstáculo, incluso como innecesarios. Aunque no fue el caso peruano, fue la práctica extrema de los regímenes totalitarios.

Afirma Nicolás Lynch, y coincidimos con su apreciación, que Fujimori no salió de la nada, fue producto de gran medida del tipo de poder ejercicio durante la década que concluía, en particular con Alan García: “¿Podemos considerar a Fujimori un fenómeno totalmente nuevo producto quizás de los poderes fácticos? De ninguna manera, Fujimori es producto del fracaso de los partidos durante el período de vigencia democrática y su extrema personalización de la política tiene claros antecedentes en los líderes más importantes de la década de 1980, en especial en quienes encabezaron gobiernos, me refiero a Fernando Belaúnde y Alan García” (Lynch 1999a: 256)

El periodista conservador Patricio Ricketts, avizoró con rapidez este nuevo escenario cuando escribió el 26 de agosto, a menos de un mes de iniciado el nuevo gobierno, que “Fujimori dijo poco pero fue certero y contundente al denunciar a los farsantes que ahora se rasgan las vestiduras, tras atropellar al pueblo como jamás se atrevió a intentarlo el más reaccionario de los gobiernos [...] que los sueldos y salarios no

⁴⁵ Sartori hace referencia a los “partidos de la nación o del país” como una fase previa a los partidos modernos propios de la democracia representativa o liberal.

alcanzan a nadie [...] es verdad de Perogrullo que no necesita discutirse ¿Cómo podrían alcanzar, si el país está en quiebra y al borde del colapso por culpa del APRA y de la comparsa comunista que sacudió con sus atropellos a la economía popular?”.

El presidente Alberto Fujimori volvió insistentemente a la carga repitiendo las afirmaciones de su inaugural discurso contra la vieja clase política y sus instituciones representativas: “el parlamentarismo estéril se sorprende ante las medidas del gobierno [...] se niega a perder viejos privilegios que siempre estuvieron acostumbrados a recibir. Les asombra que lo técnico desplace a lo político” (varios diarios 29.8.90).

El nuevo discurso y la nueva propuesta estaban en plena articulación: crítica a los políticos y a la política partidaria, desprecio por las instituciones democráticas representativas (que la población también despreciaba) y consolidación de un discurso en el cual las medidas de carácter “técnico”, que se presentaban como verdades supuestamente certeras y no contaminadas, estaban por encima de la política y más allá de las discrepancias y diferencias estériles de las fracciones y de los grupos de interés. Este era el camino que había escogido el gobierno para conquistar e instalar, sobre todo, el orden en el país. El eje de la nueva polarización se diseñó de manera acelerada: el flamante Presidente, presuntamente comprometido con el país como totalidad, el representante del “partido de la nación”, contra todos aquellos que lo habían dividido y destruido. Este fue el centro del mensaje, el de alguien que, además, no debía lealtad a nadie, ni siquiera a quienes le habían apoyado oportunistamente para ganar las elecciones en la segunda vuelta, ni tampoco a aquellos que transitoria e inicialmente habían participado en la conformación de su propia agrupación política.

Así, a un mes de asumida la Presidencia, Fujimori comienza a encontrar en la Izquierda Unida, el APRA y el SODE a sus más severos críticos, al calificar éstos el programa económico del nuevo gabinete del “hambreador” y de causar la recesión del aparato productivo. A contracorriente del discurso oficialista las fuerzas políticas mencionadas se esforzaron por poner en evidencia el crecimiento de la pobreza como producto de la política de shock. La directora de la institución humanitaria Caritas del Perú —a partir de esas semanas los programas de emergencia de ayuda a la

pobreza comenzaron a tener un especial protagonismo— informó que cerca de un millón doscientas mil personas de escasos recursos recibían ayuda alimentaria vía los comedores populares y clubes de madres.

La población no estaba engañada ante lo que estaba pasando, sabía bastante bien qué tipo de decisiones se estaban adoptando desde el Ejecutivo, pero lo nuevo, a diferencia de lo sucedido entre la primera y la segunda vuelta, era que la gran mayoría de la población aceptaba —con o sin resignación— la política económica que se ejecutaba. El programa de ajuste anunciado por el ministro de Economía, Hurtado Miller, era considerado como un *shock* por tres de cada diez personas. Según la misma encuesta —y a través de otros dos datos particularmente relevantes porque explicaban, en gran medida, la reacción concesiva de la población con Fujimori y crítica a las responsabilidades del aprismo— un 70% de peruanos consideraba al APRA y al expresidente García —y no a Fujimori— como los responsables de la dramática situación que vivían. Pero algo más importante: la práctica del autocontrol —y de alguna manera de la necesidad de orden— de la población frente a las nuevas y dramáticas medidas económicas y la consiguiente aceptación de la anulación de determinados derechos se expresaba en otro dato revelador: 65% de los encuestados estaban en contra de las huelgas.

El comentario de Barnechea, a propósito de una valoración de Tocqueville, indica que estos comportamientos de los pueblos no son nuevos y tienen una vieja tradición, en particular cuando las personas están agotadas de luchar: “En *El Antiguo Régimen y la Revolución*, tras recordar que César era ‘el jefe del partido democrático en una sociedad de esclavos’, Alexis de Tocqueville dice que ‘como el país estaba entonces fatigado, según suele ocurrir, consistió voluntariamente en que se le engañase con tal de hallar reposo’” (Barnechea 1995: 382.) De manera coincidente y refiriéndose a estos mismos hechos Carlos Iván Degregori afirmó: “Por último, nunca existió una oposición coherente a la política gubernamental. Nadie ofreció alternativas concretas. Por cierto ni la clase política, ni los sindicatos y organizaciones sociales, exhaustos por las crisis” (Degregori 2000: 29).

3.3. El proyecto del “partido del país” comienza a andar

De manera paralela a las primeras iniciativas adoptadas por el nuevo gobierno y a las reacciones de la población, se iniciaron las pesquisas en torno a la gestión del expresidente Alan García: el 29 de agosto, diarios de la capital publicaron declaraciones en las que manifestaba su disposición a concurrir al Congreso en caso de ser solicitada su presencia para responder a las acusaciones de corrupción y malos manejos que se podrían plantear en su contra.

La otra línea central de tensión de la política peruana seguía siendo la acción de la subversión armada, en particular la de Sendero Luminoso, que en esos mismos días hizo una demostración de fuerza en la capital de la república con la aparición de aproximadamente cien simpatizantes y militantes en la ciudad universitaria de San Marcos. Sin embargo, la espectacular fuga de los emerretistas de la prisión de Canto Grande, en las semanas finales del gobierno del APRA, seguía teniendo una gran secuela mediática y política. El principal jefe del MRTA, Víctor Polay Campos, transmitió un mensaje por televisión; y la policía respondió allanando a los pocos días la casa desde donde lo había grabado.

En septiembre, a solo dos meses de iniciada su gestión, se pudo apreciar a un gobierno con mayores bríos. Fujimori comenzaba a confirmar que tenía la capacidad de tomar iniciativas, en diferentes esferas políticas, sin grandes resistencias y que la población, después de largos meses de hiperinflación, había bajado la guardia y que no se defendía ante los embates de la nueva política económica. El primer día de ese mes Fujimori anunció que habría medidas económicas complementarias y nuevos ajustes. El APRA se quejó de que el nuevo presidente “no ha dado al pueblo una explicación de su cambio radical a tan pocos días de iniciar su gobierno. Por el contrario, los ataques a los partidos políticos, a los sindicatos, al Poder Judicial y sobre todo al Parlamento Nacional, solo contribuyen a obstaculizar cualquier acuerdo nacional y a desestabilizar el acuerdo democrático. La percepción del país frente a esta inexplicable conducta es que asistimos a un naciente autoritarismo” (Declaración política del XLV Plenario Nacional del APRA).

El parlamentario aprista Javier Valle Riestra percibió también la gran dimensión del cambio que estaba iniciándose; y, sobre todo, los extraordinarios cambios sociales, económicos y políticos que comenzaban a gestarse: “hay un proceso de militarización. Avizoro meses gravísimos para el Perú, porque el ejército de desocupados y famélicos va a ser el verdadero protagonista de este enfrentamiento entre él, la sociedad y el Estado”. Sin embargo, Valle Riestra se equivocó cuando insinuaba que los “famélicos” iban a oponerse al nuevo gobierno y desbordar los límites del juego político que éste implantaba.

La relación entre el gobierno y sus eventuales y pasajeros aliados de la segunda vuelta se deterioraba, para entonces, en todos los frentes, lo que obligó a que no solo los líderes del APRA marcaran diferencias. Alfonso Barrantes, principal dirigente de Acuerdo Socialista, deslindó con los dos ministros de su agrupación que se encontraban en el gabinete (Carlos Amat en Agricultura y Fernando Sánchez en Energía y Minas) y precisó que ambos desempeñaban sus cargos a título personal.

En la primera quincena de septiembre se dieron las señales iniciales del complicado juego de oposición y negociación que se establecería durante los siguientes meses entre el APRA y el nuevo oficialismo; sobre todo en relación con las acusaciones contra el expresidente García. Es así como el 12 de septiembre, la Cámara de Diputados rechazó, con el mayoritario apoyo oficialista, la acusación constitucional contra el ex mandatario por la presunta irregularidad en los contratos que suscribió el Estado con la Occidental Petróleo Company durante el gobierno aprista. Esta acusación era una de las siete que había formulado Izquierda Unida contra el expresidente.

3.4. La población bendice el *shock*: el primer gran éxito del movimiento por el nuevo orden

Analistas de diferentes tiendas políticas comenzaban a constatar el nuevo estado de ánimo de la población: “paradójicamente, los autores del *shock* no despertaron las iras de la población. Esta apreciación fue corroborada por los resultados de una encuesta de Apoyo, donde tanto el premier como el Presidente seguían gozando de un alto nivel de aceptación e inclusive consideraban que su programa económico tendría éxito (Manuel D’Ornellas, *Expreso*, 18.9.90).

El llamado fujishock recibió una condescendiente acogida de la población: “En agosto, a pocos días de haber asumido Fujimori el gobierno, fue aplicado un programa radical de ajuste económico sin la menor previsión de programas sociales de emergencia para los más pobres. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales fueron desplegadas para prevenir desmanes y saqueos, pero ello fue casi innecesario, pues la población asumió pacíficamente los hechos sin actos de desobediencia. Al día siguiente del fujishock, cuando el dinero ya no alcanzaba para adquirir ni la décima parte de los bienes del día anterior, una encuesta estimó que el 49% de la población estaba de acuerdo con las medidas económicas” (Reátegui 2009: 164).

Sin embargo, en la segunda quincena de septiembre el nuevo jefe de Estado comenzó a transmitir sus preocupaciones sobre la aplicación del programa de emergencia. Anunció la conducción personal de estos programas y promulgó, durante un recorrido por asentamientos humanos de Vitarte, dos decretos supremos: uno sobre la promoción del empleo temporal, para jóvenes de entre 16 y 21 años, y otro específicamente para universitarios.

El cambio de la orientación gubernamental había sido, pues, sumamente brusco. Fujimori no se tomó muchos días para inaugurar una política consistente en relación a algunos aspectos centrales: el cambio del manejo de la economía, la nueva relación del Estado con los pobres antiguos y nuevos, y la polarización con los partidos políticos y las instituciones del Estado. Una respuesta a estas iniciativas claramente confrontacionales se observó, el 23 de setiembre, en un comunicado oficial de la Corte Suprema que rechazaba el reiterado trato agravante que el presidente Fujimori venía dando a ese poder del Estado.

Como una muestra más del tira y afloja —pugna y negociación— entre el APRA y el oficialista Cambio 90, el 28 de septiembre, las respectivas bancadas dejaron sin quórum al Congreso, para impedir que se debatiera el segundo crédito suplementario. Esta conducta oficialista suscitó especulaciones sobre un presunto afán de encubrimiento de la bancada aprista (en especial la denuncia contra antiguos funcionarios del APRA) a cambio de los votos de ese partido para la ratificación de Jorge Chávez como presidente del Banco Central de Reserva.

No obstante, como una muestra más de las dudas que asaltaban a distintas agrupaciones políticas frente al manejo del gobierno, el MRTA, a través de Víctor Polay, su dirigente máximo, declaró a un medio local que “el MRTA ha decidido deponer las armas”. Sin embargo, solo escasos días después el mismo movimiento subversivo señaló que no podía haber diálogo con el gobierno porque sus principales representantes carecían de credibilidad. Sin embargo, el senador Enrique Bernalles (Acuerdo Socialista), preocupado por afirmar la posibilidad del diálogo (entre el gobierno y los grupos subversivos), consideró que si éste se lograba “se estarán dando las condiciones para empezar un Acuerdo Nacional de Paz”.

Era un clima político de gran desconcierto. Constatación del cambio de programa de Fujimori eran una política de shock que recibía el apoyo pasivo de la población y cierta expectativa de que se abrieran espacios de negociación con los grupos subversivos. Una muestra más del desconcierto que se vivía en la llamada clase política se expresó en las duras críticas contra el gobierno de Fujimori por el fundador del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, cuando denunció que el nuevo presidente quebró el ordenamiento constitucional con la promulgación de un controvertido decreto supremo a favor del indulto a procesados judiciales, en clara y evidente interferencia con el Poder Judicial. Simultáneamente, y como expresión del clima político prevaleciente, el sacerdote jesuita y ex rector de la PUCP, Felipe Mac Gregor, expresó su total disposición a integrar una comisión que tuviera como función la de ser interlocutor entre el gobierno y el MRTA, en el marco de un posible diálogo para pacificar el país. Y como una muestra más de esta situación indecisa y confusa el APRA, por tercera vez consecutiva en dos meses, se alió con Cambio 90 para dejar al Congreso sin quórum e impedir el debate del segundo crédito suplementario.

Se inicia la estrategia de la confrontación sin pausa: o el “marginal” en el que la mayoría de la población podía reconocerse

Fujimori percibía que su estrategia de confrontación le estaba dando réditos y que no tenía más que continuar desplegándola. El Poder Judicial era uno de sus blancos preferidos: el 9 de octubre, diferentes medios de Lima publicaron las duras críticas

del mandatario a la administración de justicia en el Perú; calificó a los jueces y fiscales de “canallas y chacales”.

Durante esos mismos días en el Senado se tomó una decisión que de alguna manera diseño y adelantó los limitados espacios protagónicos que tendría la oposición: la Cámara Alta dejó sin efecto el criticado decreto supremo de despenalización promulgado por el Poder Ejecutivo, al considerarlo —como ya habían adelantado Luis Bedoya Reyes y otros dirigentes políticos— inconstitucional e ilegal.

La relación entre el nuevo gobierno y sus aliados de la segunda vuelta se había enrarecido tan rápidamente que Javier Diez Canseco, senador de Izquierda Unida, denunció, a menos de tres meses de iniciarse el gobierno de Cambio 90, el propósito de Alberto Fujimori de cerrar el Parlamento para implantar un régimen cívico-militar (*La República*, 12.10.90).

Los pragmáticos acuerdos en el Parlamento entre el APRA (interesado por salvar al expresidente Alan García de una acusación constitucional por corrupción) y Cambio 90 (sin mayoría en las dos cámaras) continuaban simultáneamente, no se escondían: la moción de censura contra Víctor Paredes, presidente de la Cámara de Diputados, fue desechada por 72 votos del APRA, Cambio 90, Acuerdo Socialista y el Frenatraca. Las críticas contra estas ocasionales coaliciones parlamentarias se multiplicaron. Era claro que mientras el gobierno iba encontrando un norte claro, las diferentes tendencias dentro de la oposición jugaban su propio partido o no tenían una orientación táctica definida.

El 19 de octubre, el hasta entonces ministro de Agricultura, Carlos Amat y León, renunció de manera irrevocable a su cargo. Era la primera señal de una minicrisis en el gobierno, debido sobre todo a la creciente personalización de la gestión gubernamental y al indubitable perfil autoritario que asumía. La razón particular esgrimida por el exministro fue su discrepancia con el Presidente porque éste habría insistido en el nombramiento de personas de su confianza en puestos claves del Ministerio de Agricultura. Estaba claro: Fujimori intentaba, ya desde ese momento, organizar un poder propio, una red de funcionarios ministeriales que obedecieran a

su directa voluntad. Esta conducta se confirmó con el nombramiento del nuevo ministro, Enrique Ross Link, un ilustre desconocido en el ámbito político, lo que indicaba que el jefe de Estado quería ministros que no le hicieran sombra y que fueran obsecuentes, reivindicando, a su vez para sí, como exrector de la Universidad Agraria la conducción de la política agraria del país.

En su estrategia de abrirse diferentes campos de disputa con los más distintos sectores de la sociedad y el Estado, el presidente Fujimori anunció la iniciación de un amplio programa de planificación familiar en base al uso de métodos anticonceptivos. El blanco fue ahora la jerarquía de la Iglesia Católica. La estrategia de abrirse múltiples frentes de confrontación era aparentemente demasiado arriesgada y “poco política” porque ampliaba el campo de sus enemigos, pero partía, calculadamente o no, de la convicción de que el entorno institucional sufría de una aguda crisis de legitimidad. Conseguir su derrota, en el más breve plazo, era una condición indispensable para garantizar la estabilidad de su gobierno y construir un nuevo orden. El propósito de Fujimori, esta vez, como era evidente, tendría la oposición de la jerarquía de la Iglesia Católica. La ejecución de un agresivo programa de planificación familiar se convirtió en uno de los permanentes ámbitos de disputa entre el Poder Ejecutivo y la jerarquía católica, con el añadido que el gobierno supo maniobrar hábilmente en aras de conquistar la acogida de los sectores más pobres del país. Sin embargo, la respuesta eclesial, en ese primer embate, no se dejó esperar y el gobierno se vio obligado a anunciar que daría respuestas a los cuestionamientos formulados por la Iglesia Católica al programa de planificación familiar.

El movimiento feminista vio, en ese momento, con buenos ojos, la iniciativa gubernamental: “con respecto al debate abierto por el presidente de la república sobre la implementación de la ley de población afirmamos que: para que cada mujer pueda realizarse como persona debe estar en capacidad de controlar su propio cuerpo y sus posibilidades reproductivas” (Movimiento Feminista, 28.10.90).

El presidente Fujimori, después de recoger los mencionados cuestionamientos y también los respectivos apoyos, retomó su ofensiva y criticó abiertamente a un sector de la Iglesia Católica por oponerse a la aplicación de programas de planificación

familiar en el país y por favorecer, según su opinión, opciones medievales y recalcitrantes.

Los últimos días de octubre de 1990 abrieron un nuevo espacio para una relación de oposición-negociación entre el APRA y el gobierno, al haber encontrado la comisión especial que analizó el caso de la muerte de 248 reclusos en los penales de Lima y Callao, en junio de 1986, indicios para recomendar una acusación constitucional contra el expresidente Alan García.

Era claro, pues, que se estaba configurando un escenario, provocado conscientemente por el presidente de la república, en el que el jefe de Estado se enfrentaba, simultáneamente, a los jueces, los parlamentarios, los partidos políticos, los jefes de los partidos y la Iglesia Católica. El presidente Fujimori logró aparecer así, ante la mayoría de la opinión pública, como aquel que podía batallar contra cada una de las instituciones más deterioradas y desprestigiadas del país.

Alberto Fujimori comenzó a ser percibido no solo como el “marginal” de las elecciones, sino como el “marginal” en el gobierno: o sea, un gobernante que no obedecía ni representaba a las instituciones y sectores políticos y sociales que habían fracasado en el país. Esta astuta maniobra le permitió ubicarse como alguien que estaba dispuesto a aplicar un radical programa de ajuste económico, pero que no representaba lo antiguo, sino presuntamente lo nuevo: el cambio, la voluntad de modificar el statu quo, y la preocupación por la situación de los peruanos que habían sufrido la embestida de la crisis económica y de la acción subversiva-terrorista.

Fujimori se instaló así en un gran espacio político que estaba vacío de representación, apelando además a formas de contacto directo y casi cotidiano con la población. Más aún, la dureza del lenguaje utilizado y los calificativos extremos empleados contra los jueces expresaba el estado de ánimo, por ejemplo, de una mayoría de peruanos. Un ánimo de hartazgo y de sentimientos de que las cosas tenían que acabar y que no importaban los sacrificios, pero había que construir algo nuevo.

3.5. Confrontación hacia adentro, paz y sumisión hacia afuera

Contradictoriamente a su arremetida contra las distintas instituciones peruanas y sus representantes, durante noviembre de 1991 el nuevo presidente alentó y aceleró la presencia del Fondo Monetario Internacional, del BID y del Banco Mundial en el país. El Perú, a través de su gobierno, daba señales claras de que estaba dispuesto a subordinarse a las decisiones de estos organismos multilaterales. Durante ese mes el Fondo Monetario Internacional aceptó los planteamientos del gobierno de elevar a 12% del PBI la presión tributaria y “reactivar” los gastos de inversión para la reposición en equipos para el aparato productivo nacional.

El gobierno anunció también, durante la primera quincena de noviembre, que el Estado peruano reanudaría, a partir del 15 de noviembre, los pagos de sus obligaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La promesa de reiniciar el pago del servicio de los vencimientos futuros de la deuda externa fue efectuada, por el premier y ministro de Economía Hurtado Miller, en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y reafirmada por el propio Presidente de la República en diálogo sostenido en Palacio de Gobierno con el presidente del BID, Enrique Iglesias.

En esa misma perspectiva de afianzamiento de su relación con los organismos internacionales, el gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia Nacional para el Desarrollo, anunció que brindaría asistencia económica al Perú durante el año fiscal de 1991.

La pugna con la Iglesia Católica, a propósito de la propuesta sobre planificación familiar del gobierno, continuó. El arzobispo de Lima, monseñor Augusto Vargas Alzamora, anunció que no polemizaría con el gobierno, pero fue rotundo en afirmar que la Iglesia no aceptaría la propuesta formulada por el presidente: “No tenemos por qué polemizar con el gobierno sobre verdades universales”. Sin embargo, el Concilio Nacional Evangélico, principal organismo de coordinación de las iglesias evangélicas, se pronunció en sentido contrario a la Iglesia Católica, señalando que la Iglesia Evangélica no se oponía a la planificación familiar y a los métodos artificiales

que se utilicen dentro del matrimonio, debiéndose sí dejar en libertad a los esposos para tener el número de hijos que deseen y consideren.

En noviembre se hicieron en los medios de comunicación las primeras menciones a lo que sería posteriormente el núcleo del nuevo poder que se estaba constituyendo: los parlamentarios Ricardo Vega Llona (Movimiento Libertad) y Ricardo Letts (Izquierda Unida) coincidieron en señalar que en el ámbito castrense se estaba desarrollando una lucha por el poder, en la que intervenían inclusive ex uniformados, entre los que identificaron y destacaron al entonces jefe del servicio de inteligencia nacional y al excapitán Vladimiro Montesinos.

El malestar de los sindicatos se manifestaba diariamente, sobre todo como reacción al paquete económico, pero su aislamiento político y social era también creciente. El blanco del presidente Alberto Fujimori durante esos días fue la Central Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), en huelga durante esas semanas. El jefe de Estado los calificó de “ociosos” y adelantó que no recibirían pago alguno por los días de paralización. Pablo Checa, dirigente nacional de la CGTP, manifestó su preocupación por el aislamiento del movimiento sindical afirmando que “las huelgas jamás han sido programadas contra la población. Una huelga no debería afectar nuestros derechos. El presidente está tratando de contraponer un derecho contra otro derecho”.

El gobierno continuó su ofensiva, en la estrategia de abrir varios frentes de ataque, emitiendo contra el movimiento sindical el decreto supremo (070) que tenía por objeto limitar el ejercicio a la huelga en los servicios esenciales. La posición del gobierno se endurecía conforme pasaban los días de la huelga de la CITE, siendo así que al final de esta paralización, por orden directa del presidente Fujimori, no se entregaron los cheques de pago a la mayoría de trabajadores estatales. El mandatario pidió expresamente que se descontaran los días no laborados por los huelguistas.

Con un gobierno que daba claras muestras de autoritarismo y personalización del poder, en una evidente manifestación del grado de desconcierto y del comportamiento errático de la derecha tradicional peruana, la que había apoyado a Mario Vargas Llosa durante la campaña electoral, el Partido Popular Cristiano

(PPC), a través de un comunicado, le reclamó al Presidente de la República que asuma el liderazgo de la lucha antisubversiva y sobre todo manifestó su disposición de otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo con el propósito de que este dictase el marco legal que considerase adecuado.

3.6. El quiebre del primer bloque de alianzas pro Fujimori se profundiza

A inicios de diciembre renunció la ministra de Educación, Gloria Helfer (Izquierda Unida). Su renuncia significó la salida del segundo integrante de la izquierda del gabinete de Alberto Fujimori. Unas semanas antes lo había hecho Carlos Amat y León de Agricultura. Las razones que dio la renunciante fue que el gobierno se negó a reconocer el pago de dos bonificaciones a los docentes y trabajadores del sector educación.

El año 1991 se inició con la promulgación, por el presidente Alberto Fujimori, de la ley anual de presupuesto del sector público para ese año. El dato novedoso fue que el presidente observó 15 artículos de la ley de presupuesto aprobados por el Congreso, hecho que provocó la airada respuesta de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios e indujo a la inmediata convocatoria de una legislatura extraordinaria para tratar el referido tema. Incluso hubo parlamentarios, como Javier Alva Orlandini (Acción Popular), que consideró ilegal la promulgación de la ley general de presupuesto, porque el Poder Ejecutivo no tenía atribuciones para observar 15 artículos y luego promulgar la norma. En realidad, se trataba de una nueva escaramuza provocada por el Poder Ejecutivo contra el Parlamento. El presidente Fujimori se preocupaba porque el Parlamento apareciera como un bloque, más o menos cohesionado, para poderlo golpear políticamente en su conjunto. El debate sobre la constitucionalidad o no de la ley de presupuesto continuó durante varios días, ayudando a consolidar el protagonismo del jefe de Estado.

El 7 de enero se produjeron tres otros cambios en el gabinete ministerial, iniciándose así lo que sería un cambio definitivo de la estrategia “partido de toda la nación” que había intentado asumir el gobierno de Fujimori durante sus primeros meses de gestión. En su lugar se instaló, en todo su esplendor, una estrategia claramente de confrontación, de grupo cerrado, la que fue acompañada de sucesivos reajustes

ministeriales. Los cambios se produjeron en los ministerios de Pesquería, Transporte y Comunicaciones y Relaciones Exteriores. El ajuste ministerial permitió el ingreso de algunos militares en situación de retiro que tenían serios cuestionamientos por su controversial trayectoria. De la cartera de Relaciones Exteriores salió un prestigioso profesional de carrera como el embajador Luis Marchand, siendo sustituido por el vicealmirante en situación de retiro, Raúl Sánchez Sotomayor. Al Ministerio de Pesquería ingresó Félix Canal Torres de las filas del APRA, circunstancia que provocó la expulsión de su partido. El APRA tuvo que tomar una actitud semejante con el ingeniero Juan Coronado Balmaceda, ex titular de Agricultura del régimen aprista, por haber aceptado ser designado embajador del Perú en el Brasil.

Las críticas a los cambios ministeriales no se hicieron esperar. El diputado Pedro Cateriano (Movimiento Libertad) afirmó que: “Preocupa la presencia de tantos militares en el gobierno y al parecer el Presidente no entiende que rodearse de militares no da estabilidad y, por el contrario, es un signo de debilidad”. Por su parte, el parlamentario Aurelio Loret de Mola (SODE) manifestó una preocupación semejante al denunciar el comportamiento intolerante y autoritario del Presidente. En un sentido similar se manifestó el director del diario *Expreso*: “Cuál es la cantera a la que recurren el presidente y el premier para reclutar a sus ministros. Al parecer, las de la amistad personal, los estudios compartidos, las filas castrenses o la pertenencia a la comunidad étnica del propio jefe de Estado (*Expreso*, 8.1.91).

Estas eran nuevas y claras manifestaciones que el gobierno de Alberto Fujimori no era políticamente orgánico a la derecha: no había nacido entre sus filas, los había derrotado electoralmente, no tenía empatía con sus representantes, daba muestras de una audacia que ellos no habían manifestado y, para cerrar el círculo, les había birlado su programa económico.

De manera paralela el gobierno seguía su proceso inexorable de acercamiento a las fuerzas de defensa y de seguridad. El diario *La República* manifestaba su preocupación en una editorial, señalando que “promulgar un decreto supremo disponiendo que los policías y las Fuerzas Armadas acreditados en las zonas de emergencia permanezcan durante las 24 horas del día en comisión de servicio es

propiciar la impunidad más total. La situación se agrava cuando se establece que no se podrá revelar la identidad de oficiales, soldados y policías en las mencionadas zonas de emergencia, pues afecta su seguridad” (*La República*, 10.1.91).

Simultáneamente, a inicios de 1991, la crisis en el interior del movimiento oficialista Cambio 90 llegó a un extremo rocambolesco: el segundo vicepresidente del país, Carlos García y García, reveló que Cambio 90 había dejado de existir porque no tenía comité ejecutivo nacional y sus bases estaban confundidas. El segundo vicepresidente añadió que se sentía frustrado porque el gobierno no estaba aplicando el programa original con el que triunfó en las urnas. A fin de ese mismo mes, la crisis política que venía incubándose en Cambio 90 estalló públicamente al conocerse que la dirigencia nacional, bajo el influjo de Alberto Fujimori, había decidido separar del mismo al sector evangélico.

Se temió que con la autoconvocatoria del Congreso y la probable anulación de la promulgación parcial de la ley de presupuesto —debido a la observación por el presidente de 15 artículos— podría dar inicio a un todavía más precario equilibrio de poderes; o dicho de otra forma, a una disputa más aguda entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Sin embargo, la disputa entre ambos poderes en torno al presupuesto continuó durante varios días pero finalmente quedaron en suspenso solo dos artículos (de los 15 observados) del presupuesto general cuando fue promulgado por el Congreso. La razón aducida para persistir en esta observación era que ambos afectaban a la empresa PetroPerú y demás empresas estatales. El Presidente de la República se resistió, a su vez, a convocar a una segunda legislatura extraordinaria limitándose a observar los artículos 33 y 131 de la ley de presupuesto, ambos relacionados con el tema del canon y con el directorio de las empresas públicas. Esta minicrisis entre el Congreso y el Poder Ejecutivo —a pesar de la tibieza del Congreso para enfrentarse a las provocaciones del jefe de Estado, o quizá justamente por esa razón— presagiaría lo que posteriormente sería una de las justificaciones del Poder Ejecutivo para clausurar el Parlamento.

De manera simultánea, a estos forcejeos con los parlamentarios de oposición, que crecientemente Fujimori sabía administrar mejor, buscaba consolidar sus vínculos con el gobierno de los Estados Unidos, que dentro de su estrategia sí representaba un poder

que tenía que tomar en cuenta. Es así como en esos días se reunió con el embajador de los Estados Unidos para entregarle los planteamientos del acuerdo bilateral para una propuesta de lucha contra el narcotráfico, el rimbombante nombre “Doctrina Fujimori Contra el Narcotráfico”. El gobierno quería mostrarse como un sólido y fiel aliado de los Estados Unidos en esta lucha que para el gobierno norteamericano era su prioridad en la región. Dos días después, el 23 de enero el ministro Hurtado Millar, solicitó la colaboración de los Estados Unidos para la conformación de un grupo de apoyo financiero y ayuda para la deuda externa peruana. Los avances del gobierno en ese sentido eran muy claros: acercamiento al gobierno de los Estados Unidos y consolidación a costa de cualquier sacrificio, en particular el Fondo Monetario Internacional. La firma del convenio entre Perú y el FMI, en el marco del acuerdo de las llamadas reformas estructurales y del “retorno” a la comunidad financiera internacional, como el principal objetivo del gobierno de Fujimori.

Vale la pena, no obstante, señalar que durante esos meses, en particular entre diciembre de 1990 y enero de 1991 la popularidad presidencial había disminuido de manera brusca (de 61% al 43%). Algo semejante sucedió con el índice de aprobación del primer ministro, Juan Carlos Hurtado Miller, que, en el mismo lapso, según la empresa APOYO, había disminuido de 59 a 41% de aprobación a su gestión. Dicho de otra forma, la estrategia de Fujimori tenía también vaivenes y sobre todo grandes riesgos para conseguir su legitimidad. Era cierto que la mayoría de peruanos estaba cansada de la situación que vivía el país, pero su adhesión a una estrategia autoritaria como la que Fujimori comenzó a ejecutar de manera cada vez más explícita no necesariamente tenía el éxito asegurado.

El dato de descenso de la aprobación de la gestión presidencial fue significativo, porque dio la impresión de que una confrontación prolongada entre pares, o sea, entre el Ejecutivo y el Parlamento perjudicaba la figura presidencial. La dilatada “guerrilla” en las alturas del poder no gozaba de la simpatía popular, el Ejecutivo se comportaba como un poder más, no como el poder casi heroico que reclamaba la población en esos momentos de crisis. Más aún, la sombra de un Presidente surgido de la nada, de una figura desconocida surcaba por detrás de las agresiones verbales, contra políticos, partidos o poderes del Estado. La figura presidencial corría en el filo

de la navaja, tenía la posibilidad de entrar en crisis e incluso de colapsar en un mediano plazo. O apostaba, por el contrario, por un fortalecimiento propio y efectivo a costa de las otras instancias de poder del Estado.

Finalmente, el Congreso decidió hacer las paces con el Presidente de la República proponiendo coordinar el temario de una legislatura extraordinaria, que, según trascendió, Fujimori aceptaría convocar, con el propósito exclusivo de debatir la observación de los 15 artículos de la ley general de presupuesto. El primero de febrero el Poder Ejecutivo convocó finalmente a la referida legislatura. Sin embargo, febrero se convirtió en una etapa más de la disputa entre Fujimori y las distintas instancias de poder del Estado y también de la sociedad.

En Arequipa, el expresidente Fernando Belaúnde Terry calificó de dictador al presidente Alberto Fujimori, a raíz de sus constantes enfrentamientos con el Poder Judicial y el Congreso. El jefe de Estado decidió, a su vez, no promulgar el nuevo código penal reenviándolo a la comisión permanente del Congreso para su revisión. La Cámara de Diputados, como manifestación de esta guerrilla en las alturas, aprobó la derogatoria del decreto supremo que reglamentaba la ley de hábeas corpus y amparo, que, según algunos parlamentarios, violentaba derechos de los ciudadanos. Durante esos mismos días, Alberto Fujimori inició la pugna contra otro sector político: dirigió sus lanzas contra los alcaldes por haber recusado la legalización del comercio informal.

3.7. El fin del primer programa económico, el golpe de timón neoliberal y la “democracia participativa” como comparsa

Las acciones de Sendero Luminoso y del MRTA se desenvolvían paralelamente y crecían las voces desde diferentes sectores políticos —no solo del gobierno— de que los organismos internacionales deberían considerar a Sendero Luminoso y el MRTA como grupos que violaban sistemáticamente los derechos humanos. En los primeros días de febrero se confirmó que Abimael Guzmán, el jefe máximo de Sendero Luminoso, se encontraba vivo y en plena actividad. Se difundió en diferentes medios de comunicación un videocasete en el que se le podía ver bailando con varios miembros del Comité Central de su organización.

El movimiento sindical seguía dando desesperados manotazos en aras de defender sus ya precarias condiciones de trabajo, la negociación colectiva y en general la organización sindical. A fines de enero, las marchas conjuntas en Lima de los trabajadores de la CITE y el SUTEP se sucedían con continuidad. Pedro Huillca, secretario general de la CGTP, demandó al gobierno un diálogo democrático para tratar la demanda de los trabajadores, exigiendo que el presidente deponga su actitud autoritaria.

Durante esos mismos días y como parte de su estrategia de abrir varios frentes de confrontación de manera simultánea, el Poder Ejecutivo tomó nota de una acción legal que emprendieron los once presidentes de gobiernos regionales con el propósito de “obligarlo” a que los convoque a una reunión de trabajo en el plazo más inmediato. Una semana después a inicios de febrero, numerosos alcaldes buscaban formar un bloque contra el decreto supremo que pretendía otorgarle autonomía al comercio ambulatorio. La estrategia de Fujimori era clara, aparecer frente a la opinión pública enfrentándose a todas las instancias de poder o del Estado que estaban desprestigiadas como consecuencia de la crisis económica, la ineficacia política y la acción desgastante de Sendero Luminoso y de la lucha antiterrorista.

Sin embargo, durante esos mismos días se dieron señales de que el programa económico no estaba marchando como se preveía. Se estaba a punto de producir el primer gran cambio de gabinete y de esta forma poner fin a una etapa de confrontación que podría denominarse o caracterizarse como de partidos versus “gran partido nacional”.

El 3 de febrero el ministro de Economía y Premier, Hurtado Miller, admitió que el programa económico requería de reajustes pequeños y recurrentes en aras de alcanzar la reinserción en el sistema financiero internacional. Trascendió, que el 7 de febrero se habría analizado una propuesta económica alternativa, presentada por el entonces ministro de Industrias, Guido Pennano. El resultado de la controversia fue la renuncia del ministro Pennano, lo que representó claramente la derrota del sector que alentaba una propuesta menos recesiva y menos privatista de la economía. Parecía evidente que Fujimori había optado por sostener a Hurtado Miller. Sin embargo, el

14 de febrero, el día de la amistad, ante la sorpresa de muchos Hurtado Miller presentó su renuncia irrevocable ante la crisis ministerial desatada por el alejamiento Guido Pennano.

La salida de Hurtado Miller representó la instalación en la composición del gabinete de dos criterios fundamentales: la presencia creciente de ministros fieles al jefe de Estado y la inclusión, en el ámbito de la economía, de profesionales, como Carlos Boloña, que representaban una propuesta a favor de una clara y rotunda reforma neoliberal del Estado y de la economía nacional.

La juramentación del nuevo gabinete encabezado por Carlos Torres y Torres Lara, fue además la carta de presentación de una serie de figuras políticas sin ninguna trayectoria, pero que sí garantizaban, como se ha dicho, la máxima lealtad al jefe de Estado. Hubo voces —incluso proclives al gobierno— que insinuaron que el jefe de Estado habría utilizado a Hurtado Miller para ejecutar el tramo más duro de la política económica y no dejaban de manifestar sorpresa y cierta indignación con su cambio.

El protagonismo durante esos días del asesor presidencial Hernando de Soto fue muy potente y mediático. De Soto se encargó de anunciar proyectos de democratización del Estado y fungía también como de una especie de embajador especial con los Estados Unidos y la comunidad internacional en los asuntos vinculados al narcotráfico. La importancia de Hernando de Soto dentro del gobierno se manifestó en una entrevista que diera al diario *Expreso* y que fue titulada: “El premier informal”. La propuesta de Hernando de Soto sobre la democratización del Estado y de las decisiones del Ejecutivo, permitió que el primer mandatario asumiera, en esas circunstancias un discurso que parecía inclinado hacia la democracia directa y en contra de formas de “dominación burocrática, aristocrática o de aquello que puede llamarse partidocracia”.

El presidente Fujimori se dotaba así de un discurso que le permitiría enfrentar y criticar a la democracia representativa y, sobre todo, a las instancias de intermediación del poder político. En ese contexto, los partidos políticos se convirtieron en su blanco preferido. El gobierno, en esta nueva etapa, intentó aprovechar con el mayor empeño el discurso “democrático participativo” de

Hernando de Soto. Es así como De Soto abogó por que la democracia “vaya más allá” de las elecciones. La llamada democratización de las decisiones de gobierno, fue el acuerdo que se consignó entre el IDL de Hernando de Soto y la Presidencia de la República. A fines de febrero de 1991, y dentro de la misma orientación descrita se publicaron dos proyectos de decreto supremo con el fin de que la opinión pública opinara. Este ensayo de “democracia participativa” fue presentado como la puesta en marcha del acuerdo entre la Presidencia de la República y el IDL y la supuesta voluntad de democratizar las decisiones de gobierno.

El discurso que en esos días ensayaba Alberto Fujimori era el de una especie de “democracia de participación plena”, semejante se podría decir al del gobierno del general Velasco, pero con el ingrediente de aplicarse en un contexto precariamente democrático. El propio Presidente de la República se dio el tiempo para dar un breve mensaje a la nación, que rápidamente se debelaría como de fuente autoritaria, en el que se comprometía a democratizar el sistema de decisiones del gobierno a través de la participación directa de la población. De esa forma el discurso político del IDL le fue funcional al proyecto autoritario del presidente Fujimori, porque al mismo tiempo que daba una imagen de democratización, le permitía criticar a los partidos y plantear un sistema de relación directa entre el presidente-caudillo y la población, vínculo que supuestamente superaba los problemas de la intermediación partidaria. El jefe de Estado afirmó, en ese marco, que en el fondo, quienes se oponían a una democracia integral y avanzada eran partidarios de democracias formales, burocráticas y que constituían una partidocracia.

Esta propuesta levantó críticas como era esperable: el APRA, a través de su secretario general Luis Alva Castro, denunció que la propuesta del gobierno encerraba una peligrosa actitud de desprecio por el Congreso y una tentación totalitaria.

A inicios de marzo, de manera simultánea a la publicación por el gobierno del texto íntegro del decreto supremo sobre la democratización de las decisiones del Poder Ejecutivo; Hernando de Soto, presidente del IDL, anunció sorpresivamente la ruptura de sus relaciones con el Presidente y su decisión de no seguir asesorándolo debido a la sustitución de su proyecto de democratización por otro que habría sido impuesto

por el presidente del Consejo de Ministros. De esta manera se ponía en suspenso la luna de miel entre De Soto y Fujimori. El Presidente hizo gala, una vez más, de su extremado pragmatismo y de su capacidad de instrumentalizar a sus aliados. El poder personalista se instalaba con absoluta claridad al interior de su gabinete, de un gabinete crecientemente fiel y obsecuente a su persona. El gobierno y en particular el presidente daban pasos en dirección del orden vertical y personalista.

No obstante, este rompimiento en relación al asesoramiento más global al presidente Fujimori, Hernando de Soto se mantuvo cumpliendo el papel de estrecho colaborador en dos ámbitos políticos de particular relevancia: asesoramiento en materia de lucha antinarcóticos y en el proceso de reinserción del Perú al sistema financiero internacional.

De manera paralela, las tensiones del conflicto militar interno continuaban, en especial el debate sobre el papel de las rondas campesinas era intenso, porque crecientemente estas organizaciones comenzaron a formar parte central de la estrategia militar. Se daba paso a la constitución de una forma de alianza campesino-militar. Es así como en esos mismos días más de dos mil ronderos de diferentes comunidades campesinas de Ayacucho marcharon por la plaza de armas de Huamanga, demandando la libertad de su principal dirigente, Pompello Rivera, más conocido como el “Comandante Huayhuaco”.

Vale la pena reseñar que, según la encuestadora IMASEN, en el contexto previo al cambio de gabinete, más precisamente entre setiembre del 90 y febrero del 91, la popularidad presidencial había venido sufriendo un fuerte descenso cercano a los 21 puntos: el nivel de aprobación presidencial había descendido a 33.2% contra un 53.5% de desaprobación. La solidez y estabilidad del gobierno estaba puesta a prueba. El presidente decide, en estas circunstancias, dar un salto hacia adelante.

CAPÍTULO IV

EL NEOLIBERALISMO TOMA EL MANDO

4.1. Las primeras señales del neoliberalismo como política de Estado

El inaugural mensaje de Boloña y el consiguiente paquete de medidas representaron desde el punto de vista de las decisiones de política económica un decisivo y clave viraje con relación a la gestión de Juan Carlos Hurtado Miller. Con Carlos Boloña, en el Ministerio de Economía y Finanzas, se inició un proceso radical de reforma del Estado, en particular se consolidó la modificación sustantiva de la relación entre el Estado y el mercado. Esta modificación radical trajo la redefinición de dos aspectos centrales: la creciente reducción de la iniciativa estatal, el consiguiente mayor protagonismo de la iniciativa privada, y, simultáneamente, el debilitamiento de la protección de la estabilidad laboral y su abrupta desregulación.

A mediados de marzo se produjo este mensaje clave de Carlos Boloña en el que delineó su plan de trabajo y su propuesta de política-económica. El mensaje de Boloña se tuvo efectos prácticos inmediatamente, al día siguiente, con la publicación de las primeras catorce medidas, contenidas en otros tantos decretos supremos.

Las más importantes fueron las siguientes: 1, la reforma del comercio exterior; 2, la eliminación del monopolio estatal sobre los reaseguros y la libre contratación de seguros; 3, la modificación transitoria del régimen de prenda agrícola para facilitar el financiamiento de la banca privada; 4, la privatización de las empresas estatales; y 5, el inicio de la regulación de la estabilidad laboral y la precisión de las faltas causales de despidos. Días después el gobierno dictó la sexta reforma, que consistió en dar medidas de carácter fiscal para reducir el gasto público e incrementar el ingreso por concepto de recaudación.

Los primeros pasos de lo que años después algunos analistas de derecha llamarían “La revolución capitalista” (De Althaus 2007) tienen su punto de partida con la gestión de Carlos Boloña, entre febrero y marzo de 1991. Se había pasado, pues, a una nueva fase de la aplicación del llamado modelo neoliberal. Las decisiones adoptadas por la gestión de Hurtado Miller, aunque apuntaban en esa dirección fueron más de carácter macroeconómico, mientras que las de Boloña ingresaban directamente al corazón de la reforma neoliberal modificando el papel del Estado en la economía, otorgando un rol privilegiado al gran capital privado y flexibilizando de manera extrema el mercado de trabajo.

El paquete “reformador” de Boloña levantó un gran debate en especial entre los primeros y más directamente afectados, los sindicatos y los dirigentes sindicales. No obstante, el grueso de la opinión pública siguió manteniendo un comportamiento semejante al que tuvo al inicio del gobierno de Fujimori, y el presidente y su entonces ministro de Economía aplicaron medidas draconianas. Una encuesta de Apoyo Consultores constató, ocho días después de conocerse las nuevas medidas económicas, que el flamante ministro de Economía, Carlos Boloña, obtuvo un 64% de aprobación, frente a un escaso 15% de desaprobación. La impresión era, otra vez, que grandes sectores de la opinión pública abogaban y compartían la urgencia de decisiones extremas, de un cambio de “orden” en aras de salir definitivamente del marasmo político, económico y social en el que se seguía viviendo.

Se inició un largo proceso de confrontaciones entre el movimiento sindical y el gobierno, a pesar de que el ministro de Trabajo, Alfonso de los Heros, sostuvo que no había ningún ánimo de provocar un nuevo shock con las medidas adoptadas y de que tampoco se producirían despidos abusivos. La CGTP se vio incluso urgida de convocar a la Iglesia Católica para que respalde a los trabajadores organizados evitando los despidos masivos. No obstante a pesar de las protestas sindicales el nuevo ministro de Economía, Carlos Boloña, debió sentirse muy complacido cuando unos días después del anuncio de su paquete de medidas económicas y laborales obtuvo, como se ha mencionado, según APOYO, un 64% de aprobación a su gestión, frente a un escaso 15% de desaprobación. El 21 de marzo fue uno de los días de Mayor agitación laboral: en el centro de Lima coincidieron movilizaciones de la CITE, Fentup, Sutep y otros sindicatos y federaciones.

Las protestas de los sindicatos —que fueron múltiples— no hicieron sino aislar a este sector de la gran mayoría de la población de Lima y de provincias que aceptaron la tesis gubernamental de que el sector sindical no representaba sino a una extrema minoría de la población (hecho porcentual y cuantitativamente cierto, por lo demás). Esta constatación dio pie a que el gobierno y su ministro de Economía continuaran con la mayor celeridad la llamada reforma de la economía peruana.

Es así como durante los últimos días de marzo se aprobaron y publicaron otras medidas complementarias a las promulgadas: dos de ellas se dirigían a eliminar el monopolio de las empresas estatales sobre diversas actividades económicas, mientras que un tercer decreto eliminó el llamado mercado único de cambio de moneda extranjera. En esa misma dirección el Poder Ejecutivo publicó otros tres decretos supremos regulando la actividad de algunas empresas estatales en relación a su competencia con la actividad privada. El Decreto Supremo 064 fijó hasta en 90 días el plazo para que se acepte la renuncia presentada por los funcionarios, directivos y servidores públicos que decidieran acogerse a los incentivos excepcionales y extraordinarios que se habían acordado.

El gobierno se orientaba así de manera decidida en dirección de la llamada reforma neoliberal de la economía, reforma que de alguna manera no tenía resistencia firme en el ámbito social ni en el político. Más aun, en las circunstancias que se vivían las medidas de este tipo podían pasar a un segundo plano debido a la atracción y preocupación que provocaba el conflicto militar interno, las numerosas muertes y las violaciones a los derechos humanos, que los medios de comunicación cubrían ampliamente. Sin embargo, la reforma económica estaba definitivamente en marcha y se dirigía modificar las condiciones en las que se producía, se contrataba y comercializaba en el Perú.

Félix Reátegui resume los logros del gobierno con relación a la comunidad económica internacional durante ese período: “El año 1991 estuvo lleno de éxitos en lo que se refiere a obtención de ayuda no reembolsable y créditos de desarrollo. El Fondo Latinoamericano de Reserva había otorgado 403 millones de dólares para obras de desarrollo; el grupo de Río, 100 millones, y el Banco Interamericano de Desarrollo, 1.100 millones. El Perú tenía un acuerdo con el FMI sobre un Programa

de referencia para lograr su reinserción en el sistema financiero internacional. Además, Fujimori tenía por delante un amplio programa de privatizaciones. En este contexto se entiende que en septiembre, en plena incertidumbre sobre el apoyo norteamericano, Fujimori destinara una partida especial del tesoro público de 200 millones de dólares a la renovación de material militar y armamento” (Reátegui 2009: 170)

Paralelamente, a estas iniciativas de política económica, Alberto Fujimori cerró de manera definitiva, en esos días, un período de indecisiones sobre si se negociaba o no con el MRTA y en general con los grupos armados, cuando opinó que se oponía tajantemente a una negociación de paz con las guerrillas. No puede olvidarse tampoco que, durante esos mismos meses, el Perú vivió una feroz epidemia de cólera que, según todos los especialistas, era un reflejo de la profunda crisis económica y, consiguientemente, del deterioro extremo de la salubridad pública.

Durante los últimos días de marzo de 1991 el Perú vivió también una serie de manifestaciones de terrorismo de Estado y de acciones subversivas terroristas. El abogado y militante de derechos humanos Augusto Zúñiga recibió en su oficina —el local de la Comisión de Derechos de Humanos (Comisedh)— una carta-bomba que le cercenó un brazo. La acción contra Zúñiga tuvo todas las características y condicionantes para suponer que su procedencia era estatal, de unidades de inteligencia operativa, y su propósito era claro: amedrentar al movimiento de derechos humanos que valientemente denunciaba, en el Perú y en el extranjero, las violaciones al derecho a la vida.

La unidad de investigación de *La República* informó, por su parte, que Sendero Luminoso se preparaba para lanzar una segunda y penúltima etapa de su llamada guerra popular, instando a sus militantes a estar preparados ante la eventualidad de un “baño de sangre”. El comandante general del ejército, Pedro Valdivia, afirmó que el ejército “tiene la decisión de ganar esta guerra” y señaló que se iba a ejecutar una nueva estrategia antisubversiva en la que el poder militar se subordinaría, a nivel nacional y regional, a la autoridad civil. En suma, la ofensiva neoliberal en regla en la economía era acompañada de una cada vez más agresiva represión con los grupos

subversivos y contra todos aquellos que pretendieran desplegar una actividad política y periodística crítica.

4.2. Tres rasgos complementarios de la ofensiva neoliberal: la conducta dubitativa de la derecha política frente a Fujimori, el orden sobre todas las cosas y la búsqueda del apoyo campesino para luchar contra Sendero

A inicios de abril de 1991, la Secretaria Nacional de Política del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, reflejando las dudas y las oscilaciones de su partido frente al gobierno de Fujimori afirmó “Ni con el liberalismo a ultranza ni con el comunismo totalitario. Sostenemos que el modelo de crecimiento económico tiene que ser distinto, basado en un modelo pro exportador que tenga como pilares al sector agrario y las actividades extractivas” (varios diarios, 2.4.91). Como se puede apreciar la Secretaria de Política del PPC estaba de acuerdo con el carácter “pro exportador” y extractivo del modelo, pero mantenía distancia de un liberalismo “a ultranza” que no definía claramente en qué consistía. Se puede deducir que Lourdes Flores y su partido se distinguían de Fujimori sobre todo en relación con el manejo vertical y autoritario del poder del que hacía creciente gala el nuevo presidente, pero que apreciaban con simpatías su programa económico.

Confirmando este punto de vista, unos días después, el 13 de abril, en la inauguración de la III Convención Nacional Política del PPC, Luís Bedoya Reyes, jefe de ese partido, y con la presencia como invitado especial del mismísimo presidente Alberto Fujimori, ratificó una tesis semejante.

A inicios de abril se dispuso, además, la creación de la Comisión Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Cólera, epidemia que como una plaga más, había invadido el país, provocando un contagio masivo en la población, que, felizmente, fue adecuadamente respondida por algunas organizaciones estatales y sobre todo por la iniciativa de la sociedad civil. El brote del cólera se había iniciado a inicios de año, precisamente en enero, causando pánico en la población, sobre todo en los sectores más pobres debido a las precarias condiciones de salubridad en las que estaban obligados a vivir. Esta epidemia tuvo una connotación simbólica en un país que estaba agobiado por la crisis económica, la violencia militar interna y la

desmoralización. Sin embargo, su rápida extensión era una demostración real y no solo simbólica de que las resistencias sociales y las defensas sanitarias habían desaparecido o se habían reducido al mínimo.

De manera paralela, el gobierno continuaba con sus esfuerzos de conformar un grupo de apoyo que permitiera sumar una bolsa suficiente como para poder cancelar intereses de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional y al BID. En este grupo de apoyo, se sumaron además de Estados Unidos y Japón, México, España y Francia, siendo el logro de este esfuerzo una parte central del discurso que pronunció en Nagoya (Japón), el presidente Fujimori en la XXXII Asamblea del BID.

Durante esas semanas, hubo señales muy claras de que el gobierno quería consolidar su relación con diferentes sectores campesinos en aras de hacerle frente a Sendero Luminoso y tomar la iniciativa en las zonas rurales. Esta alianza era capital para el control territorial y el incremento de la presión contra las huestes de Guzmán. Fue, sin duda, un cambio estratégico en la conducción gubernamental de la guerra interna. A mediados de abril, el presidente Fujimori anunció la adquisición de armas que serían entregadas a las rondas campesinas. En Huancayo, las Fuerzas Armadas distribuyeron armas entre los ronderos del Valle del Mantaro. El 23 de abril se anunció que el ejército continuaría con la entrega de armas a las rondas campesinas de las comunidades del Valle del Mantaro y de determinadas zonas de Huancayo, Ucayali y Huamanga (varios diarios, 24.4.91).

Esta política tuvo expresiones prácticas en el mes siguiente cuando, a mediados de mayo, más de 200 ronderos armados realizaron operaciones de rastrillaje en el Valle del Río Apurímac, con el fin de brindar apoyo a las Fuerzas Armadas y capturar grupos subversivos.

En la última semana de abril el gobierno remitió al Senado un proyecto de ley demandando facultades extraordinarias para legislar en materia de pacificación, inversión, empleo y reforma del Estado. El 18 de mayo, y como muestra de la aquiescencia del Congreso, el diario oficial *El Peruano* publicó la ley que oficializaba la delegación de facultades en los temas antes señalados, incluyendo la promoción de la inversión privada.

No se trataba, pues, solamente de legislar en el ámbito de la lucha contra Sendero y el MRTA, sino también en relación con la llamada reforma del Estado y la “flexibilización” del mercado laboral. En esa misma semana el presidente de la república hizo dos anuncios: afirmó que no existía posibilidad alguna de aumento para los empleados estatales y proclamó la liquidación de la Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (Ecasa). De manera prácticamente simultánea se promulgó la nueva Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros que tenía como propósito abrir el sistema financiero para el ingreso masivo de capital privado nacional y sobre todo transnacional.

El mes siguiente se inició con dos hechos que podrían denominarse —en el lenguaje que posteriormente se instaló— como psicosociales, pero que en realidad expresaban una profunda crisis en el estado de ánimo de la población y que reflejaban una búsqueda desesperada por tener convicciones en medio de las grandes incertidumbres. El 3 de mayo el presidente Alberto Fujimori visitó una vivienda en el Callao en la que miles de fieles veneraban diariamente la imagen de la Virgen de Chapi, porque supuestamente se descubrió que los ojos de la virgen derramaban lágrimas. Ese mismo día, y como una segunda señal de la desesperanza, miles de enfermos realizaron una marcha hacia Palacio de Gobierno con el fin de pedirle al presidente de la república que permitiera que el curandero brasileño Joao Texeira permaneciera en el Perú, al margen de que no contara con la autorización de las autoridades peruanas.

En los primeros días de mayo, como una muestra más de la desesperada lucha de los sindicatos por defender sus condiciones laborales, ahora en mayor peligro por la clara hegemonía neoliberal, el Sutep volvió a iniciar una huelga general en demanda de mejores condiciones económicas y por un mayor presupuesto para el sector educación. Dos semanas después de iniciada la medida de lucha, la confrontación se incrementó al recibir el apoyo de 20 mil directores y subdirectores, además de 35 mil trabajadores administrativos. Como corolario político de esta acción de lucha el Secretario General del Sutep consideró “que el gobierno está marchando con rumbos de un gobierno cívico militar y está gobernando con una fuerza represiva que viola todos los derechos de los trabajadores”. Además, agregó que el presidente ya no

gobierna con su partido “sino con las Fuerzas Armadas”, que habían pasado a constituir el “partido de gobierno”.

El 9 de mayo, a menos de un año de su militante y lacrimógeno apoyo a Mario Vargas Llosa, los principales grupos empresariales a través del presidente de la Confiep, Jorge Camet, invocaron al Parlamento para que le otorgara al Poder Ejecutivo —es decir, a Fujimori— las facultades extraordinarias solicitadas. Los empresarios, como otros sectores de la población, dieron muestras de un pragmatismo radical y de una absoluta falta de lealtad política con el que había sido su candidato presidencial y con la promesa de hacer en democracia una especie de revolución capitalista.

Finalmente, después de una serie de informes parciales y de reuniones bilaterales, el gobierno anunció a mediados de mayo la firma del Convenio Antidrogas con Estados Unidos. Esta decisión provocó reacciones contradictorias en el Parlamento, en especial críticas por presentar hechos consumados, pero el gobierno mantuvo al respecto una posición intransigente, dando muestras de que, a diferencia del gobierno de Alan García y de la opinión de los sectores de izquierda, sus aliados de la segunda vuelta electoral, tenía claramente definida su alianza con el gobierno de los Estados Unidos. Esta decisión representaba un giro sustantivo y definitivo del eje de la política peruana, si se toma en cuenta las preferencias y las alianzas internacionales tejidas desde el gobierno del general Juan Velasco.

Como parte del esfuerzo por anular o reducir drásticamente los espacios de actuación (y de captación de adeptos) del PC-Sendero Luminoso y de organizaciones de izquierda, el gobierno continuó y aceleró la ofensiva contra las universidades públicas durante los últimos días de mayo: un batallón del ejército ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La ciudad universitaria fue tomada por los soldados. Paralelamente estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) rechazaron acciones del MRTA, a las que calificaron de provocadoras por pretender sembrar el caos en el interior del claustro universitario. Las pugnas políticas y sociales se agudizaban en los diferentes ámbitos de la vida del país y, sin duda, las universidades, sobre todo públicas, eran un espacio privilegiado de este

combate. No puede soslayarse la importancia iniciática que tuvo para Sendero Luminoso su trabajo universitario, tanto en Lima como fuera de la capital.

En los primeros días de junio el presidente Fujimori lanzó implícitamente un balance de su casi primer año de gestión cuando declaró a la agencia de noticias Reuter que su elección había sembrado la simiente de una gran corriente de renovación del político tradicional en América Latina. No le faltaba razón, hay que reconocerlo, si se toman en cuenta las experiencias que posteriormente, aunque con un signo político muy disímil, surgieron en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Fujimori agregó que el mayor logro del drástico programa de austeridad de su gobierno había sido la conquista de la estabilidad económica en un país sacudido por la hiperinflación y la recesión. Era claro, pues, que el presidente Fujimori ponía énfasis en los éxitos que vinculados al orden y a la lucha contra el caos había comenzado a conquistar su gestión gubernamental durante los primeros once meses de gobierno. Fujimori fue muy consciente de que la búsqueda del orden era un poderoso canal de comunicación y de empatía entre grandes sectores de la población y su gestión presidencial. Las otras fuerzas políticas reformistas (o, si se quiere, revolucionarias, en el caso de algunos sectores de izquierda), sobre todo del APRA y la izquierda, no fueron conscientes de este vigoroso deseo ciudadano.

Fujimori consigue consolidar su posición de cara al Congreso cuando obtuvo de este el visto bueno para legislar en asuntos centrales vinculados a la economía, el empleo y la guerra: “El abuso de poder se hizo evidente tanto en la forma en que los decretos leyes fueron emitidos como en su contenido. El 17 de junio de 1991, el Congreso concedió a Fujimori un plazo de 150 días para legislar en tres ámbitos de política: la promoción de la inversión, el fomento del empleo y las estrategias de pacificación” (Burt 2009: 277)⁴⁶.

⁴⁶ Como dice la misma autora el corolario de esta concesión del Congreso se expresará meses más tarde “Justo cuando estaba por expirar el período que concedía a Fujimori la facultad legislativa, el Ejecutivo presentó una avalancha de 126 decretos leyes con una amplia gama de consecuencias por un lado, una rápida liberalización de la economía y, por el otro, control total de las Fuerzas Armadas sobre la política de contrainsurgencia. Las nuevas leyes, por ejemplo, daban a los militares control sobre todos los aspectos de la administración pública en las zonas de emergencia, lo que les confería autoridad plena sobre un tercio del territorio nacional y la mitad de la población. Ello eliminaba el control del

El último día de junio, el Movimiento Libertad, dirigido por Mario Vargas Llosa, se expresó a través de Miguel Vega Alvear en el diario *Última Hora*: “[...] este es un gobierno intervencionista que mantiene el mismo Estado que el gobierno anterior”. Es claro que la dirección nacional del Movimiento Libertad no comprendió la dimensión del proyecto en marcha, tanto por su sostenibilidad en el tiempo, como por el viraje político y económico que representaba.

La opinión de Vega Alvear expresaba un punto de vista muy similar al que tenía el Partido Popular Cristiano. Era coincidente y representativa, en ambos movimientos, la actitud dubitativa que, en ese momento, frente al gobierno de Fujimori tenía la derecha peruana: al mismo tiempo que quería una aceleración del proceso de privatizaciones y una clara supremacía del mercado, se preocupaba por el incremento de las manifestaciones de autoritarismo del gobierno. Sin embargo, desde esos meses comenzó a haber una clara diferencia entre la derecha política y la derecha económica. O mejor dicho entre un sector de la derecha política y el empresariado: los primeros querían mantener el régimen político representativo y las prerrogativas propias del equilibrio de poderes, mientras que la derecha económica apostaba decididamente por una economía mercantil bajo una conducción autoritaria.

En julio, a escasos días de cumplirse el primer año de gobierno, la policía realizó un gran operativo en la capital, provocando un efecto psicológico y político poderoso en la población: arrestó alrededor de 4 mil personas, la mayoría eran delincuentes, prostitutas, homosexuales y algunos sospechosos de terrorismo. El gobierno buscaba en especial y por sobre todo un efecto político: la imagen de un gobierno que quería poner orden a cualquier precio. De manera simultánea, aunque opacado por el golpe mediático de la iniciativa gubernamental descrita, el informe anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que en Huancayo, en los últimos 16 meses, habían muerto dos mil personas como producto de la violencia política interna.

Congreso sobre asuntos y actividades militares, a la vez que reducía drásticamente los derechos civiles y políticos en zonas de emergencia (Burt 2009: 277).

En esos mismos días, solo semanas antes del 28 de julio de 1991, el gobierno aceleró el proceso de privatización de algunas empresas estatales declarando a través de tres decretos supremos a Enapu, Enatru y Aeroperú en situación de emergencia. Se autorizaba a los respectivos directorios a adoptar las medidas adecuadas para lograr la reestructuración operativa, económica y financiera de las empresas.

La empresa encuestadora Datum, calentando el ambiente previo a las fiestas patrias, publicó una encuesta informando que el 70% de los encuestados apoyaba las acciones desarrolladas por el régimen de Fujimori durante los primeros once meses de su gestión.

La ofensiva del gobierno contra las universidades públicas continuó: en la segunda semana de julio cinco otras universidades fueron tomadas por las Fuerzas Armadas en el marco de un programa llamado de acción cívica en apoyo a las universidades: la Universidad Nacional del Centro del Perú (Huancayo), San Luis Gonzaga de Ica, Faustino Sánchez Carrión de Huacho, la Técnica del Callao y la Universidad Nacional del Altiplano.

El 17 de julio, a escasos días del discurso presidencial, un amplio abanico de fuerzas políticas y sociales, suscribieron un Acuerdo Político Nacional, con el fin de diseñar una estrategia contrasubversiva democrática e integral. Fue significativo que firmaran el documento fuerzas políticas sumamente disímiles como el APRA, la Izquierda, el PPC y el Movimiento Libertad. Este comunicado conjunto expresaba la creciente preocupación porque la estrategia antsubversiva en curso, impulsada desde el gobierno, podía comprometer y afectar directamente las condiciones de vida política democrática del país.

De manera paralela, de alguna manera respondiendo al reclamo de las fuerzas políticas opositoras, el gobierno oficializó, unos días después, mediante decreto supremo el reconocimiento de los dirigentes cocaleros de Ayacucho y del Alto Huallaga como interlocutores válidos ante el programa de sustitución de cultivos.

4.3. El primer aniversario, saldo positivo y siempre a la ofensiva política: la “liberalización” a fondo de la economía y la continuación de la guerra interna

El balance del primer año de gobierno favoreció al régimen de Fujimori porque incluso voceros de fuerzas políticas moderadamente opositoras reconocieron sus logros. Es así como el senador Sandro Mariátegui (Acción Popular) reconoció “se han producido avances en la lucha contra la inflación, se ha incrementado las reservas internacionales y se está manejando la política económica con austeridad y disciplina, hecho que debe merecer el reconocimiento de todos” (*La República*, 27.7.91).

El diario *Expreso*, claramente ya instalado a favor del gobierno constataba a su manera la modificación sustancial que se estaba produciendo, en plazos sumamente breves, en la relación entre el ciudadano y el Estado (y viceversa) y la importancia de ese cambio: “no es exageración decir que al término del primer año del gobierno de Alberto Fujimori, el Perú es otro país. Quizá no tanto en las apariencias, sino [...] un cambio más profundo aún: la sociedad ha tomado conciencia de que el Estado no es un barril sin fondo, sino que debe ser financiado por ella [...] será el fin del Estado paternalista y populista” (*Expreso*, 28.7.91).

Era evidente que un sector de la derecha política y sin duda la derecha económica encontraba que el país había cambiado sustantivamente, que se respiraban nuevos aires y, como bien apuntaba el diario *Expreso*, el sentido común de la población había comenzado a variar con relación al vínculo que debía existir entre el Estado y el mercado, entre el Estado y los derechos universales que deben garantizar —al menos formalmente— una vida digna a todos los peruanos.

El mensaje presidencial de Fiestas Patrias de 1991 fue sumamente largo y Fujimori ratificó la orientación general del programa económico que había ejecutado durante su primer año de gobierno, sobre todo a partir del ingreso al gabinete, en febrero pasado, de Carlos Boloña, en el ministerio de Economía y Finanzas. Fujimori dio, en concordancia con el énfasis antes señalado, mucha importancia a las reformas estructurales y a la reinserción del Perú en la llamada comunidad financiera internacional.

En agosto de 1991, a días de haberse cumplido el primer año de su gobierno y del *shock* que estremeció a la sociedad peruana, dos eran los grandes temas que se habían convertido en los ordenadores de la actividad política y de la voluntad del gobierno de mantener la iniciativa política en sus manos: 1) la liberalización agresiva de la economía y el consiguiente cambio sustancial del papel del Estado; y 2) el incremento del conflicto militar interno y la aplicación de la nueva estrategia contrasubversiva: asesinatos selectivos, incremento del trabajo de inteligencia y alianza, en particular del ejército, con los campesinos de las comunidades serranas y de la ceja de selva involucradas en el conflicto.

Estas dos líneas de acción centrales del gobierno deben tomarse en cuenta por su importancia: presión política, por la violación a los derechos humanos, de los parlamentarios demócratas norteamericanos contra Fujimori; y la defensa del APRA de las acusaciones de corrupción contra el partido y, en particular, contra Alan García.

Consecuente con sus líneas de acción, el gobierno de Fujimori, con Carlos Boloña a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas, emprendió una nueva gran ofensiva por establecer y estabilizar el nuevo modelo económico: acelerando las condiciones para la privatización de las empresas del estado, adquiriendo compromisos con la comunidad internacional para el pago de la deuda externa y transformando radicalmente las relaciones entre el capital y el trabajo, mediante la reforma sustantiva del régimen laboral, hecho que se expresó paradigmáticamente en la anulación de la llamada estabilidad laboral. Simultáneamente, y como segundo factor central de la coyuntura, la guerra interna dio un giro más decidido hacia la alianza con sectores de la población, sobre todo rurales, que eran clave por su control y conocimiento del territorio y el acopio y manejo de información privilegiada. Es así como el gobierno avanzaba en dos frentes: el plan económico en marcha daba algunos de sus primeros frutos con la reducción —es cierto que aún sumamente lenta— de la inflación; y los militares en alianza con Fujimori conseguían sus primeros éxitos políticos en el conflicto militar, cuando crecientemente aislaban a Sendero, mediante la creación de comités de autodefensa campesinos, en amplios sectores del escenario rural.

Es en este contexto que el editorial de *El Diario*, vocero oficioso de Sendero Luminoso, aseguraba que la guerra sucia no existía; que había una guerra justa, que dirigía el PCP-SL, y una injusta, que dirigía la “reacción”: “La reacción (incluido el MRTA) que levanta la bandera de los derechos humanos para oponerlos a los derechos del pueblo a rebelarse... Los Derechos Humanos se basan en una concepción burguesa del mundo” (*La República*, 5.8.91).

La opción de Sendero era clara: no quería o temía que sectores cercanos a su propuesta pudieran entrar en duda o vacilar como producto de la campaña en pro de los derechos humanos que realizaban diferentes sectores de la sociedad. Sendero Luminoso, de manera mucho más clara que el propio gobierno justificaba el desarrollo de la violencia y en particular el de un tipo de violencia política que no tomaba en cuenta ni tenía por qué tomar los derechos de las personas. La campaña pro derechos humanos era particularmente peligrosa y sensible para Sendero, porque podía debilitar la calidad y la consistencia ideológica de sus fuerzas y sobre todo la convicción que tenían que tener sus militantes para ejecutar acciones extremas, incluso contra sectores provenientes del pueblo o incluso del MRTA.

Sendero Luminoso manifestó de esta manera su interés por que la polarización política se extremara y no se redujera. El cálculo implícito era que solo una creciente polarización, sin treguas, lo beneficiaría.

Sin embargo, como expresión de sus crecientes dificultades en la Sierra Central y Sur, y en el Alto Huallaga, y en general en los departamentos de Huánuco y San Martín, Sendero Luminoso promovía crecientemente su presencia en la capital: un espacio de confrontación muy activo fue el asentamiento humano Raucana. Es así como el 8 de agosto de 1991 los pobladores de Raucana bloquearon 4 kilómetros de la carretera central en protesta por un fallo judicial que les ordenaba desalojar los terrenos que ocupaban (varios diarios, 9.8.91).

4.4. Correlaciones nacionales de proyección internacional

Como expresión de la pugna del gobierno con el Partido Demócrata de Estados Unidos, 37 parlamentarios del Congreso de ese país urgieron, a través de una carta, al

Presidente Fujimori a frenar la violación de los Derechos Humanos. A diferencia de Sendero Luminoso, el Gobierno de Fujimori era urgido a mantenerse dentro de determinados límites en la ejecución de la lucha militar. El gobierno estaba obligado, como lo estuvieron los gobiernos precariamente democráticos anteriores, durante la década de 1980, a desarrollar al respecto un doble discurso: la formalidad de la defensa de los Derechos Humanos y la violación sistemática de estos, por lo menos en amplios territorios del país, como lo comprobó posteriormente el informe de la CVR.

En esos mismos días, el Presidente Fujimori se vio obligado a desvirtuar informaciones periodísticas que informaron sobre el envío al país de los llamados “Boinas Verdes” norteamericanos. El gobierno rechazó de paso la existencia de cualquier tipo de asesoría militar extranjera en el Perú. El Canciller Carlos Torres y Torres Lara urgido por la presión de los congresistas norteamericanos rechazó una carta difundida en Washington sobre la situación de los derechos humanos en el Perú y afirmó que se basaba en información inexacta. Más aun, sostuvo que los congresistas no habían tomado en cuenta que durante el primer año del Gobierno de Fujimori, el número de desapariciones forzadas de personas disminuyó en 50% con relación a años anteriores.

El 14 de agosto el diario *Expreso* hacía eco de este malestar gubernamental contra las iniciativas de los congresistas demócratas al señalar que “merced a la protesta del Senador de Estados Unidos Edward Kennedy, la ayuda económica y militar que este país le había destinado al Perú ha sido suspendida. “El argumento ha sido que no puede dar dinero a un gobierno que viola los derechos humanos en las zonas afectadas por el narcotráfico [...] El Perú debe argumentar que debe reconocerse que la violación persistente de los Derechos Humanos es más el resultado de una descomposición económica e institucional, que de una política deliberada [...]”.

Con una respuesta a las acusaciones de los congresistas del partido demócrata, el Presidente Fujimori, con la autorización del Congreso, viajó a los Estados Unidos para realizar una visita oficial de trabajo, atendiendo a una invitación del Presidente estadounidense, George Bush. La administración del Presidente Bush defendió al gobierno del Presidente Fujimori en el tema de los Derechos Humanos, y demandó, en

contra de la opinión de los senadores demócratas y algunos republicanos, que el Congreso norteamericano continuase la ayuda económica y militar al Perú para impedir que regiones decisivas, como el Alto Huallaga, se conviertan en zonas bajo control de Sendero Luminoso y el narcotráfico⁴⁷. El viaje a los Estados Unidos terminó siendo un logro político para el Presidente Fujimori y una consolidación de sus relaciones con la administración republicana. El Presidente Fujimori se dio el lujo de exponer durante su visita, como informó el diario *El Comercio* una nueva política de Derechos Humanos: “Fujimori en jornada de trabajo con congresistas norteamericanos, fundamentará reformas legales e institucionales” (*El Comercio* 16.9.1991).

La reacción favorable a Fujimori del Congreso norteamericano fue inmediata. Varias comisiones aprobaron una ayuda de 94 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. El Presidente Bush insistió en que el Congreso de su país debía revocar la suspensión de la ayuda que el Ejecutivo había aprobado para la lucha antinarcóticos en el Perú. La mayoría de los diarios de Lima hicieron un balance positivo del viaje del ministro de Economía Carlos Boloña y del presidente Fujimori a los Estados Unidos. La excepción fue el diario *La República*. El éxito del viaje del presidente Fujimori a los Estados Unidos fue coronado por el importante diario *New York Times*, que abogó explícitamente por la ayuda al Perú en la lucha contra el narcotráfico: El Presidente Alberto Fujimori, dijo el prestigioso diario norteamericano, se merecía un “voto de confianza”.

El fortalecimiento que tuvo el gobierno de sus vínculos internacionales con los Estados Unidos y con la banca multilateral tuvo otra manifestación muy importante cuando el BID otorgó al Perú un crédito de más 453 millones de dólares, en un acto que fue calificado por Enrique Iglesias, presidente del BID, como “Día de celebración por la

⁴⁷ “El gobierno del Perú firmó con los Estados Unidos en el mismo mes de mayo un convenio antidroga. El borrador de este convenio había sido revisado a la luz de los resultados de la Conferencia Internacional “Narcotráfico, a un año de Cartagena” que tuvo lugar en abril. De todos modos, la firma del convenio se realizó sin consulta al Congreso peruano, por lo cual el Congreso interpeló al primer ministro Carlos Torres y Torres Lara, quien tuvo que contestar las 92 preguntas del pliego interpelatorio. Sobre la base del convenio, el Departamento de Estado proveería 34.9 millones de dólares en el año fiscal 1991 y una cantidad igual o mayor en 1992” (Reátegui 2009: 167).

reincorporación del Perú al mundo Financiero Internacional”. Setiembre terminó siendo un gran éxito para las relaciones del presidente Fujimori con el gobierno norteamericano, la gran prensa y la importantísima banca multilateral.

Se había diseñado, pues, una original correlación de fuerzas que tenía expresión interna y externa, tanto en el campo del oficialismo como de la oposición. En ese momento, en agosto de 1991, el gobierno de Fujimori que contaba con un importante apoyo popular y una cerrada defensa de los poderes fácticos, sobre todo empresariales y financieros, gozaba también del apoyo de las multilaterales y del gobierno republicano del presidente George Bush. El ámbito opositor, en el frente interno se batía sobre todo dentro del estrecho margen que le propinaba el Parlamento, era una oposición dividida y sin rumbo claro, porque la mayoría coincidía con la nueva política económica, aunque tenía algunos matices en el manejo de la política antsubversiva. No hay que olvidarse que tanto el APRA, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano habían gobernado en la década de 1980 y habían desplegado, también ellos, una política contrasubversiva de excepción, instaurando grandes zonas bajo control de los comando político militares y la violación a los derechos humanos había tenido un cariz semejante al que tenía con el gobierno de Fujimori.

4.5. El impacto del fujimorismo divide a los partidos políticos

El XVII Congreso extraordinario del PAP empezó el 24 de agosto en medio de gritos y enfrentamientos verbales entre sus partidarios. La militancia está enfurecida contra el Senador José Barba, al que calificaba de traidor, por haber manifestado su apoyo a la acusación contra sus correligionarios en el Congreso. El Congreso del APRA expulsó en medio de grandes protestas al senador José Barba Caballero. Esta disputa menor dentro del APRA era una clara señal que dentro de esa agrupación la ofensiva política de Fujimori estaba también teniendo algunos éxitos y que un sector, aunque minoritario, se sentía inclinado a “coquetear” con el gobierno y a no cerrar filas en la defensa de los dirigentes de su partido.

En esos mismos días también se realizó el Congreso del Movimiento Libertad, de Mario Vargas Llosa. El Congreso estuvo plagado de críticas cruzadas entre sus

adherentes y los medios de comunicación de la época constataron que era creciente la amenaza de división en el movimiento fundado por Mario Vargas Llosa. La influencia del fujimorismo se dejaba sentir también en esta agrupación.

Como producto de su segundo congreso, el movimiento Libertad quedó convertido en un partido político que mantuvo la misma denominación y que acordó seguir defendiendo las tesis del liberalismo. El presidente Fujimori aprovechó la presencia de Mario Vargas Llosa en Lima y las declaraciones críticas que este había efectuado ante los medios de comunicación, para revivir su antigua rivalidad con el afamado escritor: “quienes viven de Francia o Inglaterra no tienen autoridad para criticar las acciones del gobierno, porque solo los que viven con el pueblo comprender su realidad palpable”. Fujimori dijo esto el 2 de septiembre, cuando se dirigía a una multitud formada por delegaciones populares y estudiantiles, y por integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales que se congregaron en la plaza Francisco Bolognesi de Bagua. A Fujimori, este tipo de conflicto le convenía; las declaraciones de Mario Vargas Llosa las usó rápidamente a su favor. Más aún, fortaleció la imagen de su compromiso con el pueblo, lejos de la actitud “facilista” de sus adversarios.

La confusión y la falta de objetivos de la oposición se hacía cada vez más clara: el principal partido del país, el APRA, vivía momentos de tensión interna; el movimiento bandera de la derecha liberal había perdido empuje e iniciativa, su principal dirigente —Mario Vargas Llosa— no vivía regularmente en el Perú, y el riesgo de mimetizarse con las fuerzas de la derecha clásica —llámense PPC o Acción Popular— y del propio fujimorismo era creciente. El Movimiento Libertad había perdido la identidad conquistada durante la campaña electoral de 1990: ser un movimiento radical y coherentemente liberal de derecha.

Al final del segundo congreso de su movimiento, Mario Vargas Llosa se esforzó por diferenciarse del gobierno y negó que el programa económico que este aplicaba se asemejara a su propuesta liberal. El escritor, al mismo tiempo, criticó al gobierno de Fujimori por desatender el programa social y por carecer de una política contra el terrorismo. El esfuerzo por diferenciarse de la política económica del gobierno era difícilmente aceptable, porque se parecía demasiado a la de su movimiento; la crítica a la falta de un programa social sí cabía; pero la alusión a la lucha contra el

terrorismo expresaba una evaluación profundamente errónea y fuera de la realidad: el gobierno sí estaba empleando una política sistemática contra Sendero Luminoso, al margen de la discrepancia o no con los métodos que utilizaba.

Dos días antes de las declaraciones de Mario Vargas Llosa contra el gobierno, en el contexto del segundo congreso de Libertad, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor José Dammert, criticó la política antisubversiva al afirmar que el gobierno no parecía tener voluntad para la paz. Una señal, para el monseñor Dammert, fue que “25 comunidades campesinas, de la provincia de Satipo, recibieron 300 escopetas para las rondas campesinas [...] Esta es la cuarta entrega que realiza el comando político militar del Frente Mantaro a las rondas campesina de la zona, de las cuales suman casi 1,500 escopetas en los últimos cuatro meses y medio” (*El Comercio*, 29 de agosto de 1991).

4.6. Luchas sindicales y la disputa por el control de las organizaciones populares

A fines de setiembre, más precisamente el 23 de ese mes, exhaustos, después de 104 días de huelga, 260 mil maestros volvieron a las aulas escolares. La suerte del movimiento sindical estaba ya echada. Estos eran solamente los últimos estertores de una larga lucha iniciada en la segunda mitad de la década de 1970, que durante la década del 80 tuvo momentos muy agudos inmediatamente después del inicio de la hiperinflación, pero que ya se encontraba sin fuerzas en el segundo semestre de 1991, después de haber combatido tantos años sin logros concretos y menos aún sin la posibilidad de impedir la aplicación del nuevo modelo económico.

En el escenario estricto de la guerra, de manera simultánea a las muestras de desesperación de Sendero Luminoso por consolidar su control sobre sectores populares, sobre todo en Lima, hecho que tuvo una nueva manifestación con el asesinato de Juana López, Presidenta del Comité de Electrificación del Asentamiento Humano Juan Pablo Segundo y coordinadora del Programa de Vaso de Leche, y de los sacerdotes extranjeros que realizaban trabajos en zonas populares.

El presidente Fujimori, por su parte, viajó a Satipo para entregar 200 nuevos fusiles y escopetas a los ronderos campesinos de esa región de la selva central del país. Era evidente que el gobierno estaba abiertamente enfrascado en una política de alianza con el campesinado, mediante la creación de la autodefensa de las comunidades y la entrega de armamento. El gobierno había descubierto un filón social y político sumamente poderoso que le reducía sustantivamente el margen de maniobra política, y sobre todo militar, a Sendero Luminoso, al neutralizarle y recortarle su base poblacional, y cortar drásticamente su libertad de movimiento en el ámbito rural.

El 12 de ese mismo mes una movilización de las mujeres del cono sur liderada por María Elena Moyano tuvo como principal bandera el rechazo de las amenazas de muerte de Sendero contra las principales dirigentes de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador. Ese mismo día se calculó que unos 300 senderistas se habían movilizado en San Juan de Lurigancho en la zona de Canto Grande-Bayóvar. La tensión en Lima era creciente. Michel Azcueta, regidor metropolitano, afirmó que la marcha de las mujeres de Villa El Salvador en contra la violencia constituía un ejemplo que debía ser seguido por todo el Perú.

El conflicto militar seguía su curso de manera inclemente con la muerte del Secretario General del asentamiento humano Juan Pablo II, Fortunato Gallego, y la entrega de otras 150 escopetas a 3,500 ronderos de las provincias de Huanta y Huamanga de manos del Jefe Político Militar de la zona de emergencia. Como muestra de apoyo a la movilización de las mujeres de Villa El Salvador y como rechazo al asesinato de la dirigente de Vaso de Leche del Callao, Juana López, madres dirigentes de diferentes comedores populares de la capital y de provincias hicieron un llamado contra Sendero “para que no sigan matando a víctimas inocentes”.

Sin embargo, Sendero continuaba con su ofensiva militar y de propaganda en Lima al confirmarse dos días después del llamado de las dirigentes de los comedores populares, una movilización de unos 50 senderistas por las inmediaciones del asentamiento humano Raucana, a la altura del kilómetro 12 de la carretera central.

María Elena Moyano, teniente alcaldesa de Villa El Salvador y dirigente popular de ese distrito, informó que había sido amenazada por Sendero Luminoso a través de dos

volantes que circularon por ese distrito. La disputa entre Sendero y las organizaciones populares, dirigidas en muchos lugares por militantes de la izquierda se hacía cada vez más encarnizada. En Sendero se incrementaba la urgencia de asegurar un control territorial en zonas de la capital, como respuesta a la gran ofensiva de la contrainsurgencia y a los golpes que le estaba propinando, en alianza con el campesinado, en la sierra central y sur del país. Como corolario del esfuerzo senderista por polarizar la lucha política y por dar demostraciones de fuerza, la agrupación de Guzmán atacó en los últimos días de septiembre a más de 40 entidades bancarias y cinco torres de alta tensión, provocando la zozobra esperada en la población.

Debe decirse que Amnistía Internacional en un esfuerzo por sintonizar con las características de la lucha militar en el Perú, reconoció, meses después, que si bien su objetivo principal era vigilar a los gobiernos para que respetaran los derechos humanos, afirmó que se había fijado, como nuevo propósito, denunciar también los abusos y violaciones cometidas por grupos no gubernamentales alzados en armas. Sin embargo, el presidente Fujimori rechazó la posición de Amnistía crítica a la actuación de los militares: “Tiene que causar estupor, en la opinión pública mundial el ataque desatinado, absurdo, injusto inferido por Amnistía Internacional contra las Fuerzas Armadas. Se trata, en realidad, contra nuestro país [...] Amnistía Internacional se porta como el mejor aliado de Sendero Luminoso y por ende del narcoterrorismo, en el Perú. Su carta tiene un solo propósito: impedir la ayuda de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas del Perú” (*El Comercio*, 30.9.1991)

En esas semanas una encuesta de Imasen indicó que el presidente de la república había aumentado su porcentaje de aprobación de 39 a 46.5%.

4.7. Se fortalece la alianza gobierno-militares-campesinado-rondas y continúa la liberalización de la economía

En octubre, el proceso de consolidación de la alianza gobierno-militares-campesinado-rondas continuó. El gobierno, a través de los militares, siguió entregando escopetas y retrocargas y los campesinos se plegaban de manera creciente a la lógica y los objetivos

de las Fuerzas Armadas. Este movimiento relativamente imperceptible y subvalorado desde la capital comenzó a tener efectos prácticos en el desarrollo de la guerra.

Sendero Luminoso sintió que perdía su libertad de movimiento y que crecientemente era expulsado de las áreas rurales y obligado a desplazarse a las ciudades. En ese marco, acelera su instalación en algunos de los principales barrios populares y marginales de Lima. El efecto era, pues, percibido de manera contradictoria: la imagen y la sensación de un Sendero Luminoso que agobiaba a la capital con coches bomba, cortes de luz, asesinatos selectivos, y acciones de propaganda de diversa índole, se efectuaba de manera simultánea con la pérdida relativa de su influencia en las zonas donde tradicionalmente había tenido hegemonía: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac e incluso Huánuco y San Martín.

De manera paralela a la lucha contra Sendero Luminoso, la dupla Alberto Fujimori-Carlos Boloña siguió acelerando el llamado proceso de liberalización de la economía, prácticamente sin oposición política solo con una oposición sindical cada vez más frágil y aislada. La precarización del empleo finalmente se instaló, o mejor dicho se formalizó, poniéndose punto final a la llamada estabilidad laboral.

Como parte de la aplicación sostenida y decidida de la nueva política económica, el 28 de agosto se anunció la venta de 50 empresas estatales. El presidente de la República se encargó de hacer el anuncio en la ceremonia de Clausura del Congreso de la Confiep. Respondió —de paso— a la derecha “tradicional” que era equivocada la acusación de que su gobierno no tenía una política antisubversiva.

Sin embargo, estos no eran los únicos frentes en los que Fujimori daba batallas. En Estados Unidos logró un nuevo apoyo del presidente George Bush y reconquistó su aval para la lucha contra el narcotráfico. La intermitente pugna fronteriza con Ecuador se hizo nuevamente presente y las acusaciones contra el expresidente Alan García continuaban, como un terreno de pugna-negociación entre el APRA y el oficialismo.

Es en este contexto que el presidente Fujimori viajó a Satipo (Junín) para entregar 200 fusiles y escopetas a los ronderos de las comunidades campesinas de esa región selvática. Unos días después, el 8 de octubre, Fujimori afirmó, en un discurso ante la

Marina de Guerra, que “el terrorismo sabe que enfrenta un gobierno con autoridad [...] El terrorismo ya no tiene ni tendrá la atmósfera de una democracia blandengue ni de los gobiernos débiles que lo dejaron crecer [...]” (*El Comercio*, 8.10.91).

La crítica de Fujimori a la “democracia blandengue” fue muy significativa porque representó una clara voluntad de constituir una alianza aún más sólida con los militares, un radical recorte del juego parlamentario —o sea una tendencia creciente a desconocer sus atribuciones— y una reducción, sin cortapisas, de los derechos democráticos.

Con el poder de las fuerzas militares desplegándose y con el copamiento creciente de los espacios rurales gracias a la alianza militar-campesina, creció el acoso de Sendero Luminoso sobre algunas ciudades importantes del país. Las iglesias de Chimbote acordaron celebrar sus misas a puerta cerrada por el temor de sufrir atentados terroristas, como consecuencia de la amenaza contra monseñor Luis Bambarén. La tensión en los barrios populares de Lima seguía incrementándose, lo que obligó a la presidenta de la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche, Teresa Aparcana, a señalar que María Elena Moyano contaba con el amplio respaldo —ante las continuas amenazas que venía sufriendo de Sendero Luminoso— de las madres de los 9,500 comités del Programa de Vaso de Leche de Lima.

En el caso de Lima, como consecuencia del obligado desplazamiento de Sendero Luminoso hacia las ciudades, la violencia política y social se acrecentaba a diario, dando lugar a la formación de rondas de autodefensa en diferentes distritos mayoritariamente populares, como Villa El Salvador, El Agustino, San Juan de Lurigancho y Comas, entre otros. Era un hecho que la vida cotidiana de importantes sectores de la población limeña se militarizaba, con el consiguiente crecimiento de la incertidumbre y del miedo. Un ejemplo de la organización cuasimilitar que impulsaban estas rondas urbanas fue la que dieron los vecinos del grupo 26 de Villa El Salvador, quienes declararon un toque de queda a partir de las 12 de la noche. Esta decisión era una manifestación de la voluntad de poner orden en el distrito, porque fue tomada en asamblea popular, y no solo contra Sendero Luminoso sino también

para enfrentar el creciente número de asaltos y violaciones perpetrados por delincuentes comunes en el distrito.

En este tejido de agudizamiento del conflicto militar interno y de sensación de gran incertidumbre en las principales ciudades, la periodista Melisa Alfaro Méndez, jefa de informaciones del Semanario *Cambio*, acusado de tener una posición cercana al MRTA, fue asesinada el 11 de octubre con un “sobre bomba”.

Entre dimes y diretes, y asesinatos impunes entre los bandos en pugna, el Comandante de la Policía, Juan Mejía León, aseguró que no tenía ninguna responsabilidad con la desaparición del estudiante de la Universidad Católica, Ernesto Castillo Páez, afirmando categóricamente que él nunca detuvo o se llevó a persona alguna el día de los hechos. Más bien, aseguró, que el estudiante universitario era un importante mando político o militar de Sendero Luminoso que se encontraba gozando de la “clandestinidad, probablemente en el extranjero” (*El Nacional*, 29.10.91). El estudiante Castillo Páez fue confirmado, posteriormente, como un detenido desaparecido.

El éxito del presidente Fujimori en sus relaciones con Estados Unidos se confirmó cuando el Parlamento norteamericano levantó, a mediados de setiembre, la suspensión de la ayuda militar y económica al Perú, vinculada con la lucha antidroga. Sin embargo, su triunfo no fue total porque el mismo Congreso norteamericano dejó sin efecto un paquete de ayuda de 10 millones de dólares. Para tomar esta ambigua decisión, los congresistas norteamericanos argumentaron que aún no se daban las condiciones que permitieran asegurar que en el Perú se respetarían los derechos humanos.

El mes de octubre de 1991 estuvo cargado de tensiones de otras características en la frontera norte del país. Durante los primeros días, el canciller Carlos Torres y Torre Lara informó que el gobierno peruano había convocado la intervención de los cuatro países garantes del Protocolo de Río de Janeiro con el fin de solucionar los incidentes fronterizos con el Ecuador. El propio Fujimori reiteró, en esos mismos días, la decisión del gobierno en no caer en las provocaciones ecuatorianas, sosteniendo que eso sería sentar un precedente nefasto para América Latina. La tensión con Ecuador,

como era natural, cargaba más el ambiente político y otorgaba un mayor protagonismo a los militares.

Las facultades legislativas entregadas en junio por el Congreso al Ejecutivo se comenzaron a manifestar: Las últimas semanas de octubre se promulgaron normas contra la estabilidad laboral (el texto único ordenado que sustituye las normas reglamentarias de la Ley 24514 sobre la estabilidad laboral), de manera tal que se aumentaron las causales de despido, las denominadas faltas graves y el derecho de descargo o defensa. El Decreto Supremo 032, a su vez, normaba que la reiterada paralización intempestiva de labores, debidamente verificada, así como la apropiación ilícita de bienes o de servicios del empleador, constituían también “causas justas de despido”.

4.8. Matanza de Barrios Altos y control presidencial de las Fuerzas Armadas

El principal hecho de noviembre de 1991 fue la matanza de Barrios Altos, en el jirón Huanta, en el Centro de Lima. Esta acción contrasubversiva del gobierno y del grupo Colina fue una expresión más de la agudización del conflicto armado en Lima. Este asesinato se convertiría posteriormente en un crimen paradigmático del gobierno del presidente Alberto Fujimori y uno de los crímenes de lesa humanidad por el cual fue posteriormente sentenciado. La matanza de Barrios Altos fue también paradigmática para los periodistas y medios de comunicación independientes que tuvieron un papel muy destacado al investigarlo y denunciarlo de manera sistemática.

El 1 de noviembre, dos días antes de la matanza de Barrios Altos, aproximadamente dos mil estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizaron una marcha en la Ciudad Universitaria, exigiendo el retiro de los soldados del ejército del campus de la universidad. Esta vez, la marcha fue encabezada por el rector y los decanos de las principales facultades⁴⁸.

⁴⁸ El Decreto Legislativo 726 de noviembre de 1991 autorizó el ingreso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a los locales universitarios con la sola autorización del Ministerio de Defensa, del Interior o de los comandos político-militares. Ese fue uno de los decretos modificados por el Congreso que Fujimori impuso con su contenido original después del golpe de Estado (Reátegui 2009: 205).

Un día antes de la matanza de Barrios Altos, el gobierno dispuso una vez más la prórroga del estado de emergencia en decenas de provincias y distritos correspondientes a siete departamentos de la selva central, sierra-centro y sierra sur, con el evidente propósito de facilitar las operaciones militares y policiales contrasubversivas, así como preservar y restablecer el orden público⁴⁹.

El 5 de noviembre, solo dos días después de la masacre de Barrios Altos, surgieron las primeras versiones que ponían en duda la versión oficialista de la participación de subversivos en la matanza del jirón Huanta, en Barrios Altos. El semanario *Cambio*, vinculado a sectores de la extrema izquierda, publicó el 7 de ese mes un informe en el que señaló que la práctica cotidiana de la guerra sucia aplicada por las Fuerzas Armadas en el interior del país había sido trasladada a la capital: la masacre de Barrios Altos era, decía el semanario, el mejor ejemplo. El periodista Gustavo Gorriti aseguró, por su parte, que esta matanza tenía todas las características de un atentado paramilitar ejecutado por un escuadrón de la muerte (*La República*, 7.11.1991).

El 12 de noviembre, a menos de dos semanas de perpetrada la matanza en Barrios Altos, el Senado rechazó los informes justificatorios presentados por los ministros del Interior y de Defensa en torno al referido incidente. El gobierno de Alberto Fujimori seguía, simultáneamente, a la ofensiva en la lucha contrasubversiva, a pesar de las críticas por la matanza de Barrios Altos y la presunta participación de un grupo paramilitar, estableciendo, mediante el Decreto Legislativo 748, beneficios para los terroristas arrepentidos: reducción de la pena para quienes abandonen voluntariamente su vinculación con la subversión armada y se presenten ante la autoridad policial respectiva. La remisión de la pena, cuando alguien involucrado en delito de terrorismo proporcione información eficaz que permita revelar detalles de su organización y de su

⁴⁹ Precisamente en este mes, el gobierno de Alberto Fujimori mediante “El decreto legislativo 734 de noviembre de 1991 autorizó el ingreso militar en los penales con poderes discrecionales. El 7 de abril de 1992 tropas del Ejército y personal de la Policía nacional tomaron el mando en los dos presidios más grandes del país, Miguel Castro Castro y San Pedro, y comenzaron a ejecutar reformas para reordenar a la población penal, especialmente a los acusados de terrorismo (Reátegui 2009: 202).

funcionamiento. Estos beneficios no se aplicarían a los cabecillas, dirigentes nacionales o regionales o integrantes de pelotones de aniquilamiento.

La tendencia del gobierno a militarizar la lucha contra la subversión armada se hacía evidente: “el conjunto de decretos legislativos que el gobierno ha dado en materia de pacificación y sistema de defensa nacional indicaría que el gobierno habría optado por militarizar aún más la estructura de mando de la lucha contra la subversión, en lugar de crear una estructura que permita una dirección y una mayor participación política y civil. Se ha hecho lo contrario a lo que venían recomendando los propios militares, que eran los primeros en señalar que ésta es una guerra política y no solo militar” (*Expreso*, 15.11.91).

El debate por los decretos legislativos antisubversivos y la necesidad de investigar la matanza de Barrios Altos provocó una aguda esgrima entre el gobierno y la oposición parlamentaria. El Poder Ejecutivo promulgó otro decreto que autorizaba el ingreso de las Fuerzas Armadas y de la policía nacional a las universidades, aduciendo que estos recintos eran bastiones y centros de adoctrinamiento y alojamiento de los subversivos. El senador Enrique Bernales llamó simultáneamente la atención del Congreso para que deje sin efecto tres decretos legislativos: el 733 (Ley de movilización), el 738 que regulaba la función de las Fuerzas Armadas; y el 751 de planeamiento de la defensa nacional, porque, según Bernales, sus alcances resultaban incompatibles con la vigencia del régimen democrático⁵⁰.

A fines de 1991, la agudización de la pugna política saltó fuera del ámbito estrictamente parlamentario. El reconocido intelectual Luis Jaime Cisneros opinó que el gobierno pretendía politizar las Fuerzas Armadas al dejar en manos del Presidente el ascenso de los militares. Ese mismo día, el vocero de Sendero Luminoso, Luis Arce Borja, declaró en una entrevista que “en el Perú, a raíz de la ejecución de

⁵⁰ Estos decretos representaban un incremento aun mayor de la autonomía militar que tenía claro antecedentes: “El 23 de diciembre de 1990 el gobierno decretó que las acciones de las Fuerzas Armadas y de la policía en las zonas declaradas en estado de excepción eran materia de los órganos de justicia militar. Una señal previa de esta tendencia fue la ratificación por parte del Senado de los ascensos otorgados a los generales de brigada del Ejército Peruano Jorge Rabanal Portilla y José Rolando Valdivia Dueñas, vinculados con la matanza de reclusos en centros penitenciarios en 1989 y con el asesinato colectivo en una comunidad andina en Cayara, respectivamente” (Reátegui 2009: 178).

algunos sacerdotes vinculados a la lucha contrainsurgente [...], lo que hay que aclarar es que el alto clero peruano [...] está sirviendo a los intereses de burgueses y terratenientes [...] yo creo que la guerra ha ingresado a una etapa más violenta [...], pero nada detendrá la marcha triunfal de Sendero Luminoso, el triunfo es inevitable para las masas revolucionarios” (*Expreso*, 18.11.91).

En torno al debate sobre los decretos legislativos que consolidan el control del presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas y que se habían convertido en el eje del debate político entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, Rolando Ames, ex senador de la Izquierda Unida, sostuvo que violaban flagrantemente la Constitución y que la propuesta del gobierno amenazaba en convertir al país en una dictadura. Más aún, Ames, expresando un punto de vista mayoritario al interior de los distintos sectores de la izquierda, consideró que los referidos decretos agudizarían la guerra civil y beneficiarían a los objetivos de Sendero Luminoso. La Asamblea Nacional de Rectores, rechazó, por su parte, la promulgación de los decretos legislativos que afectaban la autonomía universitaria, especialmente el Decreto Supremo 726 que autorizaba el ingreso de las Fuerzas Policiales y de las Fuerzas Armadas al campus universitario.

Días antes, Luis Bedoya Reyes, presidente del Partido Popular Cristiano, se manifestó en contra de las facultades otorgadas por el Parlamento al Ejecutivo, para legislar sobre pacificación. Era evidente el desconcierto que existía en la oposición, incluso dentro de la oposición de derecha democrática. Sin embargo, paralelamente, el presidente de la República aumentó su nivel de aprobación, obteniendo, según Apoyo, el porcentaje más alto alcanzado durante el año: 58%” (varios diarios, 20.10.91).

Esta fue una de las tantas señales de que la mayoría de la población quería orden y que consideraba que una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, perjudicaba la acción de Fujimori contra la subversión armada e, indirectamente, se transmitía la clara impresión que entre el Ejecutivo y el Congreso, la mayoría de peruanos optaba por el Poder Ejecutivo. Se estaba, pues, en una situación de emergencia y la población consideraba que cualquier acción o iniciativa que perjudicara la derrota de Sendero Luminoso afectaba su bienestar.

En medio de este debate, la exalcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora, fue asesinada en pleno Centro de Lima por un grupo de desconocidos. La exalcaldesa de Huamanga era calificada por los servicios de inteligencia como un personaje demasiado concesivo con Sendero Luminoso y crítica de las acciones contrasubversivas de las fuerzas militares.

El presidente Fujimori, a fines de este mes, reafirmó su decisión de tener un espacio propio de cara no solo a los partidos políticos, sino también a determinados grupos del poder fáctico, sobre todo, con relación a los grandes empresarios privados nacionales: “Nadie me va a detener ni siquiera mi propio partido, y este gobierno ha sido elegido para moralizar, por lo que ni existen los tarjetazas ni los grupos poderosos” (varios diarios, 24.11.91).

El mismo Fujimori, en aras de bajar la tensión con Ecuador, propuso un plan que enmarcado dentro del Protocolo de Río de Janeiro, permitiera la colocación de los hitos faltantes en la frontera con el Ecuador. El mes concluyó con la derogatoria de un decreto legislativo y la modificación de otros once, todos vinculados con la llamada pacificación del país⁵¹. El Senado aprobó además una ley sobre las rondas campesinas y urbanas, que eran impulsadas por el gobierno y los militares, definiéndolas como organizaciones populares, pacíficas y democráticas, cuyos fines principales eran la autodefensa y la activa colaboración con la pacificación nacional. Era claro que el Senado pretendió otorgarle a las rondas autonomía, de cara a las

⁵¹ “No fue, pues, la política económica lo que puso a Fujimori en el camino del golpe de Estado del 5 de abril, sino la voluntad de las Fuerzas Armadas —alentada por el gobierno mismo— de eliminar todo control democrático sobre la política de seguridad u defensa. En octubre se realizó la primera prueba de fuerza en este terreno. Fue el decreto supremo 017-90-JUS, por el cual el Ejecutivo otorgaba amnistía a los procesados por excesos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la lucha contrasubversiva. Como era previsible, el Senado dejó sin efecto el decreto supremo por encontrarlo inconstitucional e ilegal. A partir de ese momento, Fujimori no pierde una ocasión para desacreditar a los poderes Legislativo y Judicial, tildándolos de corruptos e irresponsables con términos extremadamente agresivos: “callas”, “chacales”. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales proceden con redoblada dureza en la lucha contra la subversión y las denuncias sobre ejecuciones ilegales, masacres, torturas y desapariciones perpetradas por ellos aumentan velozmente. Fujimori anuncia, con pleno respaldo de las Fuerzas Armadas, una nueva estrategia contrasubversiva que implica la acción coordinada de todos los sectores del Estado” (Reátegui 2009: 165).

Fuerzas Armadas y al propio gobierno, en aras de que el proceso de militarización de la sociedad rural y urbano-popular, no se siguiera acentuando. El propósito fracasó.

Finalmente tres hechos presagiaban algunas de las medidas que se tomarían durante 1992. El Poder Ejecutivo acentuó su conflicto con el Congreso y pasó a una nueva fase de su pugna, tomando iniciativas que insinuaban que podía gobernar sin su participación ni presencia. Alberto Fujimori anunció además que los dos pilares de su gobierno eran el pueblo y las Fuerzas Armadas y, por último, comunicó por primera vez, su voluntad de ir a la reelección presidencial⁵².

4.9. Ejecutivo versus Congreso, y los pilares del gobierno: el pueblo y las Fuerzas Armadas

Diciembre fue clave para determinar la nueva disposición de fuerzas que se iba cristalizando y sobre todo para saber cuál de los poderes del Estado estaba en manos de la iniciativa. En la reunión del CADE de 1991, a inicios de diciembre, en un contragolpe político, el presidente Fujimori acusó con frases duras la actuación de los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, también criticó al Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Contraloría General, y el mismo sistema bancario. La andanada de críticas que realizó contra el Parlamento fue muy especial acusándolo de entorpecer el proceso de modernización en que estaba empeñada su administración⁵³.

⁵² “Fujimori pretendió y consiguió paulatinamente un liderazgo personal sobre las Fuerzas Armadas, en vez de desempeñar el papel decorativo que ellas habían previsto para el presidente en el Plan Político-Militar. La fuente de iniciativa política de Fujimori era la contrasubversión entendida como un proceso de transformación de la sociedad y del estado superior al proceso democrático. Para cohesionar a sus seguidores, empezando por las Fuerzas Armadas, forzaba el enfrentamiento con las posiciones de los demás grupos políticos reclamando para la acción contrasubversiva cada vez más autonomía frente a los poderes legislativo y judicial” (Reátegui 2009: 171).

⁵³ “El Congreso tenía treinta días para revisar los decretos. En los pocos días que quedaban hasta el cierre de la legislatura ordinaria el 15 de diciembre, derogó seis decretos, el 731 y 764, que postergaban la entrada en vigencia del código procesal penal, el 736, 747 y 762, que penalizaban el blanqueo de dinero, el encubrimiento del narcotráfico y la revelación o difusión de informaciones que obtiene o procesa el Sistema de Defensa Nacional. Por la imprecisión de sus términos, estos decretos se prestaban a ser mal usados en desmedro de las libertades democráticas. Pero fue la derogatoria del 746, la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, lo que más escandalizó al Ejecutivo, porque se trataba directamente de un instrumento central de la lucha contrasubversiva. El problema señalado por el Legislativo era que esta ley dejaba al Servicio de Inteligencia fuera de todo control democrático. En

Desde el Congreso no faltó quien respondiera inmediatamente: el senador Javier Alva Orlandini (Acción Popular) dijo que aceptaba el referéndum para renovar el Parlamento, pero que también debía incluirse la posibilidad del reemplazo del presidente de la República por el primer vicepresidente (*La República*, 3.12.91). El senador y legendario líder aprista Luis Alberto Sánchez trató de aquietar las aguas en aras de no agudizar el enfrentamiento entre poderes: “La batalla política de estos días no es una entre el Ejecutivo y el Legislativo sino entre la reforma y la restauración de privilegios caducos” (*Expreso*, 5.12.91).

El presidente Fujimori no se dio por aludido y continuo atacando al Congreso por haber derogado algunos decretos legislativos⁵⁴. Más aún, Alberto Fujimori insinuó la posible influencia del narcotráfico en las decisiones parlamentarias por haber derogado el decreto legislativo sobre lavado de dólares. Asimismo, el mandatario dio claras señales de que estaba actuando por encima y al margen de su gabinete, dejando mal parado al presidente del Consejo de Ministros, Alfonso de los Heros, pues los afanes de éste por encontrar formas de conciliación entre el Ejecutivo y el Parlamento eran desvirtuados por los incesantes ataques del Presidente. No le faltaba razón al diputado Enrique Gherzi (Movimiento Libertad) cuando afirmó que el Presidente estaba desautorizando a su gabinete y actuaba en contra de las palabras conciliadoras del Premier Alfonso de los Heros: “lo que pretende el presidente es cogobernar con los militares en la errónea idea de que las fuerzas castrenses continuaran apoyándolo constantemente” (varios diarios, 8.12.91).

El 10 de diciembre 1991 fue un día decisivo porque se hizo pública la alianza entre Alberto Fujimori y los militares. El Presidente no solo consideró que los dos pilares

respuesta, el Presidente observó estas derogatorias y no las promulgó. Entonces el 7 de febrero la Mesa Directiva del Congreso promulgó la Ley 25399 que contenía las normas que derogaban esos decretos” (Reátegui 2009: 174).

⁵⁴ Las razones principales de la pugna de fin de año entre el Poder Ejecutivo y el Congreso: “Si bien la opinión generalizada de los parlamentarios fue que estos decretos legislativos excedían el espíritu de la ley que los autorizaba, las críticas se concentraron en tres de ellos: el decreto legislativo 733 (Ley de Movilización Nacional), el decreto legislativo 743 (Ley del Sistema de Defensa Nacional) y el Decreto Legislativo 746 (Ley del Sistema de Inteligencia Nacional)” (CVR 2003: tomo III, 163).

de su gobierno eran el pueblo y las Fuerzas Armadas, sino que el Comandante General del Ejército, general Pedro Villanueva, afirmó que el ejército peruano tenía como “tarea y misión primordiales devolver lo antes posible la paz y tranquilidad que clama nuestro pueblo, combatiendo dentro del marco el respeto a los derechos humanos al “maldito terrorismo” (varios diarios, 11.12.91).

A mediados de diciembre se sucedieron tres hechos muy significativos: en Huancayo, en aplicación inmediata del decreto legislativo 726, tropas del ejército ingresaron en la Universidad Nacional del Centro y en otros centros de instrucción superior y detuvieron alrededor de 120 universitarios, profesores y trabajadores. Las Fuerzas Armadas, por su parte, expresaron su reconocimiento y total respaldo al Presidente por la esforzada labor que realizaba para el logro de la pacificación y el desarrollo del país”. El mismo Fujimori anunció, a su vez, que seguiría fortaleciendo el servicio de inteligencia nacional a pesar de las observaciones formuladas por el Parlamento. Y, finalmente, en un acto que reflejaba el grado de desconcierto, plagado de contradicciones, al que había llegado la llamada clase política, y en este caso la derecha, el presidente Fujimori fue invitado por el PPC a la recepción por el 25° Aniversario de ese partido.

Asimismo, el Parlamento tenía listo para su promulgación la ley de control parlamentario sobre los actos normativos del Presidente lo, que permitiría reglamentar el dictado de medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Sin embargo, paralelamente, la Cámara de Diputados, como muestra de sus vacilaciones, culminó sus sesiones correspondientes a la legislatura ordinaria sin lograr convertir en ley la derogatoria de los Decretos Legislativos vinculados a la pacificación dictados por el Poder Ejecutivo⁵⁵.

⁵⁵ La CVR en su conclusión 62 señala: “Parte de estos planes autoritarios serían retomados posteriormente para el golpe de Estado de 1992. Dichos proyectos antidemocráticos expusieron a las Fuerzas Armadas a dos grandes trastornos institucionales: a) el uso de un modelo de política contrasubversiva y la imagen de unas Fuerzas Armadas victoriosas para justificar el golpe de Estado de 1992, y b) una tregua con el narcotráfico al definir al PCP-SL como enemigo principal, que debía ser aislado del campesinado cocalero. En algunos casos, y sobre todo a partir del ascenso de Vladimiro Montesinos, esa tregua se convirtió en alianza” (CVR 2004: 443).

Mientras tanto, el Presidente seguía subiendo en las encuestas según la empresa Apoyo: 60% de aprobación en diciembre, tres puntos más que el mes anterior. Era una manifestación más que presidente Fujimori mantenía la iniciativa en su pelea contra el Congreso, cosa que se manifestó nuevamente cuando adelantó su decisión de observar el proyecto de ley de presupuesto aprobado por el Congreso, porque supuestamente rompía el marco de la rigurosa austeridad y disciplina fiscal. El entonces jefe de Estado sintonizaba “con la calle”, Congreso —compuesto por todos los partidos con cierta vigencia— estaba paralizado y a la defensiva. En un anticipo particularmente relevante de lo que sería el futuro cercano el director del diario *Expreso*, Manuel D’Ornellas, opinó en su columna el 18 de diciembre que el conflicto entre el Presidente y el Congreso posibilitaría el cierre de este último por orden del primer mandatario.

En una de sus últimas declaraciones del año, Fujimori adelantó que 1992 sería el año de las privatizaciones y expresó además su deseo de volver a ejercer la primera magistratura del país tras culminar su actual período presidencial. Sin embargo, precisó que la modificación de la Constitución le correspondía al Congreso y no al jefe de Estado.

En diciembre, también, en el contexto de las ácidas pugnas entre el Ejecutivo y el Congreso, y alejado de los reflectores de la escena mediática, Montesinos —convertido en el gran operador de Fujimori— propicio un giro de timón clave en las Fuerzas Armadas al colocar como comandante general del Ejército al general Nicolás Hermoza Ríos, estableciéndose una duradera y estratégica alianza entre el asesor y el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas.

CAPÍTULO V.

EL AUTOGOLPE

El domingo 5 de abril de 1992, en imprevisto mensaje a la Nación pronunciado a las 10:30 de la noche, el entonces Presidente Alberto Fujimori dispuso la disolución temporal del Congreso de la República y la instalación transitoria de un “gobierno de emergencia y reconstrucción nacional”. El mensaje fue difundido por cadena nacional de radios y televisión, y se dispuso que las Fuerzas Armadas y la policía nacional asumieran el orden total y el control interno⁵⁶.

Fujimori precisó que los objetivos de la medida extrema que estaba adoptando eran:

1. modificar la Constitución Política en lo que concernía al logro de una nueva estructura del Congreso⁵⁷ y el Poder Judicial con el propósito de convertir a estos dos

⁵⁶ De cara a la opinión pública, el punto de vista de Schmitt sobre las dictaduras comisariales se plasma cuando la mayoría de peruanos aprueba el golpe de Estado y simultáneamente se autoconsidera democrática: se rompe la democracia para salvarla: “El 71% de la población aprobó la disolución del Congreso y el 89% se expresó de acuerdo con la reestructuración del poder judicial. Por otro lado, el 51% de la población consideraba que el régimen que se iniciaba el 5 de abril era democrático, y solo el 21% creía que se debía declarar la vacancia presidencial” (Reátegui 2009: 181).

⁵⁷ “La CVR halla que, entre 1990 y 1992, el Congreso adquirió otra fisonomía. El que no existiese una mayoría del partido de gobierno y el avance de la subversión armada empujaban a una mayor concertación y a participar de manera más activa en el diseño de una política contrasubversiva dentro de marcos democráticos. Esa nueva actitud se hizo visible en el debate sobre legislación contrasubversiva de noviembre de 1991. De otro lado, en materia de su función de control parlamentario, el Congreso de 1990-1992 intervino en situaciones de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado interno. Sin embargo, el golpe de Estado de abril de 1992, que cerró el Parlamento con la anuencia de un sector mayoritario de la opinión pública, mostró que ése fue un esfuerzo tardío e insuficiente para controlar a los poderes fácticos y corrientes autoritarias del país. Para entonces los partidos políticos parlamentarios evidenciaban claros signos de agotamiento y crisis” (conclusión CVR 120, CVR 2004: 455).

poderes del Estado en eficaces instrumentos del orden y del desarrollo; 2. modificar radicalmente el Poder Judicial y las instituciones vinculadas a éste; 3. modernizar la administración pública para adecuarla a los fines del desarrollo y a la mejor y más racional utilización de los recursos; 4. pacificar el país dentro de un marco jurídico que sancione en forma drástica a los terroristas y narcotraficantes para garantizar un clima de paz y tranquilidad que haga posible las inversiones; 5. luchar contra el narcotráfico y las actividades ilícitas conexas y eliminar la inmoralidad y la corrupción en la administración pública; 6. sancionar ejemplarmente todos los actos de inmoralidad y corrupción; 7. promover la economía del mercado dentro de un marco jurídico claramente establecido; 8. reorganizar el sistema educativo adoptando la necesidad del desarrollo; 9. descentralizar las facultades del gobierno central.

En síntesis: el autogolpe cerraba un largo círculo de creciente excepcionalidad en el Perú, iniciado en abril 1980 con el inicio de la lucha armada por Sendero Luminoso, y más exactamente con la instalación, en enero de 1983, del primer Comando Político Militar en Ayacucho. Esta excepcionalidad —que se expresó inicialmente en la creación de estados de emergencia permanentes— se acrecentó años más tarde con la crisis económica, el desenfreno de la hiperinflación —a fines de la década de 1980— y el ascenso, sobre todo en las ciudades, de la actividad de Sendero. El golpe sintetizó un momento definitivo de quiebre porque transformó la “democracia excepcional”—combinación de autoridades electos con control militar directo de amplios territorios del país— en un gobierno presidido por un civil pero sustentando abiertamente en las Fuerzas Armadas. El Estado peruano encontraba finalmente una forma autoritaria de reconstruirse⁵⁸.

⁵⁸ “Sin usar el concepto de “partido de la nación o del país”, Nicolás Lynch valora adecuadamente como Fujimori derrota a una de las dos alternativas antisistémicas que formaban parte del juego político del país en ese entonces (la otra la representaba él mismo): “Es importante cómo el *outsider* Fujimori debe prescindir, primero, e intentar eliminar, después, a los partidos políticos para cumplir su cometido. Lo que señala, que a pesar de las importantes fuerzas antisistémicas que anidan en los mismos, había necesidad de una fuerza externa a ellos y al régimen democrático en que estos partidos habían hecho una importante experiencia política, para que fuera la que le diera el golpe final a la democracia. Este carácter de fuerza antisistémica es el que llevará a la coalición golpista a la construcción de un régimen autoritario, ajeno al pluralismo y a la competencia política. En estas nuevas condiciones la crisis de los partidos se agudiza al punto del colapso, tal como se demuestra en los magros resultados que obtienen en las elecciones para el CCD y en las elecciones generales de 1995” (Lynch 1999: 254).

Minutos después del manifiesto central, leído por el golpista, se difundió un comunicado de los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la policía nacional, expresando su absoluto respaldo a las medidas anunciadas por Fujimori: “se requiere tomar medidas inmediatas de emergencia con el fin de lograr la reconstrucción del país” (varios diarios, 6.4.1992).

Con mucha certeza afirmó Carlos Iván Degregori: “Pero no cabe duda que la razón central del autogolpe fue que a esas alturas Fujimori no podía permitir la modificación de esa estratégica antisubversiva sobre la cual se basaba su alianza con las Fuerzas Armadas, estrategia que subordinaba a la sociedad civil y en la cual el presidente y los militares tenían la última palabra” (Degregori 2000: 41).

Era claro que la decisión del autogolpe había sido adoptada de común acuerdo entre Alberto Fujimori y el núcleo principal de las Fuerzas Armadas⁵⁹. Este eje conformó el vértice del poder y de las decisiones que se adoptaron en los siguientes días, semanas y meses. Técnicamente fue un golpe militar bajo la forma de un autogolpe del Poder Ejecutivo y, en particular, del presidente de la República contra los otros poderes del Estado y contra los derechos ciudadanos. Sin embargo, no debe olvidarse que este proceso de captación del estado por la lógica militar se inició desde la década anterior cuando el poder democráticamente elegido, puntualmente desde el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, decidió abdicar de su poder en favor de los altos mandos militares. Los golpes contra la democracia, inicialmente en un ámbito regional, tenían, por tanto, una larga data y habían trazado una profunda huella en el quehacer político del país⁶⁰.

⁵⁹ La situación que describe Kenney es acertada y hoy parece que se ha olvidado: “La mayoría de la población y 45% del territorio nacional se encontraban en zonas declaradas en emergencia. Más importante que las cifras, fue la preocupación creciente de expertos y de la población en general de que el Estado podría derrumbarse y así ser derrotado por los insurgentes. Es evidente, entonces, el motivo que Fujimori tenía para priorizar la recuperación económica y el éxito en la guerra antisubversiva por encima de todos los otros objetivos gubernamentales. Si no se revertía rápidamente la tendencia negativa en la que se hundía el país, Fujimori enfrentaba la posibilidad no solo de que su gobierno fracasara, sino de que el país mismo se destruyera (Kenney 1997: 78).

⁶⁰ Como dice Lynch: “El predominio del escenario de la guerra es entonces el que da origen al cambio de régimen político de la democracia de partidos al autoritarismo neoliberal. Los que

La modalidad que adoptó el autogolpe el 5 de abril se fue modificando, conforme se verá más adelante, al convertirse vía la negociación, sobre todo con la comunidad internacional —y en especial con los Estados Unidos— de un golpe cívico-militar, o militar a secas, a un gobierno que reconquista, a través del Congreso Constituyente, en noviembre de ese mismo año, una formalidad democrática que había perdido.

Sin embargo, este cambio gradual no modificó aspectos esenciales de la nueva estructura de poder: el control extremo de las Fuerzas Armadas, la impunidad en el ejercicio del poder (producto de la debilidad y de la falta de legitimidad de la sociedad organizada y de las fuerzas democráticas), la consolidación de un pequeño núcleo que controlaba los centros de decisiones y el persistente y mayoritario apoyo de los más diferentes y variados sectores sociales de la población peruana. Dicho de otro modo: la mayoría del país, en las condiciones concretas que vivía optó, en aras de garantizar el orden y la seguridad, por una reconstrucción autoritaria del Estado. El país escogió mayoritariamente vivir de manera regular en estado de excepción.⁶¹

triumfan en este escenario, que se suponía eran las Fuerzas Armadas de la democracia, se coaligan más bien con los organismos financieros internacionales a través del outsider salvador e intentan fundar un nuevo régimen basado en la fuerza aunque revestido de formalidades electorales. La fuerza, casi bruta, pasa así a ser la característica que distingue al nuevo régimen establecido. No se trata, entonces, en el caso peruano, de la fundación de un nuevo régimen político de outsider o independientes, que habrían aparecido para democratizar la política de los partidos. Se trata, más bien, de un nuevo régimen autoritario que lleva adelante una reorganización social en base a la ideología neoliberal y que usa a la figura del outsider para desprestigiar a la política en su conjunto. Me refiero tanto a la vieja política de los partidos como a cualquier nueva política que quiera reivindicar la intervención de la voluntad en el manejo de los asuntos públicos” (Lynch 1999: 262)

⁶¹ Jo Marie Burt sugiere, certeramente, que “el autogolpe no fue ni inevitable ni resultado de un bloqueo institucional (como algunos han sugerido). Por el contrario, fue resultado de condiciones políticas y sociales concretas —consecuencia de la extrema debilidad de las fuerzas democráticas, que fueron incapaces de concebir soluciones pacíficas y democráticas a las múltiples crisis del Perú—, y de la voluntad política de los gestores del Estado, quienes se embarcaron en un proyecto para reafirmar el poder estatal sobre la sociedad que, a su juicio, solo podrían lograrse a través de medios autoritarios, y quienes, además, se las arreglaron para construir una coalición de amplia base que respaldase este proyecto político autoritario” (Burt 2009: 273).

Sin embargo, el problema de fondo es que en el Perú transitaba una corriente política, en el Estado y en la sociedad, más poderosa que era la del “estado de excepcionalidad”, tendencia mucho más potente que la eventual pugna entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento⁶². La mayoría de los partidos políticos que integraban el Congreso habían sido también durante la década de 1980, desde el Poder Ejecutivo y el Parlamento, coautores de la excepcionalidad que vivía el país. La excepcionalidad se convirtió, con el golpe de Estado, en una forma de gobernar el país por un largo período. Esta es la clave.

5.1. La epidérmica resistencia democrática

El 7 de abril, el Consejo Nacional de Presidente de los Gobiernos Regionales se pronunció de la siguiente manera: “rechazamos y condenamos la ruptura perpetrada por el ciudadano Alberto Fujimori, algunos jefes de las Fuerzas Armadas y policiales [...] respaldamos la resolución del Congreso que declara vacante la presidencia de la república por inmoralidad” (varios diarios, 8.4.1992).

Esta declaración se basaba en un pronunciamiento suscrito en el Parlamento por distintos sectores políticos declarando la vacancia de la presidencia de la República por haber violado la Constitución Política del Perú y haber subvertido el orden público. El mismo documento convocaba al senador Máximo San Román, vicepresidente de la República, para que asumiera la Presidencia de la Nación.

⁶² “Algunos analistas sostienen que el autogolpe fue resultado de un bloqueo institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo (Kenney 1996, 2004). A fines de 1991, luego que el Ejecutivo aprobara una avalancha de 126 decretos leyes, los líderes de la oposición en el Congreso comenzaron a trabajar conjuntamente para anular los decretos que consideraban más abusivos, en particular aquellos que concedían un cheque en blanco a los militares en la guerra contrainsurgente [...] No obstante, esta explicación sobre el autogolpe es insatisfactoria en varios niveles. En primer lugar, el Congreso había otorgado poderes especiales al gobierno de Fujimori para aplicar sus medidas de reforma. Ello le daba al presidente una gran libertad para decretar políticas económicas, así como de seguridad interna, sin la supuesta injerencia del Congreso. Es cierto que el Congreso trató de limitar algunas medidas de estos decretos, de hecho, en una rara muestra de unidad, congresistas de todos los partidos del espectro político unieron fuerzas para revocar o modificar los decretos leyes que consideraban graves violaciones a la Constitución. Algunas de estas leyes, sostuvieron, llegaban a constituir un ‘golpe blanco’ —un golpe de Estado de facto dentro de las estructuras democráticas formales. El Congreso estaba ejerciendo su función democrática de control de los abusos de poder por parte del Poder Ejecutivo” (Burt 2009: 277).

Kenney da una explicación solo parcial, por referirlas estrictamente a su relación con el Congreso, de las alternativas que tuvo Fujimori ante sí para gobernar “(1) buscar apoyo de mayorías transitorias en el Congreso, intentar evitar la formación de una mayoría opositora, y gobernar al margen del Congreso hasta donde fuera posible; y (2) intentar gobernar sin el Congreso elegido en el 90, o por medio de la disolución constitucional de la Cámara de Diputados y la convocación de nueva elecciones, o cerrando el Congreso inconstitucionalmente (Kenney 1997).

El mismo autor punta con mucho más precisión cuando alude a las razones estrictamente coyunturales del golpe y de manera interesante, además, a “las reglas de juego constitucionales desarrolladas a partir de 1980 [...] Lo que sí insisto, es que las decisiones que llevaron al autogolpe fueron fuertemente condicionadas por el marco político-institucional vigente, incluyendo principalmente la fragmentación y polarización del poder político en el Congreso visible en 1990 y las reglas de juego constitucionales desarrolladas a partir de 1980” (Kenney 1997: 90).

El lunes 6 de abril, cerca de medio centenar de parlamentarios intentaron reunirse en el local del Colegio Abogados de Lima (CAL), pero fueron impedidos de ingresar por las fuerzas públicas. La represión fue extremadamente dura y a pesar de contar los parlamentarios con el permiso del decano del Colegio, Andrés Aramburú Menchaca, no pudieron reunir al Congreso en ese recinto con el fin de declarar la vacancia de la presidencia por incapacidad moral⁶³.

El presidente de la Cámara de diputados, Roberto Ramírez del Villar (PPC), dio su opinión sobre lo que había sucedido el día anterior: “este es un golpe de Estado; el Presidente ha abandonado sus obligaciones y su respeto por la Constitución, ha pasado por encima de ella y con el apoyo de los jefes de las Fuerzas Armadas se ha

⁶³ “La CVR concluye que el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 significó el colapso del Estado de derecho y mostró además la debilidad del sistema de partidos; el golpe contó con el apoyo de la mayoría de la opinión pública. En medio de la ofensiva urbana del PCP-SL, sectores importantes de todos los estratos sociales se mostraron dispuestos a trocar democracia por seguridad y a tolerar las violaciones a los derechos humanos como el costo necesario para terminar con la subversión” (conclusión CVR 99, CVR 2004: 451).

apoderado del Estado”. Las declaraciones de Ramírez de Villar reflejan el estado de ánimo de la clase política: “quizás sería más exacto decir que el presidente y las FFAA habían capturado el Estado” (*El Comercio*, 6.4.1992).

El 9 de abril, cerrando este primer período de efímera e intrascendente resistencia, en una sesión clandestina, alrededor de un centenar de representantes parlamentarios, entre diputados y senadores, declararon la vacancia de la presidencia de la República, por incapacidad moral, y designaron como nuevo Presidente al primer vicepresidente de la República, Máximo San Román.

El Fiscal de la Nación presentó su renuncia irrevocable al cargo ante lo que llamó la quiebra del Estado de derecho y la ruptura del orden constitucional. El mismo día 5 abril y durante los dos días posteriores los partidos políticos se pronunciaron en contra, salvo el partido oficialista Cambio 90. El movimiento Libertad —liderado por Mario Vargas Llosa— difundió un pronunciamiento condenando el golpe de Estado. Acción Popular, a través de Fernando de Belaúnde, envió una carta al presidente del Senado, Felipe Osterling, señalando que: “debe procederse a su reunión (se refería al Congreso de la República) en el más breve plazo, para oficializar la vacancia de la presidencia de la República por incapacidad moral de quien está atentando contra la continuidad de la vida institucional” (*Expreso*, 7.4.1992).

Cambio 90 por su parte salió al frente señalando que compartía y apoyaba la decisión del gobierno y del presidente de la República en todos sus términos y solicitaba “al pueblo peruano a actuar con serenidad, con cordura y reflexión ante estos hechos que sin lugar a dudas marcan el inicio de una verdadera etapa histórica de cambio en la vida de nuestra patria y cuyo principal objetivo es lograra la ansiada pacificación nacional” (*La República*, 7.4.1992). El comunicado de Cambio 90 puso claramente el énfasis en el aspecto que, según los fujimoristas, justificaba la decisión adoptada: la pacificación nacional. Dicho de otra manera: la urgencia de establecer el orden en el país.

5.2. Los medios escritos opinan

Inmediatamente después de la decisión anunciada por Alberto Fujimori, la totalidad de los medios de comunicación fue intervenida por efectivos de las Fuerzas

Armadas⁶⁴. El diario *El Comercio* en su edición del martes 7 exige que el presidente de la República se retracte: “es indispensable que se cambie el rumbo seguido y que se devuelva al país a la plena constitucionalidad, restañando las fisuras abiertas con este procedimiento irregular que había tomado por sorpresa, incluso al propio presidente del Congreso [...]”.

El diario *Expreso* consideró que “el presidente Alberto Fujimori cedió a la tentación de quebrar el orden constitucional. Es algo inaceptable no cabe duda que el país estaba enfrentando una situación complicada, pero no es cierto que la vía democrática estuviera agotada [...] No queremos en el Perú una dictadura de ningún tipo. Tampoco queremos una fractura irremediable en las fuerzas políticas partidarias. Para vencer a Sendero Luminoso se requiere de la unidad de todos una lucha exclusiva militar puede provocar un contraproducente baño de sangre. Ese es el mayor peligro de la situación actual” (*Expreso* 7.4.1992).

Sin embargo, el director del diario *Expreso*, Manuel D’Ornellas opinó en su columna, el mismo martes 7: “no nos engañemos la decisión del Presidente Alberto Fujimori de cerrar el Congreso en forma inconstitucional tiene el apoyo de los grandes sectores ciudadanos. Lo van a revelar las encuestas. En los últimos días los sobrevivientes del anterior régimen aprista hicieron lo indecible para demostrar que ellos eran quienes mandan en el Perú”. (*Expreso* 7.4.1992). D’Ornellas anunciaba, así, el apoyo mayoritario que tendría la medida adoptada por Alberto Fujimori e insinuaba una justificación política de la decisión adoptada al decir que los apristas habían dado más de una señal provocadora, durante las semanas previas al golpe, en el sentido de que ellos eran los que gobernaban el país.

⁶⁴ ¿Qué proponía el plan militar original, el llamado “plan verde”? En gran medida como se puede constar leyendo las líneas que siguen alcanzaron su propósito: “En el sector comunicaciones proponen replantear el uso de los medios de comunicación para “la conducción psicológica de la población”. Precisan que “la libertad de empresa es perfectamente compatible con estos objetivos, la libertad de opinión es incompatible con la coyuntura” [...] Éste sería uno de los principales campos de acción de la institución encubierta llamada Sistema Nacional de Control, Seguridad y Propaganda” (Reátegui 2009: 160).

El diario *Gestión* consideró que el presidente Fujimori al clausurar el Congreso y anunciar drásticas reformas en la estructura del estado, sustentándose en el apoyo de las Fuerzas Armadas y policiales, ha provocado en el país un sensible retroceso en la institucionalidad de la democracia (*Gestión*, 7.4.1992).

La República consideró que “el régimen ha intentado obtener una apariencia de legibilidad, asegurando la continuidad gubernamental por medio de la permanencia del candidato que eligió la mayoría de los peruanos en 1990, pero eso no basta [...] La República exige que se retome el Estado de derecho, pues es únicamente dentro de él que las grandes mayorías pueden lograr ser oídas” (*La República*, 7.4.1992).

El semanario *Caretas* opinó respecto a las reacciones que habían provocado el golpe de Estado del 5 de abril de la siguiente manera: “dejémonos de medias tintas que en estos días lamentablemente parecen estar agotándolos varios medios de comunicación [...] apenas surge un dictador, allí están ciertos blanquitos y calculadora en el bolsillo y creen haber encontrado el hombre fuerte que ponga orden y reprima a los cholos y les dé gusto. Ahí surgen ciertos cholos que petición en mano, piensan haber encontrado, el taita que le proporcione como dádiva una solución mágica a sus problemas. Pareciera que hubieran vuelto a 1968. Poco importa la represión a los corifeos hasta que les toca a ellos. Entonces se quejan sin encontrar una prensa libre que les sirva siquiera como paño de lágrimas” (*Caretas* 1206).

De la revisión se colige que la mayor parte de la prensa escrita se pronunció, con algunos matices, claramente en contra del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992. El diario *La República* y el semanario *Caretas* fueron rotundos en su rechazo. Con claridad similar se pronunciaron los diarios *El Comercio* y *Gestión*. El diario *Expreso* fue el más concesivo con la decisión de Fujimori, y solo dos días después del golpe afirmaba que la decisión inconstitucional de cerrar el Congreso “tiene el apoyo de los grandes sectores ciudadanos” y que el tipo de oposición del APRA había alentado la decisión de Fujimori y los militares. En términos generales, no se puede soslayar que los medios de comunicación escritos expresaban también, a pesar del rechazo rotundo al golpe, la debilidad de la oposición política y social democrática frente al golpe.

5.3. Instituciones sociales y Congreso defenestrado reaccionan

Las organizaciones de la sociedad civil, como los sindicatos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se manifestaron radicalmente en contra del autogolpe. Analistas y políticos se expresaron de modo similar; pero, de nuevo, quedaban claros la debilidad de sus fuerzas; el desgaste de los años de crisis económica y de los paros y las huelgas sin resultados positivos. Paralelamente, los esfuerzos de la lucha por el respeto por los derechos humanos, sobre todo en las zonas del conflicto armado interno, soportaban un relativo aislamiento respecto de grandes sectores dispuestos a aprobar el uso de la “mano dura” para resolver la crisis institucional y derrotar a Sendero.

El analista Pedro Planas mostrando fastidio ante algunos comentarios complacientes con el golpista afirmaba “el actual golpe de Estado emprendido por mandos militares por el presidente Alberto Fujimori, tiene, sin duda, apoyo popular, como tuvo apoyo popular el golpe de Leguía, iniciando el inicio de una “Patria Nueva”. No finjamos estar sorprendidos por la magia del caudillismo de turno. Estamos frente a un golpe militar con tanquetas, bayonetas, medidas de censura y represión franca [...]. (*Gestión*, 8.4.1992).

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indicó que “ante los graves sucesos que vienen afectando a nuestra nación manifiesta a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente: condenamos el golpe de Estado gestado por el señor Fujimori, quien con el apoyo de los mandos de las Fuerzas Armadas ha atentado gravemente contra la Constitución” (*La República*, 9.4.1992).

El Sutep y la CGTP rechazaron y condenaron la quiebra de la constitucionalidad en el país y afirmaron que Alberto Fujimori ha sido descalificado como presidente democrático. Olmedo Auris dijo “los maestros y la coordinadora sindical expresan su más enérgica protesta a la quiebra de la constitucionalidad en el país (*La República* 8.4.1992). Por su parte, el primer vicepresidente del Perú, Máximo San Román desaprobó las acciones de Fujimori. El Congreso lo habilitó para asumir la presidencia, si es que regresaba al país. San Román anunció que lo haría y que estaba decidió a asumir la jefatura del Estado. El vicepresidente calificó a Fujimori de usurpador (*Expresso*, 8.4.1992).

El 21 de abril, en una sesión del defenestrado Congreso, juramentó Máximo San Román al cargo de Presidente Constitucional de la República. El presidente del Senado, Felipe Osterling, le impuso la banda presidencial. Osterling se encontraba en compañía del presidente de la cámara de diputados, Roberto Ramírez del Villar.

Tres días después de haber sido ungido presidente de la República por el clausurado Congreso, el presidente constitucional Máximo San Román envió una carta al secretario general de la OEA rechazando las medidas de gobierno de emergencia y calificando a Fujimori de usurpador. El mismo San Román rechazó el plebiscito propuesto por Fujimori y propuso a su vez un cronograma alternativo: (1) el 5 de julio, elección por voto secreto y universal de la asamblea constituyente (2) la asamblea, elegida el 5 de julio de 1992, se instalaría el 28 del mismo mes (3) la asamblea constituyente instalada elegiría un gobierno de transición (4) el 31 de octubre del mismo año serían promulgadas las reformas constitucionales aprobadas por la referida asamblea constituyente (5) el primero de abril de 1993 se llevaría a cabo la transferencia democrática, terminaría el mandato del gobierno de transición y se reinstalaría un nuevo gobierno electo por el voto electo.

En respuesta a una iniciativa de diálogo que paralelamente promovía el gobierno de Fujimori el senador Enrique Bernal opino “que no se han precisado las reglas de juego de ese diálogo ni los temas que se tratarán” (*La República*, 3.5.1992).

Como un esfuerzo por superar su manifiesta orfandad política, el 15 de mayo, a tres días de la intervención de Fujimori ante la asamblea de cancilleres de la OEA, Máximo San Román, en la Plaza San Martín, en la primera manifestación pública de la oposición desde el 5 de abril, insistió en el planteamiento de la elección inmediata de una asamblea constituyente que lleve a cabo reformas de la Constitución (varios diarios, 16.5.1992).

5.4. La presión internacional: su primer cronograma de “restablecimiento” democrático

El gobierno de Fujimori adoptó inmediatamente una serie de medidas: el 8 de abril en un mensaje cargado de críticas contra el Congreso y el Poder Judicial, Fujimori

afirmó que no habría tregua contra la corrupción y que su erradicación fue una de las causas por la que decidió el golpe de Estado (varios diarios, 9.4.1992).

Ese mismo día declaró en reorganización el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y dispuso que en menos de una semana el sector justicia designaría una comisión con facultades para adoptar las medidas pertinentes. En un rápido recorrido por las calles de Lima, el golpista con ánimo victorioso, acompañado por un periodista internacional, y respondiendo a los temores de sectores de los medios de comunicación y empresariales, aseguró que la “imagen del Perú mejorará automáticamente cuando se conozcan los propósitos del gobierno” (*El Comercio*, 9 y 10. 4.1992).

Sin embargo, en las siguientes dos semanas el gobierno ensayó sobre todo respuestas en el frente internacional, dio señales de poseer todo el apoyo de los militares e intentó esbozar un cronograma detallado de retorno a la democracia que le permitiera cierto juego ante las acusaciones, dentro y fuera del país, de que se había instalado una dictadura en el Perú.

El 15 de abril ofreció una conferencia de prensa a corresponsales japoneses, la que aprovechó para saludar la próxima presencia de la misión de la OEA que había previsto llegar el martes 21 de abril: “ella comprobará que se está buscando una democracia auténtica”, concluyendo, según él, con la dictadura de un grupo pequeño de políticos que hoy se enfrenta a una gran masa, que es la población (varios diarios, 16 y 17.4.1992).

El Comando Conjunto de las FF.AA. y la policía nacional emitieron un nuevo comunicado ratificando en su integridad el contenido del emitido el mismo 5 de abril. Era evidente que Fujimori y la cúpula militar no deseaban que se abriera la mínima fisura entre ambos, sobre todo cuando se aproximaba una reunión de la OEA y la presión internacional se hacía más evidente. El 13 de abril, en Washington, los cancilleres de la OEA, con diferentes matices, rechazaron unánimemente el golpe de Estado que dio el domingo, 5 de abril, el presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, la presión internacional no tenía el propósito ni la fuerza —y en algunos casos el interés— para remover al nuevo gobierno de facto.

El 22 de abril, el presidente Alberto Fujimori reafirmó, en una manifestación convocada por organizaciones sociales, realizada en la Plaza San Martín, que su gobierno no daría ningún paso atrás en las “reformas” iniciadas el 5 de abril. Consideró necesario que ante la OEA se debe escuchar “la voz del pueblo”.

El punto de quiebre definitivo a favor del golpe cívico-militar de Alberto Fujimori, en el ámbito internacional, se produjo cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que seguiría considerando a Alberto Fujimori como presidente del Perú, al margen de la decisión del disuelto Parlamento de nombrar a Máximo San Román como nuevo jefe de Estado. Fue el portavoz del Departamento de Estado, Richard Bouchard, el encargado de anunciarlo. Sin embargo, el Departamento de Estado dejó para la negociación el tiempo que se utilizaría para el retorno a la legalidad democrática, esto como demostración de su desacuerdo con el calendario de Alberto Fujimori para restablecer la democracia (*El Comercio y La República*, 21 y 23.4.1992).

El secretario de Estado para Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos, embajador Bernard Aronson, llegó a Lima para sostener una entrevista con Alberto Fujimori. El apoyo condicionado al régimen golpista y el liderazgo de la negociación tenía a Estados Unidos como su protagonista principal. Tras la reunión Aronson manifestó que Estados Unidos ratificaba su posición de mantener en suspenso el apoyo económico al Perú así como la asistencia militar en la lucha contra el narcotráfico, hasta que no se restituyera plenamente la democracia constitucional en el país. Aronson puntualizó además que la solución a la crisis política que vivía el Perú “debe ser peruana” e insistió en la necesidad de que el retorno a la democracia se produjese en el menor plazo posible⁶⁵ (*El Comercio y Gestión*, 4.5.1992).

⁶⁵ “¿Cómo hacer compatibles la libertad de empresa y la transparencia en la gestión pública con la tiranía política y la absoluta intransparencia de los actos del Estado? Esta pregunta no preocupaba en lo más mínimo a los autores del plan. Su confianza se apoyaba en la desesperación de una población agobiada al mismo tiempo por la incertidumbre económica y por el terrorismo. Sin embargo, los autores del plan encaraban una cuestión más inmediata ¿cómo obtener el apoyo de los Estados Unidos para el planeado régimen? Había que ofrecerles algo importante para que pasaran por alto la quiebra de la democracia constitucional. La reforma estructural no bastaba para esto, porque no había más remedio que hacerla e igual se haría dentro del proceso democrático. La respuesta se prepara en el Anexo III “Cooperación Perú-USA: una necesidad sustancial”. El tema central de este plan

Utilizando la conocida política de la zanahoria y el garrote, pero reconociendo la posición de fuerza del gobierno de facto de Alberto Fujimori “El gobierno de Bush suspendió la ayuda militar y la mayor parte de la asistencia económica al Perú, aunque se mantuvo la ayuda humanitaria y parte de su programa de lucha antidroga. El gobierno de los EEUU también instó a la OEA a ejercer presión sobre Fujimori para animarle a regresar al orden constitucional (Burt 2009: 280)

Con miras al restablecimiento del orden democrático y constitucional en el país llegó la comisión ad hoc de la OEA (varios diarios 4.5.1992). Los embajadores europeos, sugirieron presionar al gobierno de facto de Alberto Fujimori para que cumpla su promesa de retorno a la democracia en el más breve plazo (varios diarios, 6.5.1992).

Unos días antes, y en vista de que la misión de la OEA había confirmado su llegada para el 21 de abril, Alberto Fujimori detalló un primer cronograma para los doce meses siguientes del llamado “gobierno de emergencia y reconstrucción nacional”: (1) 5 de julio de 1992, consulta popular sobre la conveniencia de enmendar la Constitución política, (2) 31 de agosto de 1993 prepublicación de las enmiendas a la Constitución política e inicio del debate, (3) 8 de noviembre realización simultanea de las elecciones municipales y regionales y de una consulta popular (para modificar la Constitución (4) 28 de febrero de 1993, elecciones parlamentarias del nuevo Congreso y (5) 5 de abril de 1993 conformación del nuevo Congreso Nacional e inicio de su primera legislatura.

Es fácil constatar que este primer cronograma fue una respuesta apurada y sin demasiada previsión que tuvo como origen las presiones iniciales de la comunidad internacional y las denuncias internas de que se estaba ante una dictadura.

de entendimiento con la administración de Bush es el narcotráfico [...] El acuerdo propuesto por el Plan Político-Militar a los Estados Unidos está bien claro. Se trata de evitar que el PCP-SL o el MRTA contralen el Alto Huallaga, a fin de cortar una conexión narcoterrorista. El único medio que tendrían los Estados Unidos en ese momento para tal fin sería apoyar el Plan Político-Militar” (Reátegui 2009: 159).

A pesar de la actitud concesiva de la OEA y sobre todo de Estados Unidos, el carácter dictatorial del gobierno era inocultable: El 12 de mayo, el presidente del Comunidad Internacional de Derechos Humanos de la OEA, Marco Tulio Bruni, acompañado del abogado Luis Jiménez, visitó el penal de Castro Castro con la intención de entrevistarse con los detenidos senderistas rendidos luego de los violentos enfrentamientos de una semana antes, cuando la fuerza pública entró a sangre y fuego al penal de Canto Grande y capturó los pabellones bajo control de Sendero. El ingreso violento al penal fue una señal explícita de Fujimori y su gobierno dictatorial de que derrotar a Sendero era formalmente su principal cometido. La comitiva de la OEA fue recibida por un alto oficial de la policía nacional. El oficial les comunicó de manera cortés que no podían ingresar al interior del penal por orden de sus superiores. En una conferencia de prensa, el alto funcionario de la OEA expresó su profunda preocupación y sus reservas sobre la situación de los derechos humanos en el Perú (varios diarios 12.5.95)

5.5. Minicrisis y avances en el control del Estado

El primer brote de crisis gubernamental se produjo con la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Blacker Miller. El ministro renunciante intentó justificar su renuncia acusando de inconsecuente al ministro de Economía, Carlos Boloña (varios diarios, 25.4.1992).

El “gobierno de emergencia y reconstrucción” dando claras señales de que uno de sus intereses principales era controlar el Poder Judicial nombró mediante decreto ley a doce vocales provisionales para la Corte Suprema en reemplazo de los vocales destituidos días anteriores. Esta decisión era también una forma de consolidar su influencia y desplazar la tradicional injerencia del APRA sobre el decisivo Poder Judicial.

El primero de mayo en una entrevista que se publicó al día siguiente en el diario La República, Alberto Fujimori hizo una de sus primeras y abiertas defensas de Vladimiro Montesinos: “Montesinos no ha tenido ni un solo caso de este tipo desde 1982 (se refería a la defensa de narcotraficantes). Yo puedo tener el abogado que me parezca y que me defienda mejor en mis asuntos personales [...] El señor Montesinos es un funcionario del servicio de inteligencia”. Esta declaración fue una clara

manifestación de que la alianza entre los dos personajes centrales del golpe y del gobierno que se había instalado, era decisiva y estaba sellada.

5.6. El autogolpe y la nueva legislación de excepción (con los militares en el mando)

El golpe de Estado trajo de la mano una legislación antiterrorista y de control de la población de la población aún más radical que las que ya se habían promulgado. Era una exigencia del momento, una razón fundamental del golpe: legalizar lo ilegal, quebrar formal y normativamente la Constitución y los derechos individuales, e invadir —como pocas veces en el Perú— el ámbito de lo privado. La alianza cívico-militar constituida para organizar y propinar el golpe de Estado se expresaba sin ambages en el plano legal.

Se promulgaron los decretos legislativos sobre pacificación que habían sido modificados o derogados por el Congreso a fines de 1991. En escasos meses o semanas se promulgaron: el decreto ley 25365 que otorgaba amplias atribuciones al Servicio de Inteligencia Nacional. El decreto ley que fortalecía el control policial en las cárceles. Se consolidó el apoyo a las rondas campesinas. Se dio luz verde a la intervención militar en las universidades y se incrementaron las operaciones de rastillaje en las poblaciones urbanas.

En materia de legislación antiterrorista —marco legal de la detención y el juzgamiento— se realizaron cambios que violaban las garantías elementales del debido proceso:

— El Decreto Ley 25475 (6 de mayo de 1992) establecía la cadena perpetua para algunos casos de terrorismo y ampliaba las penas por otros casos, a la vez que instauraba el procedimiento de jueces sin rostro.

— El Decreto Ley 25499 (16 de mayo de 1992) modificaba el decreto legislativo 748, a través del cual se establecía la ley de arrepentimiento de subversivos rendidos.

— El Decreto Ley 25564 (20 de junio de 1992) reducía la edad de los exentos de

responsabilidad penal de 18 a 15 años para los que cometían delitos de terrorismo.

— El Decreto Ley 25659 (13 de agosto de 1992) estableció la figura penal de traición a la patria para delitos antes tipificados como de terrorismo. Permitía además, en un claro acto inconstitucional, que los tribunales militares juzgaran a civiles acusados de terrorismo. Asimismo, reducía los plazos del proceso y limitaba así la capacidad de defensa de los inculcados. Con este mismo grupo de decretos se confirmaron las altas prerrogativas militares, así como la extensión de su poder en las zonas de emergencia y en la actividad contrasubversiva.

— El Decreto Ley 25626 estableció que todas las dependencias vinculadas a la lucha contra la subversión armada y el narcotráfico debían adecuar sus normas y procedimientos a las directivas del Comando Operativo del Frente Interno, dirigido por el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

— El Decreto Ley 25708 estableció los procedimientos para juzgar los delitos de traición a la patria y permitió la aplicación del procedimiento sumario del Código de Justicia Militar en los juicios en el teatro de operaciones. Finalmente, el decreto ley 25728 creó facultades para condenar en ausencia a los responsables del delito pos terrorismo⁶⁶.

5.7. Sin plan de retorno a la democracia: sobre todo ganar tiempo

Unos días después y como muestra de que el entonces presidente Fujimori no tenía aún un cronograma de “retorno a la democracia” definido, declaró que no se iba a convocar a ninguna asamblea constituyente, indicando que, por el contrario, las reformas constitucionales que se consideraban necesarias se aprobarían a través de la consulta popular (varios diarios 4.5.1992).

En el afán por dar una imagen de que se restablecía el vínculo con las fuerzas de la oposición y que el autogolpe del 5 de abril era solo una breve interrupción para

⁶⁶ Tomada esta información de Reátegui 2009: 182.

restablecer en mejores términos la democracia; el primer ministro, Oscar de la Puente Raygada, anunció la creación de una comisión integrada por cuatro ministros, bajo su dirección con el propósito de llevar a delante el llamado “Diálogo Nacional por la Paz y el Desarrollo”, que unos días atrás había convocado el mismo Fujimori (varios diarios 2.5.1992).

La agenda que se propuso para el “Diálogo” -instalado en las oficinas del Centro Cívico— incluía: la reforma de la Constitución política, nueva estructura del Poder Legislativo, pacificación, ley de partidos y Poder Judicial (*La República*, 5.5.1992).

El listado de los puntos considerados en la presunta agenda era una muestra clara de que el gobierno golpista los había lanzado con el fin de medir fuerzas sobre todo en relación con la presión que sufría con la comunidad internacional. El gobierno no se creía su propia agenda, sobre todo tomando en cuenta la debilidad interna que habían mostrado sus adversarios de la oposición.

El canciller uruguayo, Héctor Gros Espiell, fue llamado a inicios de mayo de manera aparentemente sorpresiva por el ministro Carlos Boloña con el propósito de discutir un esquema político destinado al retorno de la constitucionalidad. Se supo que el entonces jefe de Estado se mostró flexible respecto al cronograma originalmente planteado por su gobierno, aceptando la posibilidad de acortar el plazo para la convocatoria de un Congreso Constituyente Democrático (CCD). El 17 de Mayo, mes y medio después del golpe, horas antes de decidir un sorpresivo viaje para participar de la cita de cancilleres de la OEA, Fujimori convocó a un Congreso Constituyente Democrático, para los próximos cuatro meses.

El referido congreso tendría como objetivo principal acordar y proponer una nueva constitución que recogería las enmiendas y propuestas del gobierno. Fujimori se mostraba flexible en cuanto al cronograma político para llegar a lo que él llamaba en ese entonces la auténtica democracia (varios diarios 18.5.1992).

Al día siguiente, Fujimori expuso ante la asamblea de cancilleres de la OEA el nuevo cronograma político de “retorno a la democracia”. Su principal compromiso fue

llevar a cabo en menos de cinco meses la elección de un Congreso Constituyente Democrático con el propósito de restablecer, según él, la plena legitimidad institucional y democrática. Exhortó además a los cancilleres para que apoyasen la propuesta y lanzó severas críticas a los partidos políticos porque pueden matar a la democracia (varios diarios 19.5.1992).

CAPÍTULO VI

LA CONSOLIDACIÓN DEL AUTOGOLPE

La detención de Abimael Guzmán el 13 de setiembre de 1992, por obra de un operativo de Inteligencia de la Policía Nacional, al mando del jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), general Ketín Vidal, resuelve definitiva, aunque después de un proceso gradual, la legitimidad del autogolpe propiciado por Alberto Fujimori el 5 de abril de ese mismo año. Guzmán es detenido con altos dirigentes de su partido, incluida Elena Iparraguirre, número dos en la jerarquía de Sendero y, además, su pareja sentimental. La caída de Guzmán remeció el país. Su impacto emocional fue particularmente especial porque convenció a la gran mayoría de los peruanos —aunque parezca hoy poco creíble— de que Guzmán existía y se lo podía detener; y que SL era, por lo tanto, una fuerza política que se podía derrotar. Durante meses, el terrorismo y la violencia política en general venía siendo la preocupación principal de los peruanos. No solo las encuestas lo indicaban sino también el humor de la calle, sobre todo en determinadas regiones del país. Guzmán aparecía como un personaje inalcanzable; más aún, las versiones de que la Policía había estado a punto de detenerlo eran difícilmente creíbles y más parecían psicosociales que verdades.

La disputa, por haber logrado la captura de Guzmán, entre el Servicio de Inteligencia Nacional, liderado por Montesinos, y la Policía, en especial con Vidal, como jefe de la Dincote, fue un hecho importante durante esos días febriles, pero de menor importancia, circunstancial, si se le observa en un horizonte de mediano plazo. Si lo había capturado la Policía o este éxito se debía a acciones previas del SIN, tenía algún valor (para el análisis de estrategias), pero era algo secundario frente al capital político que representó la captura de Guzmán para el gobierno de Fujimori.

Si la detención de Abimael Guzmán fue el hecho político más importante del período inmediato post autogolpe de Estado, la realización de las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático (CCD) fueron la convalidación del nuevo régimen, legitimado con la participación de la mayoría de las fuerzas políticas y el claro apoyo de la comunidad internacional: la OEA y, en especial, los Estados Unidos. La elección del CCD abrió paso al surgimiento de una nueva correlación política que tenía poco o nada que ver con la que se había expresado dos años antes en las elecciones generales de 1990.

El fujimorismo, a través de un nuevo agrupamiento denominado Nueva Mayoría-Cambio 90, consiguió el 22 de noviembre en las elecciones del CCD una superioridad absoluta. Con este nuevo bloque ingresan a este sui generis Congreso ya no solo algunos de los sobrevivientes de Cambio 90, sino sobre todo nuevos rostros que el fujimorismo había captado en sus dos años de gestión, sobre todo un buen número de profesionales. Fujimori afirmó, como producto de los resultados, que “con estas elecciones ha habido, por primera vez en el país, un auscultamiento de la voluntad popular [...] si hubiéramos contado con este mecanismo, quizá las medidas del 5 de abril no habrían sido tan traumáticas [...] lo fundamental es regresar a la democracia. Lo primero ya ha sido conseguido: se ha llevado a cabo las elecciones de manera limpia y transparente. Falta asegurar, ahora, que el Congreso sea efectivamente autónomo y soberano” (*Expreso*, 25.11.1992).

Fujimori no dejaba de insistir y reivindicar que el autogolpe y todo lo hecho, incluyendo las acciones más extremas, eran en defensa de la democracia: de su preservación, consolidación y retorno. Sabía que estaba obligado a administrar políticamente este doble discurso, sobre todo de cara a grandes bolsones de la opinión pública.

El intento de golpe de un grupo de militares institucionalistas contra Fujimori fue el último gran esfuerzo, desde el seno mismo de las Fuerzas Armadas, para evitar que esta legitimación se produjera. Entre la captura de Guzmán (13.9.1992) y la elección del CCD (22.11.1992) hubo un intento de insurgencia democrática liderado por el general Jaime Salinas Sedó. El viernes 13 de noviembre, a nueve días de las elecciones, se notó en la capital un sorpresivo movimiento de tropas militares en los alrededores de Palacio de Gobierno. El 15 de ese mes, el entonces mandatario dio un

mensaje a la nación confirmando el abortado intento de insurgencia de la madrugada del 13. Aseguró que había habido un intento de asesinarlo y que los principales militares involucrados eran los generales Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Ernesto Obando, además de los oficiales Salvador Carmona, Raúl Montero y Marcos Zárate.

6.1. Detención de Guzmán y legitimación del autogolpe

La detención de Abimael Guzmán se dio en un contexto de aguda crisis política; no solo por el autogolpe del 5 de abril, con las consecuentes clausura del Congreso e intervención del Poder Judicial, sino porque al interior de la llamada clase política había un intenso debate entre la oposición y el oficialismo, respecto a las formas y condiciones necesarias para el retorno a la democracia. La convocatoria al Congreso Constituyente Democrático (CCD) y su posterior elección fue justamente un corolario de ese áspero debate. Cabe recordar que la presencia de la comunidad internacional, a través de diferentes representantes, era intensa; el secretario general de la OEA, el brasileño Joao Baena Suarez, y el representante de la OEA en el Perú, el uruguayo Héctor Gros Espiell, tenían importantes diferencias, en torno a cuán exigente debería ser la comunidad internacional con el gobierno de Fujimori. El uruguayo Gros Espiell fue especialmente complaciente con el gobierno golpista. La comunidad internacional, y en particular la OEA, había mostrado su reiterada incapacidad para encontrar una salida democrática al entrapamiento originado por el autogolpe y sobre todo para imponerle un camino democrático a Fujimori.

En este marco, la captura de Guzmán provoca un gran impacto político. Días antes Fujimori se había reunido con los ministros de Interior y Defensa, y con los altos mandos del ejército, para evaluar posibles nuevas oleadas de actos senderistas en la capital del país. Lima estaba regida por un toque de queda vehicular y se evaluaba su extensión al tránsito de peatones.

En el momento de la detención de Guzmán, y ante el jefe de la Dincote, sus palabras fueron “me tocó perder”. No era cualquier pérdida, como después se comprobó, sino el inicio definitivo de la derrota política y militar de Sendero Luminoso. Al día

siguiente, a través de la televisión, millones de peruanos pudieron ver a Guzmán y su entorno íntimo. El debate sobre el establecimiento de la pena de muerte se encendió. Ántero Flores Aráoz (PPC), Rafael Rey (Renovación) y Eduardo Calmell del Solar (Acción Popular) se inclinaban a favor de esta medida.

Fujimori se preocupó de que quedase claro ante la población que él había sido el artífice de la captura; esto, a pesar de las múltiples señales que indicaban que la Dincote —o sea la Policía especializada en la lucha antiterrorista— había actuado por su iniciativa, sin conocimiento del SIN ni de la Presidencia de la República. El 14 de setiembre, un día después de la detención de Guzmán, Fujimori echó más leña al fuego al señalar que había que estudiar la posibilidad de reimplantar la pena de muerte.

Como parte de la búsqueda de la paternidad de la captura de Guzmán, el columnista Mirko Lauer sostuvo que “todo indica que Fujimori no ve el éxito policial como el inicio de una nueva responsabilidad, sino como un golpe de suerte, que debe ser aprovechado al máximo y lo más rápido posible para sus propios fines” (*La República*, 17.9.10). Según Lauer “ha empezado a circular un argumento según el cual ahora que AGR ha caído, los partidos grandes del país tienen la obligación de participar en el CCD. Es un argumento sin pies ni cabeza, que parece postular que ya que la PNP apresó a Guzmán, los grandes partidos deben dejarse capturar por AFF” (*La República*, 17.9.10).

Además del efecto que Lauer reseña que tuvo la caída de Guzmán sobre los partidos políticos y, por supuesto, sobre el contexto de la convocatoria al CCD, hubo otros: Apoyo informó que como producto de la detención del jefe senderista el índice de confianza y la aprobación del Presidente se ha “disparado hasta un 74%” (21.9.1992). Con el propósito, además, de continuar la arremetida contra Sendero Luminoso, Fujimori pidió a las Fuerzas Armadas y a la policía dar la oportunidad a los que quisieran de acogerse a la ley de arrepentimiento antes de iniciarse el proceso judicial. Más aún, intentó comprometer a la Iglesia diciendo que “en cualquier lugar del Perú, el senderista arrepentido se entregará al párroco de una determinada localidad y como garante de tal entrega lo presentaría a la autoridad militar o policial más cercana”, figura no precisada en la ley mencionada.

Un informe de la encuestadora Apoyo, a propósito de la detención de Guzmán, publicado el 27 de setiembre señaló que 47% de los encuestados consideraban que ésta se debió al trabajo de la Dincote; 26% que se produjo por un ‘soplo’; y 12% que fue un golpe de suerte. Solo un 8% estaba de acuerdo con que se debía a la estrategia antisubversiva del gobierno. Por otro lado, y como muestra de que no todo era tan fácil para Fujimori, y de que el proceso de asimilación de este éxito debió ser inevitablemente gradual, 66% consideraba que el autogolpe del 5 de abril nada tenía que ver con el éxito obtenido con la captura, frente a 24% que pensaba lo contrario. Debe recordarse que la captura de Guzmán se produce, además, después de acontecimientos traumáticos como el coche bomba colocado por Sendero Luminoso en la calle Tarata, en el limeño distrito de Miraflores, y el secuestro y posterior desaparición de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad de La Cantuta, por agentes más tarde identificados como integrantes del Grupo Colina. Dicho de otro modo, la legitimación que la captura de Guzmán otorgó al régimen de Fujimori no fue inmediata sino un proceso gradual de asimilación. Esto en un contexto de extrema debilidad de los partidos políticos, sin capacidad de poner en crisis el autogolpe del 5 de abril y con una fuerza armada cuyos sectores institucionales hicieron su último gran esfuerzo, el 13 de noviembre de ese mismo año, con la frustrada insurgencia liderada por el general Jaime Salinas Sedó.

Los primeros días de octubre, Fujimori lanzó una fuerte campaña para que la ciudadanía identifique la captura de Guzmán con su gestión al mando del gobierno: el 2 de octubre visitó la isla San Lorenzo, donde el jefe de Sendero Luminoso estaba detenido y siendo juzgado. A los pocos días aseguró que el fuero militar lo sentenciaría a cadena perpetua por el delito de traición a la patria y que si el abogado apelaba, el Consejo de Guerra emitiría en 48 horas una sentencia, y si existiera una nueva apelación, el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) haría lo propio y de manera definitiva en un plazo de tres días. Y efectivamente, el 14 de octubre, el CSJM ratificó, sin respetar el debido proceso, la cadena perpetua para Guzmán. Fujimori criticó a Amnistía Internacional por alegar que el detenido no gozaba de las garantías suficientes e incluso provocó una declaración de Mario Vargas Llosa en el sentido de que se resistía a creer que Fujimori estaba utilizando la captura de Abimael Guzmán con fines político-personales. Arreciando la campaña, a los pocos

días anunció que el Perú renunciaría al Tratado de San José de Costa Rica con el objetivo de reimplantar la pena de muerte en el país, y que sería una propuesta que su gobierno presentaría ante el CCD. Denunció, además, en esos mismos días, que había una poderosa infiltración senderista en el magisterio y que promulgaría nuevas medidas legales para acrecentar la represión contra el terrorismo.

Antes de que octubre concluyese, y creando un clima de ofensiva contra Sendero Luminoso, anunció que su gobierno entregaría diez mil escopetas a las rondas campesinas y a los comités de autodefensa de la sierra y de la ceja de selva. En ese marco, el 28 de octubre declaró en Huayllao (Ayacucho) que esa localidad era el “símbolo viviente de la lucha antisubversiva” y emplazó a las organizaciones de derechos humanos a no ser “tontos útiles ni cómplices del accionar subversivo al defender los derechos de quienes asesinan sin contemplaciones a miles de inocentes”⁶⁷

6.2. Convocatoria al Congreso Constituyente Democrático

Después de que Fujimori confirmara la convocatoria al CCD en su discurso del 28 de julio de 1992, los partidos se dividieron frente a la posibilidad de participar. Organizaciones de izquierda como el PUM y UNIR, y de centro derecha como Acción Popular, se pronunciaron en contra de seguir concurriendo a los diálogos preparatorios con representantes del gobierno; mientras tanto, representantes del APRA, el PPC, el Movimiento Libertad, Acción Política Socialista y el SODE optaron por una posición más cauta y señalaron que sus respectivos partidos deberían pronunciarse orgánicamente.

⁶⁷ “Sin embargo, los años de gobierno del presidente Fujimori fueron también aquéllos en que las organizaciones subversivas sufrieron una derrota estratégica. La captura de sus más altos jefes y la destrucción de sus organismos de dirección fueron los hechos más ostensibles de esa derrota. El triunfo sobre la subversión, traducido en una sensación colectiva de seguridad y orden después del caos, fue uno de los principales factores de la aceptación ciudadana de la que gozó el gobierno a pesar de los atropellos ya mencionados. El propio gobierno y, de manera señalada, el asesor presidencial Vladimiro Montesinos se encargaron de montar tácticas de propaganda en las que se atribuían a sí mismos, al Servicio de Inteligencia Nacional y a las Fuerzas Armadas el mérito de la victoria sobre el PCP-SL y el MRTA, y sustentaban en ese mérito su legitimidad, a despecho de numerosas ilegalidades patentes (Reátegui 2009: 153).

En la misma semana, catorce organizaciones políticas emitieron un pronunciamiento negándose al diálogo planteado por el gobierno. Los firmantes eran organizaciones de izquierda, el partido aprista y organizaciones de derecha como el Movimiento Libertad y el PPC. El tira y afloja entre la oposición y el gobierno, y entre los partidos proclives a participar, los que vacilaban y los que se negaban a hacerlo, continuó durante los siguientes días. El 22 de agosto se promulgó y publicó la ley de elecciones para el CCD. Era sin duda consecuencia de una negociación principalmente con la comunidad internacional. Se precisaba en la convocatoria que se elegiría por voto universal directo, secreto y obligatorio; que se instalaría el 30 de diciembre y tendría vigencia hasta el 28 de julio de 1995. Tendría funciones constituyentes, legislativas y de fiscalización.

Se formalizó, además, que la Constitución aprobada por el CCD sería posteriormente materia de una consulta vía referéndum. En aras de seguir consolidando su vínculo directo con la población, Fujimori insistió en que debía haber una ratificación popular, más allá de la opinión y la aprobación que los partidos políticos hicieran de la nueva Carta Magna.

Finalmente se produjo la elección y se confirmó la división al interior de la oposición. Quedaron fuera de la contienda el partido aprista y la mayoría de los partidos que habían constituido la Izquierda Unida. El resultado fue un triunfo rotundo de Nueva Mayoría-Cambio 90, que conquistó el 49,2% de los votos válidos, lo que le permitió obtener una mayoría absoluta en el elegido CCD⁶⁸. La derecha no fujimorista, representada por el PPC (9,8%) y Renovación (7,1%), ocupó los siguientes lugares. Era clara, pues, la hegemonía de la opinión neoliberal. El MDI, que representaba a un sector de la izquierda, liderado por Henry Pease, obtuvo un escaso 5,5%. Es necesario señalar que los votos nulos se acercaron al 20% y los blancos estuvieron en el orden del 4%; ambas opciones representaron mayoritariamente el voto del APRA, los partidos de izquierda y sectores independientes no fujimoristas. Los votos emitidos

⁶⁸ Cambio 90 fue desactivado después de las elecciones de 1990 y nunca tuvo vida orgánica. Nueva Mayoría fue solo una sigla para presentarse al CCD y posteriormente a las elecciones de 1995.

alcanzaron el 71,3% del electorado, lo que mal que bien y a pesar de que si se suman los ausentes a los votos nulos y blancos, el porcentaje superaba el 50%, la elección del CCD, sirvió para dar un paso decisivo en favor de la legitimidad del gobierno golpista, sobre todo cuando esta elección se produjo solo semanas después de la decisiva detención del jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Se había producido, pues, en solo dos años, un radical reordenamiento de las fuerzas políticas, sobre todo debido al surgimiento y la consolidación de la representación fujimorista, encarnada ahora en la alianza Nueva Mayoría-Cambio 90. Como presidente del CCD fue elegido el hasta entonces ministro de Energía y Minas, Jaime Yoshiyama. Se había iniciado también, de esta manera, el camino para reformar la Constitución y establecer una nueva en relación a asuntos tan decisivos como el nuevo papel del estado, el rol decisivo del mercado y de la inversión privada, los trabajadores y sus derechos laborales, y la consolidación de la figura presidencial. Es cierto también que la nueva Constitución vino acompañada de algunas instituciones democráticas interesantes, como la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de la Magistratura.

Al haber abortado el intento de insurgencia liderado por el general Jaime Salinas Sedó, la elección del CCD representó el fin de una breve pero decisiva etapa de consolidación del nuevo fujimorismo, surgido orgánicamente después del autogolpe.

6.3. La frustrada insurgencia institucionalista

Después de haber estado a punto de refugiarse en la embajada de Japón, durante las horas de riesgo de un golpe contra su gobierno, Fujimori se apresuró a denunciar a los insurgentes y a declarar que el movimiento político-militar que alentó estas acciones tenía como propósito impedir las elecciones al Congreso Constituyente Democrático. Esta última afirmación es cierta, pues los insurgentes repararon con certeza que la elección del CCD, más aún después de la captura de AGR, significaría un paso decisivo en la legitimación del régimen de Fujimori. Como se ha visto, no es que desde el 5 de abril de 1992 hasta la convocatoria del CCD Fujimori las tuvo todas consigo; hubo circunstancias en las que su poder flaqueó, pero pudo reconstituirlo y fortalecerlo no solo debido a la debilidad de la oposición y a la adhesión que despertaba su figura, sino también a éxitos como la detención de Guzmán.

Como respuesta a la insurgencia frustrada, el 15 de noviembre los altos mandos de las Fuerzas Armadas manifestaron su lealtad al presidente de la República y al comandante general, Nicolás de Bari Hermoza Ríos. El vínculo entre Fujimori y los militares se convalidaba. Si ya se habían hecho necesarios antes del autogolpe, fueron indispensables y se sellaron con aire de triunfo con los golpes a Sendero Luminoso, a pesar de que el éxito de detener a Guzmán lo había conseguido la policía. En diciembre, medios de comunicación informaron que se iniciaría una purga al interior de las Fuerzas Armadas a raíz de la acción impulsada por Salinas Sedó.

En este mismo mes, Fujimori, en el marco de la instalación del CCD, empezó su campaña por la reelección. En apoyo a esta iniciativa, el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Picasso, propuso, a nombre de la Confiep, que el flamante CCD contemplase la reelección inmediata. Jorge Yoshiyama, cabeza de la lista oficialista triunfadora, saludó el planteamiento y sostuvo que éste recogía el sentimiento de la mayoría de la población.

El 19 de diciembre, día del Ejército, Fujimori señaló que el 5 de abril sería recordado “como la fecha en que el presidente, con apoyo de las Fuerzas Armadas, la policía nacional y el pueblo en general impidió que el terrorismo destruya el país”. Ratificaba así que el eje central de su legitimidad política radicaba en el “encargo dictatorial” que la población le había encomendado para acabar con Sendero Luminoso y el MRTA. Por eso, aunque resulte aparentemente contradictorio, y poniendo en evidencia la situación de excepcionalidad que se vivía en el país, mientras el “golpismo” en general era rechazado en todos los sectores sociales limeños (entre 75% y 86% en los sectores B y A respectivamente), 64% aprobaba la gestión de Fujimori.

En los días finales de diciembre de 1992, año del autogolpe, destacaron tres circunstancias: el mantenimiento de la atención en el ámbito de la violencia política (con el asesinato del secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Pedro Huilca), la decisión de Fujimori de construir un triángulo de gobierno con Montesinos y Hermoza Ríos (a pesar de corresponderle a este último retiro) y, como corolario, la instalación del CCD el 30 de diciembre.

CONCLUSIONES

1. Ninguno de los partidos políticos con protagonismo nacional en la década de 1980 terminó el año 1992 en las mismas condiciones en que había ingresado al inicio del período fujimorista (1990). Ninguno fue indemne a los cambios que motivaron los dos primeros años de gobierno de Fujimori, tanto en su organización como en su representación, protagonismo, programa político e ideología.

El APRA inició definitivamente su proceso de transformación de una organización con características cercanas a la socialdemocracia —que había levantado a inicios de 1985 un programa reformista radical— en una organización que se adhería decididamente a los postulados del neoliberalismo. Aunque sufrió hostigamiento político de parte del fujimorismo, sobre todo durante la coyuntura del autogolpe de abril de 1992, en los meses previos no solo llegó a acuerdos con Fujimori para salvar al expresidente Alan García de acusaciones constitucionales, sino que además apoyó, desde el Congreso, gran parte de las reformas económicas que desde el gobierno fue aplicando gradualmente el nuevo régimen.

El APRA fue parte, sin duda, de la oposición política al gobierno, sobre todo después del autogolpe; sin embargo, hizo claras concesiones constitucionales a las modificaciones en los ámbitos de la economía, en especial en cuanto a la relación entre el Estado y la inversión privada, y entre el capital y los trabajadores.

La izquierda dejó de existir políticamente. Así de concreto. Este es el cambio más dramático que se produjo, en los dos años estudiados, en cuanto a representación política en el país. Es cierto que la izquierda se presentó ya dividida en las elecciones

de 1990 (candidaturas de Henry Pease, por Izquierda Unida, y de Alfonso Barrantes, por Izquierda Socialista); sin embargo, a pesar de esta división, en conjunto alcanzó más del 12% de los votos del país. Entre 1990 y diciembre de 1992 estas dos representaciones de la izquierda habían visto debilitar sustantivamente su relación con el movimiento sindical y gremial popular, así como habían sido desplazadas por el fujimorismo. Esto fue clave, como fuerzas de cambio, de sus principales bastiones electorales en Lima y en las provincias, en especial en las que tuvo hegemonía durante aproximadamente diez años.

Los partidos de la derecha “tradicional” se debilitaron sustancialmente: Acción Popular se transformó en un representante de minorías y en una fuerza estrictamente marginal. El Partido Popular Cristiano siguió sosteniendo, aunque de manera mermada, una presencia política en Lima; en el resto del país siguió siendo prácticamente inexistente. El hecho más importante fue, sin embargo, el quiebre de la relación orgánica de los empresarios y de los sectores adinerados con estas dos organizaciones políticas.

El fujimorismo no solo le birló su representación social a la izquierda, sino que se afianzó, simultáneamente, como el representante más decidido de la derecha empresarial y limeña (y posteriormente de la transnacional).

La agrupación formada por Mario Vargas Llosa, el Movimiento Libertad, perdió protagonismo rápidamente luego de su derrota en 1990. Sufrió continuas deserciones y su máximo líder se vio crecientemente aislado y distante de los sectores políticos y sociales que habían sostenido su candidatura presidencial. La persistente posición antiautoritaria y antidictatorial de MVLL produjo un quiebre con sus pragmáticos sostenedores de antes. Estos hicieron todos los esfuerzos por acallar las críticas, de su antiguo candidato presidencial, contra la dictadura de Fujimori.

La derecha política aceptó el conjunto del modelo económico neoliberal. Se distinguió de Fujimori solo en algunos aspectos de su autoritarismo, en particular en relación con el Congreso y su posterior clausura. Este agrupamiento estaba escindido y su base social “natural” y tradicional miraba ahora al fujimorismo. La derecha

política reclamaba como suyo el programa económico y no tenía la fuerza ni la convicción necesarias para enfrentar la arremetida autoritaria. Debe sí señalarse que MVLL se distinguió por la rudeza de sus críticas contra la prepotencia autoritaria de Alberto Fujimori antes y después del autogolpe.

El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, también fue derrotado en este breve lapso, aunque su fracaso estratégico comenzó a encubarse desde fines del gobierno de Alan García. Su líder máximo, Abimael Guzmán, y varios de sus principales dirigentes nacionales, fueron detenidos en contados meses, después del golpe. Políticamente, se incrementó su aislamiento político en las zonas rurales; y en el ámbito militar, fue derrotado en algunas de sus áreas de mayor actividad, como las provincias de la ceja de selva en las que tenía una fuerte presencia, no pudiendo mantener la ofensiva estratégica que Guzmán y la dirección nacional habían propuesto. En escasos meses, SL se desarticuló orgánica y sobre todo políticamente.

La detención de Guzmán fue, además, un gran triunfo político para Fujimori y allanó el camino para que el gobierno pregonara que se había puesto *orden* en el país. La derrota de SL resultó también una justificación indirecta, pero decisiva, a la disposición de organizar y ejecutar el autogolpe.

En síntesis, Alberto Fujimori y su gobierno lograron victorias frente a los más diversos sectores políticos, desde la derecha en todas sus variantes, el centro político (representado por el APRA), y depredó las bases sociales y la representación de los principales agrupamientos de la izquierda. La derrota de SL, aunque se produjo bajo una modalidad particular por el hecho de que éste había iniciado un enfrentamiento armado, constituyó una victoria política de primer orden para Fujimori. Se confirmó en grandes sectores de la opinión pública la idea de que los partidos políticos “tradicionales” eran intrascendentes y de que más valía consolidar la práctica del “partido de la nación”.

2. Alberto Fujimori reconstituyó el Estado peruano sobre dos grandes pilares, que a su vez constituyeron las bases de su nueva legitimidad: la nueva economía —el llamado “modelo neoliberal”— fue tan importante, tan sustantiva en el cambio que se produjo entre el Estado, la economía, la sociedad y los ciudadanos, que sirvió

como legitimidad fundamental del Estado reformado. El Estado peruano, desde ese momento hasta la actualidad, tiene como uno de sus dos pilares insustituibles la economía liberal; y no es gratuito que, transcurridos más de trece años del abandono del poder por Alberto Fujimori, los tres gobiernos democráticos que lo sucedieron se han subordinado —o, si se quiere, adecuado— a ese modelo. La oposición centrista y nacionalista, encarnada, en su momento, por Alejandro Toledo, y más tarde por Ollanta Humala, no han tenido la fuerza suficiente —y no solo la voluntad— para construir una nueva legitimidad para el Estado fuera de los cánones del neoliberalismo.

El segundo pilar de la reconstitución del Estado es el autoritarismo, entendido no solo como el uso de la violencia y de una conducción vertical y personalista del Estado, sino como el recurso permanente a la excepcionalidad como razón, excusa o fuente del orden estatal y social. De manera sistemática, el autoritarismo y la excepcionalidad han también sido aceptados y practicados por los tres gobiernos elegidos democráticamente que han sucedido al fujimorismo. Baste con revisar el uso de la fuerza en los conflictos sociales y el número de personas muertas o heridas que estos conflictos trajeron como consecuencia; más aún, cómo la derecha económica, política y mediática logra arrinconar rápidamente a los gobiernos de turno ante situaciones de tensión, induciendo a reeditar la excepcionalidad a menudo con la excusa de que detrás de toda protesta se encuentra la subversión, encarnada en Sendero Luminoso, en el nacionalismo humanista (cuando era oposición), y ahora en el Movadef e incluso en Patria Roja.

Las Fuerzas Armadas, que fueron aliadas del régimen de Alberto Fujimori y que, por su antiguo apoyo, formaron parte central del proceso de reordenamiento neoliberal del Estado, a cambio de una mayor autonomía en el conflicto armado interno, perdieron poder después de la caída de Fujimori, sin que esto haya significado su presencia permanente como soporte final del constante reflejo de los gobiernos de gobernar bajo formas excepcionales.

3. Alberto Fujimori instala la idea de que los partidos políticos no solo “partían”, dividían, el país sino que además eran agrupamientos que sometían los intereses

públicos a sus intereses privados. Las organizaciones políticas aparecían como fuerzas depredadoras del Estado y de la sociedad. No representaban a una parte en función del todo. Fujimori se preocupó desde un inicio por insistir en este hecho y consiguió su propósito. Se ahondó la crisis entre los partidos y sus representados. Frente a este drama de representación, en el que los “depredadores” habían perdido la confianza y la credibilidad de la mayoría de los peruanos porque habían resultado ineficaces para controlar la crisis económica y derrotar a SL, el fujimorismo fue intuitiva y gradualmente sugiriendo la necesidad, como diría Sartori, de un partido premoderno, un “partido de la nación”. Se requería una fuerza social y política unificada, bajo un solo mando, sin divisiones ni fisuras, para ser eficiente y conquistar la victoria.

El discurso antipartido de Fujimori fue implícitamente una propuesta de constitución de un frente único nacional contra la crisis económica, en pro de la derrota de SL y por la instalación de un nuevo modelo de relación entre el estado y la economía. Este “partido de la nación” tuvo diferentes manifestaciones durante los primeros años del gobierno. Se inició con la modalidad de una alianza amplia que incluía sectores de la izquierda democrática; y viró posteriormente hacia una clara alianza con los tecnócratas neoliberales, las multinacionales, el capital transnacional, los militares y la opinión favorable de la mayoría de los peruanos.

Era un “partido de la nación” no nacionalista; incluyente para quienes estaban de acuerdo con su propuesta, sumamente pragmático, no se preguntaba sobre la historia política de quienes se le adherían; se les pedía, eso sí, fidelidad y obsecuencia. Este agrupamiento político fue bastante más fuerte y representativa que las agrupaciones políticas electorales que formó el oficialismo: Cambio 90 y después Nueva Mayoría-Cambio 90. Se apropió de la ilusión de conquistar el orden y modernizar el país de manera conservadora, vía un camino autoritario, el ingreso masivo del capital extranjero —como fuente para el crecimiento— y la subordinación flagrante del Estado a la economía y una consiguiente reducción sustantiva de su protagonismo a un papel estrictamente subsidiario.

Constituido como un amplio agrupamiento o bloque social, político y económico, sentó las bases para la hegemonía de un nuevo sentido común en el país y para que se

estableciera como único norte posible la organización de una economía bajo los mandatos del modelo neoliberal.

4. Durante los dos años primeros años del gobierno de Fujimori, las organizaciones sindicales, a pesar de venir de una larga crisis económica que los había debilitado, como producto sobre todo de la modificación sustantiva de la estructura del empleo, en particular entre los años 1987-1988, dieron una dura batalla por la preservación de sus derechos labores; pero fueron derrotadas.

Basta recordar las prolongadas huelgas indefinidas de la Central Intersindical de Trabajadores Estatales (CITE) y del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) para recordar cómo, a pesar de la dureza de la confrontación y de la intransigencia de su lucha, sus demandas fueron crecientemente aisladas de la población y cómo su modalidad principal de lucha, la huelga indefinida, dejó de ser un mecanismo que comprometía la estructura del poder político y el tipo de régimen que Fujimori instaló. Como consecuencia su poder se debilitó drásticamente. Los miles de trabajadores movilizados en las calles de Lima y en las principales ciudades del país no tuvieron fuerza para modificar el rumbo adoptado por el gobierno ni para preservar derechos elementales como la estabilidad laboral, la negociación colectiva y el propio derecho a la huelga, que aunque no fue derogado formalmente, sufrió restricciones.

El debilitamiento de los gremios de trabajadores y de sus centrales sindicales fue simultáneo a la reducción de la representación y movilización de los frentes de defensa y de los diferentes agrupamientos regionales. En escasos meses los movimientos regionales de protesta fueron objeto no solo de condena sino de escasa credibilidad. En ese contexto, las principales representaciones gremiales del movimiento campesino perdieron toda vigencia. Se siguieron pronunciando contra la política del gobierno; llamaron a movilizaciones y plantearon propuestas contra el modelo neoliberal y la creciente estructura autoritaria; sin embargo, su fuerza de representación se fue diluyendo hasta prácticamente desaparecer.

5. La relación entre la economía y el Estado cambió sustantivamente. El Estado privatizó sus principales propiedades en servicios, minería y petróleo. Ingresó capital

transnacional. Sinesio López (1994) hace un apunte acertado cuando considera que en ese periodo se produjo una verdadera revolución con relación al lugar y el papel del Estado “dentro de la matriz sociopolítica del Perú”. Esta modificación tendría como origen tres cambios fundamentales: se rompió la matriz estadocéntrica del ordenamiento social; se autonomizó “en forma relativa a la sociedad civil” —en particular, el mercado y la economía— con relación al Estado y los partidos políticos; y se resquebrajó su anterior competencia integradora al someter el Estado a las leyes del mercado, convertidas en las nuevas instituciones bases del ordenamiento social y de la economía.

La burguesía peruana se mostró incapaz de liderar el proceso de cambio del modelo y dejó de controlar los sectores financieros, de seguros e industriales. Hubo excepciones como el caso del grupo Romero y el grupo Brescia. La composición general de los “nuevos dueños” del Perú empezó a modificarse sustantivamente en esos dos primeros años, en especial a partir del ingreso, en febrero de 1991, de Carlos Boloña como ministro de Economía y Finanzas, y del consiguiente inicio de los procesos de privatización, flexibilización laboral, reforma del sistema financiero y promoción del ingreso de la inversión extranjera. Se sentaron así las sólidas bases para la constitución de un nuevo modelo económico: a). una diferente relación entre los actores económicos principales y entre el mercado y el estado, b). la economía como verdadera legitimadora del estado, y c). la relación del estado con los ciudadanos siendo percibidos estos sobre todo como consumidores.

El segundo semestre de 1991 el estado modificó también, y consecuente, su papel tuitivo en la relación entre el capital y el trabajo. El gobierno, con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, decide que el estado reduzca al mínimo su intervención en las relaciones entre el capital y los trabajadores, dejándolas a las leyes de oferta y demanda laboral.

6. El país vivió una situación de emergencia (o régimen de excepción) desde 1983, cuando se le encomendó el orden interno a las Fuerzas Armadas en regiones enteras del país, sobre todo por la presencia y actividad de Sendero Luminoso. Como es sabido, en estos regímenes el gobierno se reserva el poder de restringir o suspender el ejercicio de determinados derechos y garantías ciudadanas, y esto ocurrió en el Perú.

Diego García Sayán señaló acertadamente, a propósito de un estudio en la región andina, que “los antecedentes en el Perú de los estados de excepción permiten notar cómo muchas veces ellos estuvieron acompañados de la extensión de la jurisdicción militar sobre la población civil” (García Sayán 1987: 111). En 1990, año del inicio del gobierno de Alberto Fujimori, el 45.18% de la población se encontraba bajo estado de emergencia. Los comandos político-militares habían ido ampliando, en el transcurso de cerca de veinte años, sus espacios de control sobre el Estado, la población y el territorio. Incluso para finales de 1996, a pesar de que la captura de Abimael Guzmán se había producido hacia cuatro años, se mantenían en estado de emergencia 36 provincias de 11 departamentos del Perú, un 16% del territorio, como una forma de gobernar vía la excepción.

7. Para una gran mayoría de peruanos, el tipo de gobierno que emergió del autogolpe del 5 de abril de 1992 tuvo algunos de los rasgos centrales de lo que Carl Schmitt denomina una dictadura comisarial. El pensamiento de Schmitt ayuda a entender la aparente contradicción que en 1992 se produjo en la población peruana, cuando ésta afirmaba preferir la democracia y, simultáneamente, declaraban su mayoritaria aprobación del golpe de Estado. No se trata, en este caso particular, de calificar la actitud o la intención de Fujimori y los golpistas, pues no es que tuvieran necesariamente, en un inicio, la decisión de convertirse en un dictador transitorio, sino de comprender por qué la mayoría de los peruanos apoyaron una decisión abiertamente dictatorial a pesar de decir preferir como régimen a la democracia.

En el caso peruano, en 1992 se dan dos fenómenos que obligan a matizar el análisis: Fujimori no pretendía defender la Constitución vigente desde 1979, como se comprobó posteriormente con la aprobación de una nueva en 1993, que transformó sustantivamente la anterior; pero sí convalidó su iniciativa golpista en la defensa de la democracia y de determinados valores establecidos en la cultura política peruana, aunque tengan en algunos casos contenidos meramente formales, como la patria, la familia, la defensa de la propiedad, la religión, y las libertades de opinión, de expresión y de elección (y en general los derechos individuales). No puede olvidarse que Sendero aparecía como una amenaza dictatorial extrema, totalitaria, que causaba un gran temor e incertidumbre efectiva en la mayoría de los peruanos.

El fujimorismo, siguiendo a Schmitt, sería fundamentalmente una dictadura comisarial; pero con algunos rasgos de lo que este mismo autor define como “dictadura constituyente”, pues se arrogó la voluntad de destruir el anterior sistema constitucional para imponer uno nuevo que incluyera sustantivos cambios respecto a la propiedad y a la relación entre el estado y la economía.

8. El fujimorismo impulsó simultáneamente la construcción del “partido de la nación” y la encarnación de ese esfuerzo en el nuevo caudillo, Alberto Fujimori. El mandatario trabajó explícitamente por construir ese nuevo orden económico, social y político; y al mismo tiempo preservó, como líder, un espacio de poder propio, personalizado, frente a las presiones de los sectores empresariales y del gran capital en general. Su gobierno actuó a favor y sentó las bases del nuevo modelo económico pero no necesariamente consultó a los empresarios favorecidos las medidas que adoptaría. Fujimori creó un espacio de poder de difícil acceso en aras de no perder libertad de movimiento y capacidad de iniciativa. Esta circunstancia le permitió, entre otros factores, la constitución dentro del gobierno de un aparato mafioso, de robo sistemático de los recursos públicos. Durante los primeros dos años, sin embargo, esta peculiaridad del régimen aún no se había desarrollado, por lo menos en la dimensión que alcanzó la corrupción posteriormente y que comenzó con los recursos obtenidos de las primeras privatizaciones.

No es gratuito que Fujimori no tenga como principal base de poder a los dirigentes de su partido ni al grupo íntimo familiar, ni siquiera a un grupo de empresarios privilegiados, sino al Servicio de Inteligencia Nacional, en particular a Vladimiro Montesinos. La estructura de poder autoritario requirió preservar un espacio de poder específico para tomar decisiones por fuera de los grandes *lobbies* nacionales, no tanto así de los internacionales. Los creadores iniciales del movimiento perdieron fuerza y se fue constituyendo gradualmente una instancia de poder autoritaria dentro del gobierno, que adquirirá forma final en la relación que se estableció entre Fujimori como presidente de la república, el comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza, y el asesor Montesinos. Finalmente, se dio forma al poder mafioso y a la agenda propia de un pequeño grupo de marginales y arribistas que llegaron a acceder al poder y a capturarlo por completo.

9. En el momento del autogolpe de 1992, el gobierno de Alberto Fujimori logró imponer una sólida correlación de apoyo nacional contra el rechazo que pudo tener entre los países de la OEA e incluso de Canadá. La relación entre el fujimorismo y la comunidad internacional y, en particular, los Estados Unidos no fue siempre de perfecta sintonía. Más aun dentro de los Estados Unidos las distintas agencias no actuaron al unísono. No se puede afirmar que Fujimori fue un simple peón de los representantes del Consenso de Washington con el objetivo de imponer el modelo neoliberal. Los proyectos pragmáticos y mafiosos capturan el Estado desde adentro —este fue el caso de Alberto Fujimori y su entorno más íntimo— y tienen su propia y patrimonialista agenda. La construcción de una corriente de opinión a favor de este modelo se inició en el Perú desde antes de que ganara las elecciones en 1990. Mario Vargas Llosa fue uno de sus principales propugnadores; pero además y desde antes diarios como *Expresso* dieron una persistente batalla ideológica a favor de este proyecto y contra el llamado populismo del gobierno de Alan García. Hubo, pues, poderosas fuerzas nacionales que indujeron a este cambio. Posteriormente, con Fujimori en el gobierno, cuando acepta aplicar el “ajuste” y las “reformas estructurales” promovidas por las multilaterales, recibió el apoyo abierto y directo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pero esta política no se hubiera sostenido, con la crudeza con la que se aplicó, si no hubiera habido una opinión pública favorable y un sólido espacio social que la sostuviese.

Una dinámica semejante hubo en torno al autogolpe del 5 de abril. La decisión del autogolpe fue interna, al margen de que pudo ser de conocimiento de agencias de inteligencia extranjeras. Nació y se cristalizó en la relación de Fujimori, Montesinos y la cúpula de las Fuerzas Armadas. La justificación —sobre todo pública— fue la urgencia de derrotar a SL; pero hubo otras razones también importantes, como que el gobierno requería que se expresara la nueva correlación que se había constituido en esos escasos dos años, radicalmente distinta a la de 1990. Algo más: el núcleo de poder requería un espacio fuera de todo control, para adoptar decisiones que contara con legitimidad pública, pero inconstitucionales, como las referidas a la lucha contra SL y la legislación antiterrorista en general. Para este núcleo de poder era indispensable blindar con la inmunidad e impunidad —tal como lo reclamaban— a los que conducían la lucha antisubversiva.

Esta misma amplitud de poder requirió el gobierno de Fujimori para aplicar medidas económicas, sobre todo las vinculadas a las privatizaciones. El gobierno necesitaba un espacio fuera del control fiscalizador que, con todas sus falencias y vacilaciones, expresaba el Congreso elegido en 1990. Así, la elección del Congreso Constituyente Democrático, como producto de una prolongada negociación sobre todo con la comunidad internacional (las fuerzas políticas internas peruanas no hubieran tenido capacidad para imponerlo) expresó la nueva distribución y representación de fuerzas en el país. Convertido el fujimorismo en mayoría absoluta, tenía las manos libres para actuar como una cúpula cerrada, en el contexto de un gobierno que, al filo de la ilegalidad, tuvo el aval de la comunidad internacional y de un posterior proceso electoral.

10. La contrainsurgencia sin subversión armada —o con esta en franca situación de derrota— se convirtió concluido el año 1992, en una política sistemática y de larga duración, que de alguna manera tiñe incluso la primera década de este siglo como demostración de que los efectos de la guerra interna y del fujimorismo no han concluido. El estado de emergencia o de excepción, no solo sin subversión armada, sino también sin comandos político militares, se hizo una forma explícita o implícita de gobernar. El tipo de manejo de los conflictos sociales, sobre todo de los vinculados a las industrias extractivas, ha sido una ejemplar manifestación de esta herencia aún no superada.

BIBLIOGRAFÍA

AGAMBEN, Giorgio (2001). *Medios sin fin. Notas sobre la política*. Valencia: Pre-Textos.

AMES Rolando y otros (1993). Fujimori: autoritarismo fácil, difícil modernización. Lima: *Cuestión de Estado* 1, pp.19-31

ARENDT, Hannah (1998). *Crisis de la República*. España: Taurus.

ARENDT, Hannah (1997). *¿Qué es la política?* Barcelona: Paidós.

ARISTÓTELES (2009) [s.IV a.C.]. *Retórica*. Madrid: Alianza Editorial.

BARNECHEA, Alfredo (1995). *La república embrujada*. Lima: Santillana.

BOBBIO, Norberto (2005). *El futuro de la democracia*. México DF: Fondo de Cultura Económica.

BOBBIO, Norberto; Nicola MATTEUCCI y Gianfranco PASQUINO (2008). *Diccionario de política*. México DF: Siglo XXI

BURT, Jo-Marie (2009). *Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

COMISIÓN PERMANENTE DE HISTORIA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ (2010). *En honor a la verdad*. Lima.

COTLER, Julio (1993). *Descomposición política y autoritarismo en el Perú*, Documento de trabajo 51, Serie Sociología y política 7. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

COTLER, Julio (2009). *Clases, Estado y nación*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

COTLER, Julio; Grompone, Romeo (2001) *El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

CRABTREE, John (1999). *Neopopulismo y el fenómeno Fujimori, el Perú de Fujimori*. Lima: Universidad del Pacífico.

CRABTREE, John (2005). *Alan García en el poder*. Lima: Peisa.

CVR, COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS (1993). *Del golpe de Estado a la nueva Constitución*. Lima.

CVR, COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN (2003). *Informe final*. Lima.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN (2004). *Hatun willakuy, versión abreviada del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación*. Lima: CVR.

DE ALTHAUS, Jaime (2007). *La revolución capitalista en el Perú*. Lima: Fondo de Cultura Económica.

DEGREGORI, Carlos Iván (2000). *La década de la antipolítica: auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

DEGREGORI, Carlos Iván (2010). *El surgimiento de Sendero Luminoso, Ayacucho 1969-1979*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

DEGREGORI, Carlos Iván; Grompone, Romeo (1991). *Elecciones 1990 demonios y redentores en el nuevo Perú una tragedia en dos vueltas*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

DELICH, Francisco (1977). Para el análisis de los fenómenos sociopolíticos coyunturales. Premisas y perspectivas. *Debates en Sociología* 1, Lima.

DURAND, Francisco (2003). *Riqueza económica y pobreza política, Reflexiones sobre las elites del poder en un país inestable*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.

EGUIGUREN, Francisco (1986). Defensa nacional, estados de excepción y control del orden interno en la Constitución peruana de 1979. *Defensa Nacional* 6, pp. 25-37.

EGUIGUREN, Francisco (1990). *Los retos de una democracia insuficiente: diez años de régimen constitucional en el Perú (1980-1990)*. Lima: Comisión Andina de Juristas.

FLORES GALINDO, Alberto (1999). *La tradición autoritaria*. Lima: Aprodeh.

FOUCAULT, Michel (2008). *Nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

FUJIMORI, Alberto (1990). Mensaje a la Nación, 28 de julio de 1990. Lima: Congreso de la República. Disponible en <<http://www.congreso.gob.pe/museo/mensajes/Mensaje-1990-2.pdf>>.

GARCÍA SAYÁN, Diego (editor) (1987). *Estados de emergencia en la región andina*. Lima: Comisión Andina de Juristas.

GONZALES de Olarte, Efraín (1994). *Una economía bajo violencia: Perú, 1980-1990*. Documento de Trabajo 40. Lima: Instituto de Estudios Peruano.

GONZALES OJEDA, Magdiel (1991). *La excepcionalidad en la Constitución. Los estados de excepción y los derechos humanos en la legislación peruana*. Arequipa: LF Lann.

GONZÁLEZ González, Miguel Ángel (2004). *El Perú bajo Fujimori: alumbramiento, auge y ocaso de una dictadura peruana*. Memoria para optar al grado de doctor. Madrid: Universidad Complutense de Madrid

GORRITI, Gustavo (1991). *Sendero: historia de la guerra milenaria en el Perú*. Lima: Apoyo.

GROMPONE, Romeo (1998). *Fujimori, neopopulismo y comunicación política*. Documento de Trabajo 93. Lima: Instituto de Estudios Peruanos

HIRSCHMAN, Albert (1999). *Las pasiones y los intereses. Argumentos políticos a favor del capitalismo antes de su triunfo*. Barcelona: Ediciones Península.

INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD-IPYS (1994). *Prensa y Justicia en una sociedad en conflicto*. Lima: IPYS.

KENNEY, Charles (1997). ¿Por qué el autogolpe? Fujimori y el Congreso 1990-1992, en Fernando Tuesta (editor), *Los enigmas del poder: Fujimori 1990-1996*. Lima: Friedrich Ebert.

LENIN, Vladimir I. [1915]. *La bancarrota de la II Internacional*. Disponible en <<http://pintxogorria.net/index.php/marxismo-a-debate/el-marxismo-a-debate/1042-analisis-leninista-de-una-situacion-revolucionaria>>.

LOAYZA Galván, Francisco (1998). *El rostro oscuro del poder*. Lima: San Borja Ediciones.

LÓPEZ, Sinesio (1979). El análisis de coyuntura en el pensamiento socialista clásico. *Revista Mexicana de Sociología*, 41(1), Análisis de Coyuntura.

LÓPEZ, Sinesio (1994). “Los partidos políticos: crisis, renovación y refundación”. *Cuestión de Estado* 7, año 2. Lima.

LYNCH, Nicolás (1999a). *Una tragedia sin héroes. La derrota de los partidos y el origen de los independientes. Perú 1980-1992*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

LYNCH, Nicolás (1999b). Neopopulismo, un concepto vacío. *Socialismo y Participación* 86. Lima.

MARX, Carlos (1968). *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*. Madrid: Ediciones Halcón.

MEIER, Heinrich (2008). *Carl Schmitt, Leo Strauss y El concepto de lo político. Sobre un diálogo entre ausentes*. Madrid y Buenos Aires: Katz.

NEYRA, Hugo (2001). *El mal peruano*. Lima: Sidea.

PORTANTIERO, José Carlos (1979). Gramsci y el análisis de coyuntura (algunas notas). *Revista Mexicana de Sociología* (41:1), pp. 59-73, México DF.

PORTOCARRERO, Gonzalo (2002). *Las relaciones estado-sociedad en el Perú: un examen bibliográfico*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Ciencias Sociales.

PORTOCARRERO, Gonzalo; Valentín, Isidro; Irigoyen, Soraya (1991). *Saca ojos, crisis social y fantasmas coloniales*. Lima: Tarea, Asociación de Publicaciones Educativas.

REÁTEGUI, Félix (2009). *El sistema político durante el proceso de violencia. Selección de textos del Informe Final de la CVR*. Lima: Idehpucp.

RÉNIQUE, José Luis (2004). *La batalla por Puno. Conflicto agrario y nación en los Andes peruanos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Sur y Centro Peruano de Estudios Sociales.

ROBIN, Corey (2009). *El miedo. Historia de una idea política*. México DF: Fondo de Cultura Económica.

RUBIO, Marcial (1999). *Estudio de la Constitución Política de 1993*. Tomo IV. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

SALCEDO, José María (1990). *Tsunami Fujimori*. Lima: La República, Arte y comunicación.

SARTORI, Giovanni (1980). *Partidos y sistema de partidos. Marco para un análisis*. Madrid: Alianza Editorial.

SARTORI, Giovanni (2003). *¿Qué es la democracia?* México DF: Taurus.

SCHMITT, Carl (2007). *La dictadura*. Madrid: Alianza Editorial.

TANAKA, Martín (1998). *Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios peruanos.

TUESTA, Fernando (editor) (1997). *Los enigmas del poder, Fujimori 1990-1996*. Lima: Fundación Friedrich Ebert.

TUESTA, Fernando (2001). *Perú político en cifras. 1821-2001*. Lima: Friedrich Ebert Stiftung.

UCEDA, Ricardo (2004). *Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército Peruano*. Lima: Planeta.

VERDERA, Francisco (1994). *El mercado de trabajo de Lima Metropolitana*. Documento de Trabajo 59. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

WEBER, Max (2004). *La política como profesión*. Madrid: Espasa Calpe.

WEBER, Max (2007). *La ciencia como profesión. La política como profesión*. Madrid: Espasa Calpe.

WEYLAND, Kurt (1997). Neopopulismo y neoliberalismo en América Latina: afinidades inesperadas. *Pretextos* 10. Lima.

ZEGARRA, Luis Felipe (1999). El decenio de Fujimori. *Quehacer* 120, pp. 30-31. Lima.

Prensa

Revistas

- *Caretas*: <http://www.caretas.com.pe>
- *Debate*
- *Ideele*
- *Quehacer*: <http://www.desco.org.pe/qh/qh-in.htm>
- *Semanario Cambio*

Diarios

- *Diario Oficial El Peruano*: <http://www.editoraperu.com.pe>
- *El Comercio*: <http://www.elcomercioperu.com.pe>
- *Expreso*: <http://www.expreso.com>
- *Gestión*: <http://www.gestion.com.pe>
- *La República*: <http://www.larepublica.com.pe>
- *El Diario*

Boletín

- *Resumen Semanal (DESCO)*: <http://www.desco.org.pe>